

# **YO NO ME CAI DEL CIELO**

*TRAYECTORIA IDENTITARIA DE LA ECONOMÍA  
POPULAR EN ARGENTINA*

**Manuel Martínez Santacroce**



# **YO NO ME CAI DEL CIELO**

*TRAYECTORIA IDENTITARIA DE LA ECONOMÍA  
POPULAR EN ARGENTINA*

# **YO NO ME CAI DEL CIELO**

*TRAYECTORIA IDENTITARIA DE LA ECONOMÍA  
POPULAR EN ARGENTINA*

**Universidad Nacional de Villa María**

Instituto Académico-Pedagógico de Ciencias Sociales

Alumno: MARTÍNEZ SANTACROCE, Manuel

Director: DAÍN, Andrés

Co-Director: RENYARES, Juan Manuel

**Córdoba, febrero de 2019**

# Agradecimientos

En primer lugar, a las y los miles de argentinos/as que lucharon e hicieron posible el sueño de una Universidad pública, laica y gratuita en nuestro país. Como primera generación universitaria, agradecer a esas personas que volvieron posible semejante privilegio,

A la Universidad Nacional de Villa María, en particular a docentes y trabajadores/as de la Sede Córdoba,

A mi vieja y mi viejo, imprescindibles desde todo punto de vista a lo largo de este trayecto,

A docentes de la secundaria, quienes se encargaron de incomodarme lo suficiente para despertar un espíritu crítico,

A Andrés Daín, por motivar intereses académicos e incentivar permanentemente la creatividad desde el compromiso,

A Juan Reynares, por el acompañamiento crítico, entusiasta y tenaz en el proceso de escritura de este Trabajo, fundamental para su concreción,

A Hugo Serra, por su trabajo incansable, militante y académico, en la organización de los trabajadores de la economía popular,

A amigas y amigos, compañeros de vida y militancia,

A Cami, por el enorme cariño y la paciencia desinteresada en todo el proceso de investigación y escritura,

A Cutral-Có, escuela de fanatismo y humanidad en tiempos violentos de enorme ligereza.

# Índice

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Agradecimientos.....                                                                    | 5  |
| Índice.....                                                                             | 6  |
| Fundamentación del tema elegido.....                                                    | 8  |
| Argentina neoliberal.....                                                               | 8  |
| Estructura general del Trabajo.....                                                     | 10 |
| <br>Capítulo I – ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL.....                                  | 12 |
| Antecedentes.....                                                                       | 12 |
| De izquierda a derecha: la economía popular en perspectiva.....                         | 16 |
| Marco referencial.....                                                                  | 18 |
| Hacia un abordaje político-ideológico del fenómeno.....                                 | 20 |
| Dislocación y antagonismo.....                                                          | 23 |
| Estado y mercado en Foucault: el neoliberalismo más allá del liberalismo económico..... | 24 |
| <br>Capítulo II – YO NO ME CAÍ DEL CIELO.....                                           | 27 |
| Construir neoliberalismo.....                                                           | 27 |
| Fantasmas de la historia argentina.....                                                 | 30 |
| Emergencia de un gigante.....                                                           | 32 |
| Institucionalizar cambios estructurales.....                                            | 32 |
| Conclusiones.....                                                                       | 34 |
| <br>Capítulo III – YO CANIBAL.....                                                      | 36 |
| Introducción.....                                                                       | 36 |
| El trabajo.....                                                                         | 37 |
| Sacralizar el mercado: irresponsabilización y culpa.....                                | 38 |
| Antagonismos.....                                                                       | 40 |
| Mujeres y jóvenes organizados en el barrio por trabajo digno.....                       | 42 |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| El movimiento piquetero: la potencia de un método y la orfandad de un proyecto.....                               | 44 |
| No fue magia: entre la potencia destituyente y los debates instituyentes del movimiento piquetero hacia 2001..... | 46 |
| Conclusiones.....                                                                                                 | 51 |
| <br>Capítulo IV – EL TESORO DE LOS INOCENTES.....                                                                 | 53 |
| Introducción.....                                                                                                 | 53 |
| Neodesarrollismo.....                                                                                             | 55 |
| Circuitos entre el tren, el avión y las chancletas.....                                                           | 57 |
| ¿Dignidad o consumo?.....                                                                                         | 59 |
| Ni patrones, ni bancos, ni ahorros.....                                                                           | 61 |
| Paradojas del neoliberalismo.....                                                                                 | 63 |
| Gubernamentalidad, discurso y condiciones de posibilidad para la organización de lxs excludxs.....                | 65 |
| La audacia y el cálculo: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.....                             | 69 |
| La unidad de lo múltiple (o “cómo trabajar políticamente la emergencia de un sujeto diverso”)...                  | 71 |
| <br>Capítulo V – REFLEXIONES FINALES.....                                                                         | 75 |
| Una trayectoria vertiginosa.....                                                                                  | 75 |
| La economía popular desde una ontología política de lo social.....                                                | 77 |
| Los límites son del pueblo: jacobinismo o poder popular.....                                                      | 79 |
| <br>Bibliografía -.....                                                                                           | 83 |

# Fundamentación del tema elegido

## Argentina neoliberal

En la década de 1980, en Latinoamérica comenzaron a sentirse las consecuencias de las transformaciones económicas aplicadas con la ofensiva continental orquestada por los Estados Unidos, el “Plan Cóndor”. El giro hacia una política de apertura económica, desregulación financiera, privatizaciones y subordinación vía deuda pública en casi todos los países latinoamericanos, tarea que requirió en la mayoría de los casos la imposición de gobiernos de facto (articulando el poder económico nacional y transnacional, el poder eclesiástico, sectores de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas), condujo, en el plano macroeconómico, a una acentuación de la oferta como estrategia oficial por sobre la demanda. La actualización del liberalismo económico en un sistema-mundo global interconectado como el que se fue gestando luego de la Segunda Guerra Mundial, llevó a que el lugar de los países latinoamericanos en el intercambio global sea el de exportador de materias primas, papel que (en mayor o menor escala) había sido cuestionado por el incipiente desarrollo del sector industrial desde mediados de la década de 1940. Las políticas gubernamentales, entonces, estuvieron dirigidas a fomentar la producción de materias primas para su exportación, al tiempo que la producción manufacturera nacional fue desestimada, ponderando el ingreso indiscriminado de importaciones. Las consecuencias de ello fueron disímiles según cada País, incluso según cada territorio al interior de una Nación (Rapoport, 2018). En el caso argentino, la hiperinflación característica de la década de 1980 logró estabilizarse a principios de los 90. Sin embargo, los antidotos que permitieron su estabilización (flexibilización laboral, liberación de importaciones, endeudamiento externo, venta y privatización de empresas públicas, etc...) fueron en gran medida los causantes de crecientes niveles de desigualdad y desempleo, y con ello de la revuelta popular del año 2001 producto de la crisis social y política en la que quedaba inmerso el País (*Ibid.* 2018).

Fue durante la larga noche neoliberal, cuando la voz del sector desocupado no contaba porque su condición era suficiente para volverlo prescindible, que se gestaron diversos modos de hacer en la economía de la sobrevivencia. El neoliberalismo transformaba la estructura económica del país, generando un porcentaje superior al 20% de la población desocupada, alterando las formas de generar ingresos de ese sector excluido, obligado a ingeniársela por fuera de la “formalidad”, esto es, más allá de la relación patrón-obrero tradicional. La economía argentina se transformaba sensiblemente y, en ese proceso, la pragmática popular gestaba, con sus propias herramientas, nuevas dinámicas socioeconómicas, nuevos mercados y nuevas organizaciones que las nucleaban.

En un país con una tradición obrerista tan arraigada (Svampa & Pereyra, 2003), el proceso de “descolectivización” inaugurado con las reformas neoliberales tuvieron implicancias decisivas en la

configuración del entramado social argentino. Si bien este proceso comenzaría a mediados de los 70' con las políticas instauradas por la última dictadura cívico-militar, coincidimos con Soldano (Soldano, 2011), Svampa y Lopez y Beccaria (Beccaria & Lopez, 1996) en que las implicancias más importantes sobre la formación social argentina se sentirían recién a comienzos de la última década del Siglo XX. El desempleo estructural (Merlinsky, 2002) propio de la década, conduciría a muchas familias con miembros despedidos del sector formal del trabajo a generar estrategias de sobrevivencia. Una buena porción de la población terminaría creando alternativas económicas por cuenta propia, imposibilitada de integrar el mercado "formal" de trabajo. El desempleo, como propone pensarlo Kessler, se volvía una "epidemia": si bien los riesgos de caer en esa condición eran comunes a la gran mayoría de la población, los riesgos aparecen como des-socializados, esto es, "(...) deben ser resueltos individualmente en la generación de estrategias de reinserción al mercado" (Soldano, 2011). Este es, particularmente, el nudo problemático que buscaremos abordar: ¿Era evidente que, ante los crecientes despidos, se expandirían opciones económicas alternativas al sector formal?; ¿Qué sentidos propios del discurso neoliberal hicieron mella en la opción económica popular? En definitiva: ¿Qué características asume y qué implicancias tiene el discurso neoliberal en la emergencia de la economía popular?

La literatura que aborda la cuestión coincide con la "hegemonía neoliberal" en Argentina a principios de los noventa. Sin embargo, la economía popular aparece como un espacio homogéneo, aislado e independiente de aquella hegemonía: es mediante esta operación que puede aparecer el sector como una trinchera, como "pura resistencia" frente al discurso hegemónico. Nosotros creemos que la hegemonía neoliberal permea incluso las esferas de lo social que a priori parecen resistirla, estableciendo las coordenadas de sentido predominantes en que las prácticas del trabajo informal y emprendedorismo se llevan a cabo. Nuestra hipótesis es que el neoliberalismo, como discurso que dislocó formas sedimentadas de organización social habilitando la emergencia del sector de la economía popular, interesa para explicar la deriva organizacional del movimiento piquetero que estructuró al espacio y la génesis del proto-sindicato surgido en las postrimerías del kirchnerismo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). A lo largo del trabajo, discurriremos entre las características adquiridas por el sector a lo largo del período en cuestión y las implicancias de discursos y políticas específicas en él, a partir de una caracterización del neoliberalismo que pretende complementar, justamente, al enfoque discursivo con una mirada de registro a nivel gubernamental. El recorte temporal realizado, entonces, va desde principios de la década de 1990, cuando crece exponencialmente el porcentaje de desocupados/as "emergiendo" la economía popular en Argentina, hasta el lanzamiento público de la CTEP, en 2011, como "punto de llegada" de la organización proto-sindical del sector. El nacimiento de la CTEP significó el agrupamiento nacional más importante del sector excluido de la economía formal desde que los guarismos de desempleo en Argentina llegaron a niveles "estructurales", como señaláramos previamente. A su vez, habilitó una creciente (y aún sostenida) institucionalización de un sujeto excluido, forjando así una identidad novedosa que busca desprenderse de las carátulas del "desempleado y/o del peyorativo "piquetero", movimiento que buscaremos analizar en detalle a lo largo del trabajo. Esa es la razón del corte temporal establecido. Sin

embargo, esos límites arbitrarios serán constantemente perforados, a modo argumentativo y reflexivo, a lo largo del trabajo.

### **Estructura general del Trabajo**

El objetivo general es el de caracterizar la trayectoria identitaria de la economía popular en Argentina, como fenómeno que emerge a partir de la enorme población de nuevos desocupados en los noventa y se sostiene como fracción marginal de la estructura productiva nacional en la etapa “posneoliberal”, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Para un abordaje que dé cuenta de la especificidad del sector, es que nos remontamos al momento de su emergencia: la población excluida del mercado laboral formal que genera por sus propios medios estrategias económicas de subsistencia. Ese es el objetivo central del Trabajo, tarea desarrollada desde un enfoque postestructuralista, donde reflexionar sobre las condiciones de posibilidad para la emergencia de la economía popular, es la clave interpretativa para dar cuenta de los procesos y disputas eminentemente políticas en la construcción y representación del sector. Desde esa reconstrucción, nos permitimos iniciar una serie de problematizaciones que hacen a las características del sector en la etapa “posneoliberal”, ubicando la conformación del proto-sindicalismo de la CTEP como punto de llegada en esta trayectoria.

En el primer capítulo, a modo introductorio, buscamos justificar la elección del tema a partir de una pequeña historización que de cuenta del contexto general de emergencia de la economía popular en Argentina. A su vez, mencionamos algunos antecedentes que reflejan distintas ópticas desde donde se buscó explicar la especificidad del fenómeno en Argentina y Latinoamérica. Finalmente, nos situamos epistemológicamente y justificamos por qué elegimos a la Teoría Política del Discurso (TPD) como estrategia para abordar la trayectoria identitaria de la economía popular. De manera complementaria, utilizamos el concepto de “gubernamentalidad” tomado de Foucault, para comprender características específicas del neoliberalismo como tecnología de gobierno.

En el segundo capítulo, pretendemos justificar la emergencia de la economía popular como sintomática de una hegemonía neoliberal. El consenso generalizado respecto de este “clima de época” nos permite construir la hipótesis de que, fundada en una disputa ideológica en torno al “trabajo” desatada a partir de la última dictadura cívico-militar, la multiplicación de alternativas económicas individuales ante el incesante desempleo es el punto de llegada y consumación de una victoria política-ideológica de los sectores dominantes. Este corrimiento epistemológico respecto de otras explicaciones del fenómeno nos permite reconocer a la economía popular como emergente de políticas macroeconómicas tendientes a incrementar el desempleo y, al mismo tiempo, como fenómeno posibilitado por un consenso novedoso respecto al lugar del individuo en sociedad, su función en el mercado, el rol del Estado, etc.

En el tercer capítulo, caracterizamos al sujeto de la economía popular a partir de algunos rasgos fundamentales, que den cuenta tanto de la hegemonía neoliberal que sobredetermina las construcciones identitarias, como también el proceso mediante el cual el sector más excluido de la población argentina en

los noventa comienza a organizarse por trabajo. A partir de recuperar fuentes secundarias, buscamos reconocer el pasaje entre la multiplicación de salidas individuales ante el desempleo generalizado y la creciente organización colectiva. En ese proceso, reconocemos una politización del desempleo que habilita un desplazamiento respecto de la responsabilidad del Estado, a partir de la construcción de un antagonismo de implicancias sensibles para el futuro del movimiento piquetero.

Por último, en el capítulo cuarto buscamos trazar algunos conceptos generales de la economía popular durante la etapa posneoliberal. Si durante los noventa “emerge” este sector, como novedad en la formación social argentina, entre 2003 y 2015 no solamente no desaparece, sino incluso crece su peso relativo en la economía local. ¿Cómo explicar dicha persistencia? ¿Es este un indicador que confirma un número importante de continuidades entre ambos modelos?; en definitiva: ¿Qué características asume la economía popular durante la etapa? Estas son algunas de las preguntas guías de este último apartado, ubicando a la conformación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) como punto de llegada en la unidad reivindicativa de organizaciones del sector. Con el espíritu de una reflexión final, pretendemos esbozar una serie de lineamientos generales y preguntas disparadoras que orienten investigaciones posteriores, para un abordaje político-ideológico de la economía popular en la actualidad y en perspectiva de futuro.

La idea de trabajar la trayectoria identitaria de la economía popular encuentra sentido en clave explicativa y política: dicho recorrido nos permitirá reconocer las condiciones de posibilidad y disputas de sentido que configuraron la identidad del sector, habilitando de este modo la construcción de hipótesis respecto de aspectos centrales de su derrotero. La forma de trabajar la temática nos permite manejar escenarios de ambigüedad, escapando de explicaciones racionalistas y dicotomizantes, mostrando la complejidad del fenómeno en toda su dimensión. Rastrear la sobredeterminación neoliberal para reconocer ambigüedades en la economía popular, a nuestro criterio, vuelve posibles ciertas interpretaciones que quisiéramos justificar a lo largo del presente Trabajo Final de Grado.

# Capítulo I

## *Antecedentes y marco referencial*

### Antecedentes

El reconocimiento de las diversas prácticas de supervivencia como formas de trabajo, a nivel institucional, sucede en la década de 1970, cuando el antropólogo Keith Hart introduce la categoría de “informalidad” para caracterizar la economía de un pueblo del norte de Gambia. Como señalara en una entrevista reciente, el objetivo de hablar de economía informal “*surgió del deseo de comunicarme con economistas del desarrollo a inicios de los 70 (...)*” (Rabossi, 2014). La desocupación en la zona de los “*frafras*” (como se denomina a los habitantes de la población gambesa) era tan grande que muchos de sus pobladores creaban nuevas alternativas, ya sea créditos entre familiares, la duplicación del trabajo asalariado “(...) o diversos medios informales para garantizar el ingreso” (*Ibid.* 2014). Para poder dialogar con la ortodoxia, Hart introducía una terminología que, a partir de la negación, refería a la forma naturalizada de pensar al mercado. En ese sentido, todo aquello que no respondía a las relaciones sociales “reconocidas” formalmente, era incluido en el campo de la economía informal. La institucionalización del término cobró dimensión global cuando, en el año 1973, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acuñó la noción de trabajo informal aludiendo a prácticas propias de países en vías de desarrollo.

Sin embargo, la negación que iba unida a su denominación fue cuestionada por numerosos actores. Los primeros en hacerlo provenían de la escuela “sustantivista”, denominación para un grupo de antropólogos en el marco del debate frente a “formalistas”. Nos referimos a la polémica apuntalada por el filósofo y economista húngaro Karl Polanyi, cuestionando el carácter aislado de “lo económico” respecto del resto de formas de socialización e interacción en una sociedad. Concretamente, lo que quiere cuestionar Polanyi es el carácter universal y apriorístico que la intelectualidad ortodoxa le asigna al mercado. Los formalistas ven al mercado como el medio más eficiente para la asignación de recursos, al individuo como sujeto maximizador de beneficios y, en consecuencia, utilizan al individualismo metodológico en sus abordajes teóricos. Polanyi cuestiona el carácter “dado” asignado por la bibliografía canónica al mercado, como forma de atacar la raíz del razonamiento que explica el resto de los presupuestos previamente enumerados. En otras palabras, la tarea de Polanyi es la de mostrar el arraigo (“*embeddedness*”) de la economía en las sociedades, en el sentido de que toda población supone algún tipo de organización e institucionalización económica, “incrustada” y por lo tanto permeada por las construcciones objetivas y subjetivas de lo clásicamente definido como “no económico”. No hay una forma universal de mercado por fuera de “lo social”, sino una tarea política de pretender naturalizar una forma

(específica y situada) de hacer en el mercado, con sus reglas, jerarquías y valores performativos, y mostrarla como universal.

La economía, desde esta óptica y según lo expuesto, deja de ser el mercado. En su lugar, el mercado es una forma posible de hacer en la economía. Al mismo tiempo, las formas económicas no pueden pensarse como desprendidas del ordenamiento social en el que se desarrollan: hay una estructura en donde “lo económico” se inserta, esfera solo delimitable con fines analíticos. En este punto, al preguntarnos concretamente “¿Qué es la economía?” contrastando estas dos concepciones brevemente reseñadas, podemos ver cómo la definición tradicional de LeClair<sup>1</sup> supone cierta identidad entre la economía y el mercado, al tiempo que presupone el carácter maximizador del individuo. Los sustancialistas van a cuestionar aquí la racionalidad como modelo explicativo universal de la acción económica, el postulado de la escasez como condicionante de la acción racional y la reducción de las prácticas económicas a las de la economía de mercado. De esta manera, una gramática semejante cuestiona “de raíz” cualquier pretensión de catalogar como “informal” cualquier forma de hacer en la economía.

En América Latina, a lo largo de la década de 1980, algunos actores comienzan a teorizar sobre el sector “informal” de la economía, pero desde presupuestos distintos al de la OIT. El chileno Luis Razeto Migliaro edita en 1983 el texto “Las organizaciones económicas populares”, donde cuestiona, a su vez, el carácter de “informalidad” en tanto negativiza y presupone irregularidades jurídicas en todas sus expresiones. Además, allí sostiene que el carácter de “lo popular” si bien se encuentra sujeto a diversas interpretaciones, en este caso refiere a “(...) los sujetos que lo organizan, que en este caso son precisamente los sectores más empobrecidos (...)” (Razeto, 2002). Así, comenzaba a gestarse una denominación que vinculaba procesos globales de dependencia entre naciones hegemónicas y subdesarrolladas, con las formas de practicar la subsistencia por los sectores urbano-marginales producto de la reestructuración neoliberal. El economista argentino Coraggio presenta en 1992 la ponencia “Del sector informal a la economía popular: un paso estratégico para el planeamiento de alternativas populares de desarrollo social”. Allí esgrime por primera vez el concepto de economía popular en forma propositiva para pensar alternativas para los sectores empobrecidos. Su abordaje parte de la agencia de los trabajadores desde el marxismo, diferenciando al proletariado clásico imaginado por el propio Marx de los sujetos excluidos devenidos en “trabajadores por cuenta propia”. Su conceptualización señala, por omisión, la imposibilidad del sector para generar excedentes en tanto “dependen para su reproducción de la realización ininterrumpida de su fondo de trabajo” (Coraggio, 1996).

Desde una perspectiva macroeconómica, el marxista Núñez Soto vincula los procesos de desestructuración neoliberal con la emergencia de vastos sectores urbanos que, como medio de sobrevivencia, recurren a actividades alternativas. Así, señala que los “trabajadores por cuenta propia” se

---

<sup>1</sup> “La economía es el estudio de la economización de los medios. La economización consiste en la asignación de los recursos escasos entre fines alternativos” (Noceti, 2013)

diferencian centralmente del asalariado por la relación social de “explotación indirecta” respecto de la economía capitalista. Núñez Soto realiza un esfuerzo por identificar a la población excluida del neoliberalismo con las dinámicas propias de un mundo con naciones explotadoras y otras dependientes. De allí que encuentre como especificidad de la fase oligopólica del capitalismo financiero la condición de trabajadores que:

*“(...) sufren una explotación por parte de los capitalistas a través de su participación en el mercado como consumidores, dado que expropiados de los medios para la producción de los artículos que cubran sus propias necesidades necesitan recurrir a mercado oligopolizados para adquirirlos, a la vez que no participan del mercado como vendedores de fuerza de trabajo.” (Serra, 2017)*

Por último, nos interesa reseñar brevemente el reciente trabajo publicado por Gago denominado “La razón neoliberal”, material importante para la planificación y problematización en nuestro abordaje. Allí, la autora pone en juego un exhaustivo trabajo de campo desde donde cuestiona abordajes académicos que ignoran la pragmática popular como lógica económico-cultural de la economía popular, como hibridación de saberes comunitarios y prácticas “calculadoras” típicas del mercantilismo más individualista: “(...) formas múltiples de reproducción y producción de la vida social “bajo pautas diversas de respeto, colaboración, dignidad, cariño y reciprocidad, no plenamente sujetos a las lógicas de acumulación del capital aunque agredidos y muchas veces agobiados por ellas” (Gago, 2014). Los saberes comunitarios se mezclan y armonizan de manera desprolija con formas de hacer propias del neoliberalismo, forjando prácticas propias. De ello se desprende el cuestionamiento a una supuesta simplificación del sector explotado. No hay proletarianización en ese sentido, sino que la creciente inclusión de sectores marginales a las economías populares supone una complejización creciente de la clase trabajadora, donde los vínculos se forjan a partir de relaciones de parentesco y la estabilidad laboral depende de la perdurabilidad de esos lazos antes que de una ecuación individual económica.

En sociedades excluyentes como las nuestras, propias de naciones dependientes en un capitalismo tan global como financiero, los sectores de la economía popular aplican el cálculo como parte de una pragmática vitalista. La propuesta de Gago radica en terminar con lecturas románticas del sector evitando, al mismo tiempo, caer en conclusiones simplistas, donde la reproducción de lógicas neoliberales no conduzca a asumir los principios individualistas en que la teoría se funda, sino para pensar la capacidad de sedimentación de la “razón” neoliberal, al mezclarse con prácticas populares diversas. Pensar la especificidad que allí se manifiesta tiene sentido si asumimos que la propia “razón” neoliberal no es mera reproducción de un aparato estatal contaminado por el sector privado que unilateral y eficazmente construye subjetividad “desde arriba”, sino de reconocer un proceso “hojaldrado” que no tiene sentidos pre-definidos y re-significan sentidos en disputa. Si un objetivo es pensar (con el sector de la economía popular como “muestra”) la permanencia de lógicas neoliberales en nuestras sociedades latinoamericanas entre los noventa y un comienzo de siglo de gobiernos posneoliberales, la crítica radica centralmente en el exceso de estatismo a la hora de pensar al modelo neoliberal.

El aporte de Gago, a su vez, radica en una explicación estructural de la economía popular como parte constitutiva del modelo económico neo-desarrollista propio de los gobiernos posneoliberales. Sobre este punto trabajaremos más adelante, simplemente adelantar que de dicha interpretación se desprende el reconocimiento del sector de la economía popular como parte de una nueva topología (dislocada, diríamos desde nuestro lenguaje) de la formación social argentina posterior a los noventa. Si bien no coincide ni el marco onto-epistémico desde donde realizamos nuestra investigación ni las conclusiones extraídas con el abordaje de la autora, dicha lectura fue de vital importancia para el trabajo aquí presentado.

Según lo expuesto, podríamos aseverar que la noción de economía popular irrumpe en Latinoamérica como excediendo (y, por lo tanto, cuestionando) los límites fijados por definiciones precedentes. Se presenta como un exceso ante la definición de economía informal en tanto quita el carácter negativo de la misma, al tiempo que la vuelve “positiva” al inscribir al sujeto protagonista en la conceptualización, que son los sectores empobrecidos, los “sectores populares”. Excede también los límites de la denominada “economía social y solidaria”, a partir de reconocer la especificidad del sector situada en la exclusión neoliberal: en este sentido, sus condiciones económicas y sociales (vinculadas al creciente desempleo, desprotección estatal y los índices de pobreza más altos de la joven historia de los países del continente) dificultan cualquier concepción romántica del sector, como vinculadas a lógicas solidarias o cooperativas. Referenciamos dicha tensión, en tanto creemos que refleja las consecuencias prácticas de abordajes teóricos realizados desde epistemologías que: o bien presuponen las preferencias de los sujetos o bien asumen cierta linealidad entre fenómenos económicos y sus impactos en la formación social. Nuestro abordaje no sólo viene a cuestionar estas definiciones, sino fundamentalmente a buena parte de la bibliografía que construye un orden causal para explicar el fenómeno, apareciendo las prácticas populares económicas como producidas por (y, por lo tanto, como epifenómenos de) transformaciones estructurales.

En ese sentido, nos proponemos correr los fundamentos onto-epistémicos que se encuentran en la base de dichas interpretaciones, para proponer una lectura que, otorgándole centralidad al discurso como mediación necesaria de lo social, focalice en las condiciones de posibilidad para la expansión de esas “economías barrocas” (Gago, 2014) en la década de los noventa. Como veremos en adelante con mayor nivel de detalle, hablamos de un enfoque discursivo en tanto concebimos a las prácticas (lingüísticas y extralingüísticas) como significantes, como no-poseedoras de un sentido propio asequible al ojo del investigador/a. Desde este enfoque, nos centramos en las identidades (desprovistas de esencia, es decir, como construcciones políticas), como resultantes de procesos provisorios de identificación en conjuntos relacionales de diferencias, que de manera precaria (temporalmente situada) se estabilizan mediante la hegemonización del signifiante. Asumimos la denominación del sector como economía popular no sólo porque es el título que organizaciones sociales y políticas utilizan en la actualidad para nombrarlos, sino también porque su vínculo con el contexto neoliberal nos permite hablar de “surgimiento” o “emergencia” de un elemento particular en la formación social argentina de fines del Siglo XX. Además, porque creemos

que ese carácter de “exceso” que mencionábamos, habilita justamente a problematizar los contornos, los límites de la definición. Problematizar las condiciones de posibilidad de la emergencia del sector de la economía popular en clave discursiva, entonces, encuentra sentido si asumimos una ontología política de lo social: las formas “populares” y novedosas de hacer en la economía no son exclusivamente producto de un sistema económico que determina las preferencias y posibilidades de los sujetos, sino que intentaremos mostrar cómo el carácter sobredeterminado de la economía popular funciona como superficie de inscripción para volver posible (o “deseable”) dichas alternativas. Si constatamos esto, podremos confirmar la tesis de que las prácticas propias del sector de la economía popular se encuentran atravesadas “de nacimiento” por sentidos característicos del discurso neoliberal, a contramano de la literatura romántica que dota de un potencial “a priori” emancipador al sector, pero también distanciándonos de cierto marxismo estructuralista que, en su imposibilidad de explicar coherentemente al fenómeno según su arsenal teórico, (des)califica las lógicas propias de la economía popular al identificarlas con el clientelismo, como efecto de la intervención estatal (que se interpone en el curso natural hacia una creciente simplificación de lo social). Veremos esto con más detalle en el siguiente apartado.

### **De izquierda a derecha: la economía popular en perspectiva**

¿Cómo explican y de qué manera caracterizan al fenómeno de la economía popular sectores vinculados a la izquierda tradicional? Cabe decir que existe una producción teórica y periodística bastante acotada al respecto desde estos espacios, lo que significa ya un síntoma de la importancia otorgada al caso.

Desde esta óptica, aparece como denominador común una identificación del nacimiento y proliferación de prácticas de economía alternativas *desde* el año 2001 e *impulsadas* por organizaciones sociales. Es decir que su emergencia aparece directamente vinculada a la crisis del modelo neoliberal y motorizada por sectores organizados. A su vez, figura muchas veces el Estado como beneficiario e impulsor de estas iniciativas, tarea que redundaría en un beneficio bifronte: para sectores del capital en tanto se institucionaliza la precarización laboral y, para el mismo gobierno, ya que “las cooperativas de trabajo, impulsadas desde el Estado, fueron un gran instrumento de cooptación que quebró a varios movimientos piqueteros otrora combativos” (Rath, 2016). El Estado, entonces, es causa y, a la vez, cómplice de la economía popular. Detrás de la proliferación de formas de hacer en la economía que resultan alternativas al vínculo tradicional patrón-obrero, encontramos a capitalistas planificando, de manera conjunta con el Estado, un dispositivo funcional a los intereses compartidos (si la doctrina permite dicha “tautología”). Tal es el carácter artificial y funcional a los intereses de clase de este sector, que afirman: “La concepción de una “economía popular” está basada en una entelequia: un Estado burgués que se reformule y preserve medios de producción “en manos de los sectores populares”” (*Ibid.* 2016).

El sector de trabajadorxs de la economía popular es el diseño a medida de los sectores dominantes para contener la miseria: “(...) los movimientos sociales que asumen acríticamente el asistencialismo y le han facilitado al macrismo una gigantesca plataforma de trabajo precario -a eso llaman “economía popular”-” (Pitrola, 2016). No es casualidad, en este aspecto, la utilización sinonímica con otras denominaciones, precedentes a la de economía popular y, por lo tanto, ignorando el componente regional y vinculado a los sectores populares excluidos que mencionábamos previamente: “(...) detrás de la denominación rimbombante de “economía social” o “solidaria” estamos ante una variante de trabajo degradado y precario” (Obrera, 2012). Por último, referenciar la orientación que, coherentemente con el análisis que proponen, deslizan para abordar políticamente el fenómeno: “Sólo a partir de la crítica a la autogestión podremos continuar la lucha para arrancar la expropiación definitiva de las fábricas en manos de sus trabajadores y consolidar la gestión obrera -o sea que es inseparable de una lucha anticapitalista de alcance general” (*Ibid.* 2012).

Muchas de las características aquí detectadas son reproducidas, de manera asistemática y sin un bagaje teórico explícito, por numerosos actores en medios de comunicación. Sin embargo, el sentido práctico de un abordaje que muestre otros aspectos del fenómeno no solo radica en discutir con esas posiciones, sino fundamentalmente en la construcción de un enfoque que, contrario a la orientación citada previamente, potencie las herramientas organizativas problematizando las características que asume el sector, sus representantes y el vínculo con el Estado. En este marco, nos proponemos también referenciar de qué manera abordan la temática sectores vinculados al liberalismo político.

Particularmente, interesa incorporar la lectura de Hernando de Soto, autor peruano que en 1986 editaría “El otro sendero: la revolución informal”. Desde un abordaje empírico del fenómeno en la ciudad de Lima (donde, por ejemplo, en la época de su edición el 95% del transporte urbano era garantizado desde la informalidad), de Soto construye una hipótesis tan particular como novedosa para su época, de manera tal que su abordaje preserva relevancia para pensar soluciones al mundo de la economía popular en la actualidad. El autor peruano entiende que la informalidad (definiendo a esta como “sociedad paralela y, en muchos sentidos, más auténtica, trabajadora y creativa que la que usurpa el título de país legal” (De Soto Polar, 1987), no es otra cosa que la manifestación de una reacción frente a la condena a la marginalidad que sufren ciertos sectores de la población a raíz de un determinado funcionamiento del Estado y que, por tanto, no se trata de eliminar ese sector sino justamente de potenciar el ethos emprendedor que funda la “revolución de la informalidad”. Señala de Soto que “la solución ideal sería retirar obstáculos y convertir los estímulos políticos en facilidades legales para liberar y multiplicar las energías empresariales de los ambulantes, y para que dentro del proceso competitivo en que se encuentran inmersos puedan explotar al máximo sus habilidades y servir más eficazmente a la comunidad” (*Ibid.* 1987).

Desde esta visión, el Estado aparece no ya como el garante e impulsor de la existencia del sector como veíamos desde la izquierda, sino, por el contrario, como obstáculo para el libre desarrollo de fuerzas productivas emergentes. Concretamente, la institucionalidad que condena a la “economía informal”

funciona como dique de contención a la inventiva empresarial popular, ya que “(...) el comercio ambulatorio es un largo camino hacia la empresa privada” (Ibid. 1987). Curiosamente, los sectores populares que fundan esta “otra economía” evidencian una creatividad y potencialidad empresarial que es limitada por el Estado. Y, desde dicha óptica, existen en Latinoamérica grandes poblaciones de excluidos justamente debido a la existencia de Estados que ponen el acento en la construcción de una legalidad “redistributiva”: “de esta manera, centralización y burocratización resultan hijos del mismo padre, el Derecho redistributivo” (Ibid. 1987). En el Prólogo del libro, Vargas Llosa concluye al respecto: “lo fundamental es que este Estado recuerde siempre que antes de redistribuir la riqueza, hay que producirla” (Ibid. 1987).

En definitiva, desde el liberalismo emergen actores que, coherentemente con sus postulados antropológicos, tienden a comprender al fenómeno de la economía popular como el producto de un Estado distributivo. La tentación “populista” por poner el foco en la demanda antes que en la oferta termina por multiplicar la población marginada. Y acaso de manera obstinada, es el propio Estado el que luego contiene el impulso emprendedor que el “pueblo pobre” demuestra en el crecimiento de la economía informal.

Detrás de este último postulado creemos que subyace un presupuesto antropológico racionalista propio del liberalismo que, a lo largo de nuestra investigación, buscaremos cuestionar. A modo de síntesis, decimos que ese “ethos” emprendedor, si bien atravesado por lazos comunitarios diversos, no es un dato de la realidad que el Estado deba contemplar para su intervención, sino más bien el reflejo de una disputa de sentidos siempre políticamente construida. Si nuestra diferencia con los postulados provenientes de la izquierda tradicional responde fundamentalmente a una epistemología racionalista donde muchas características específicas del fenómeno son ignoradas, el distanciamiento con el liberalismo se funda en una antropología esencialista desde donde se anula cualquier análisis vinculado a la hegemonía para comprender dicho fenómeno. En el próximo capítulo, intentamos un abordaje político-ideológico que dé cuenta de las consecuencias prácticas de un giro epistemológico como el propuesto.

### **Marco referencial**

Identificar al neoliberalismo no solo como una práctica de Estado referida centralmente a lo macroeconómico es una tarea que se vuelve cada vez más recurrente en el debate de ideas del progresismo intelectual. El neoliberalismo es concebido, cada vez más, como una lógica política subsidiaria de un discurso relativamente simple y con fuerte arraigo en el sentido común de nuestra sociedad. Esta complejización en el abordaje del fenómeno contribuye a pensar de manera diferencial las condiciones de posibilidad para la emergencia de prácticas y discursos en las últimas décadas de hegemonía neoliberal.

Una nueva forma de interpretar al fenómeno del neoliberalismo exige re-pensar las causalidades históricas. Por ejemplo, con el caso de la emergencia de la economía popular como particularidad, existe

una tradición bibliográfica ampliamente difundida que vincula linealmente nuevas políticas macroeconómicas tendientes al libre comercio (apertura de importaciones, límites al intervencionismo estatal, venta de empresas públicas, etc...) con la aparición de unidades productivas de baja escala, dinamizada por el sector excluido de la economía formal. Muchas veces este sector de la economía es nominado como parte de la economía social y solidaria, operación que presupone ciertos rasgos comunitarios y anti-capitalistas en las prácticas populares de la “baja” economía, algo recientemente cuestionado por Gago, como vimos, en su obra “La Razón Neoliberal”.

Pero no solamente dicha línea causal es cuestionable a partir de lo previamente expuesto, sino que también podríamos preguntarnos por las condiciones de posibilidad de un sector como el de la economía popular, con el objetivo de no naturalizar tendencias históricas temporalmente situadas. En otras palabras, podríamos preguntarnos: ¿Era evidente que, ante la creciente exclusión del mercado formal tradicional, emergiera un sector que con sus propios medios resuelve sus urgencias económicas para la supervivencia? Desde el marxismo tradicional la respuesta es taxativa: allí donde las contradicciones entre capital y trabajo se agudicen, la colisión entre ambos sectores es inevitable. En particular, nos referimos a cierto marxismo ortodoxo que trabaja bajo el presupuesto de sujetos racionales, mirada que hace coincidir la población de trabajadores con el sector antagónico al “capital”. Sin embargo, acaso burlándose de sus tesis más clásicas, la historia no resultó tan previsible ni tendió a una creciente simplificación como suponían. El caso argentino refleja que se vendieron empresas estatales, la deuda externa creció exponencialmente, el desempleo (y, consecuentemente, la pobreza) se multiplicó, y sin embargo, el consenso neoliberal gozaría de muy buena salud hasta años posteriores al primer lustro de la década. ¿Cómo explicar que, al crecimiento masivo del desempleo, le sucedió la multiplicación de unidades productivas y desarrollos de emprendedorismo fuertemente individualizados y no la agudización del conflicto entre sectores del capital y trabajo?

Nuestra hipótesis, en sintonía con parte de la bibliografía preocupada por el fenómeno neoliberal en la década de los 90 argentina, es que el carácter hegemónico del discurso neoliberal funda los rasgos que va a adquirir este sector novedoso de la estructura societal del país. Es decir, no pensamos que el vínculo entre “neoliberalismo” y la economía popular sea de pura exterioridad, siendo ésta producto de aquél, sino que preferimos pensarlo como su condición de posibilidad. De esta manera, distanciándonos de posiciones racionalistas del sujeto, nos proponemos dar cuenta de la especificidad del neoliberalismo en Argentina, a través de la economía popular. Más aún, al cuestionarnos por las condiciones de posibilidad de esas transformaciones, pasamos a cuestionarnos también por los límites del propio significante “neoliberalismo”, en tanto intuimos que la proliferación de un discurso de características individualistas, opera como superficie de inscripción de ese arsenal de políticas macro, por lo que su especificidad responde a la construcción de un conjunto de símbolos que lo vuelven posible.

Para rastrear sentidos inherentes a ese discurso y conocer su alcance, es necesario previamente aclarar la utilización que hacemos de los conceptos “discurso”, “hegemonía” y, finalmente, cómo

conceptualizamos al neoliberalismo. Para ello, nos nutrimos fundamentalmente de guías teóricas como la Teoría Política del Discurso (TPD) de Laclau y Mouffe y una noción a nuestro criterio complementaria para pensar al fenómeno neoliberal, fundamentada por el filósofo francés Michel Foucault. Con ese bagaje, buscaremos acercarnos al fenómeno neoliberal en vistas a una explicación, desde una teoría de la hegemonía, respecto de la emergencia de la economía popular en Argentina.

### **Hacia un abordaje político-ideológico del fenómeno**

Para poder desarrollar nuestra investigación desde un abordaje discursivo recogemos un corpus teórico que tiene como base los planteos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Esta propuesta se nutre de diversas corrientes teóricas, que dotan de coherencia intelectual e intelegibilidad al lenguaje en cuestión. Someramente, podemos decir que la crítica nietzscheana a los fundamentos detrás de cualquier criterio de verdad habilitó postulados científicos que, sin pretensión de encontrar respuestas últimas, ahistóricas y universales, emprendan el camino de investigaciones epistemológicas más allá de todo esencialismo. En el campo de la lingüística, el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein reconoció el carácter contextual de toda significación en tanto el lenguaje sea interpretado como una práctica, siendo el uso del lenguaje aquello que explica su sentido. Saussure, lingüista que reconocería la distancia entre todo significante y su significado, posibilitaría un análisis estructuralista a partir de comprender el carácter a la vez diferencial (toda construcción de sentido es tal debido a no ser otras configuraciones posibles) y relacional (el acto de significación nunca es arbitrario, ya que se da siempre en un contexto determinado) del lenguaje, mostrando que este se constituye en “(...) un sistema en el cual ningún elemento puede ser definido independientemente de los otros” (Daín, 2011). Por último, la crítica de Jacques Derrida al autor estructuralista suizo en el campo del lenguaje, basada en el reconocimiento de la necesidad de límites en la estructura del lenguaje para posibilitar la lógica diferencial y, por lo tanto, reconociendo el carácter constitutivo de la exclusión en lo social, erigiéndose como uno de los padres del post-estructuralismo. Derrida permite pensar el hecho de que, para que haya significado tiene que haber límites en la estructura y, para que existan estos límites, tiene que haber exclusión. Lo excluido, entonces, constituye (en tanto se vuelve condición de posibilidad) al interior de la estructura. La importancia de compartir lo hasta aquí comentado sobre el autor francés, radica en que toda estructura de sentido evidencia su radical contingencia. Y, al mismo tiempo, el carácter necesario de una (relativa, en permanente movimiento) estructura. Veamos este punto con más detalle. Derrida reconoce un acontecimiento a partir de la crítica al abordaje estructuralista del antropólogo Levi-Straus: en un trabajo de deconstrucción, nos muestra cómo el concepto de “centro” de una estructura es un imposible. El centro vendría a funcionar, en el lenguaje estructuralista, como condición de posibilidad de la totalidad estructurada, pero el centro es, al mismo

tiempo, independiente de la estructura. Ese carácter “autónomo” del centro es lo que Derrida interpreta y va a significar como característica común a toda estructura: su centro tiene la forma de una falta. La pretensión de definir los límites de una totalidad, entonces, encuentra dificultades no por la pluralidad infinita y empírica ante la que se encuentra el sujeto cognoscente, sino porque “(...) la propia naturaleza del campo excluye la totalización” (*Ibid.* 2011). Debido a la necesaria existencia de una falta en la totalidad, cualquier signo que intente sustituir ese espacio viene por añadidura, en un movimiento de suplementariedad. “La sobreabundancia del significante, su carácter suplementario, depende, pues, de una finitud, es decir, de una falta que debe ser suplida” (Derrida, 1966). En la propuesta derrideana, el centro de la estructura no es un imposible por la pluralidad empírica e inagotable, sino justamente esta última es producto de la presencia de una ausencia: el centro como falta. El orden causal respecto de la propuesta “clásica” para pensar la estructuralidad de la estructura es invertido por Derrida, en un movimiento que auspicia nuevos enfoques onto-epistemológicos para las ciencias sociales.

Si con Saussure pudimos reconocer el carácter relacional de las identidades, en tanto el signo es un constructo diferencial pero nunca se desprende ni se deduce del ente existente, con Derrida podemos enfatizar el carácter contingente de esas identidades, debido a la ausencia de una totalidad con fronteras claras, siquiera susceptibles de ser nominadas, que establezcan un sentido fijo de los elementos en su interior. No hay identidad entre significado y significante, solo hay identidades construidas, pero tampoco son de una vez y para siempre, sino que se encuentran permanentemente amenazadas. Saussure nos muestra la importancia de las relaciones (y no de los elementos en sí mismos) a la hora de pensar las construcciones identitarias, siempre insertas en una estructura (en un sistema, en una totalidad fallida). La operación que más estabilidad supone es el olvido, naturalización de conceptos que los vuelve aparentemente evidentes<sup>2</sup>. De allí que nuestro lenguaje pueda funcionar como un cepillar a contrapelo de la(s) historia(s) oficial(es), utilizando, por ejemplo, las estrategias deconstructivas, genealógicas y mostrando el carácter performativo del lenguaje. Estas tres dimensiones son a modo ejemplar y se encuentran brevemente señaladas en un artículo (Gibson Graham, 2002), utilizado aquí para acercarnos al lenguaje post-estructuralista. Derrida habilita cuestionar el “(...) estatus ontológico de los fundamentos (...) de forma que la pluralización de los fundamentos es consecuencia de una imposibilidad radical” (Daín, 2011).

Las implicancias de la crítica post-estructuralista en un plano meramente lingüístico son susceptibles de hacerse extensivas al plano social si asumimos su carácter discursivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el acceso inmediato a la realidad social es imposible. Esta operación requiere, indefectiblemente, de una mediación discursiva/interpretativa. Entonces, todo objeto social es siempre significativamente construido: “(...) todo objeto social viene siempre ya imputado con significados provistos por la actividad de los sujetos en sus permanentes y continuos intentos por darle sentido al propio mundo, a través del

---

<sup>2</sup> “(...) la operación política por excelencia es aquella que tiende a borrar su propia intervención invisibilizando y sedimentando los actos de su institución originaria” (Daín, 2011).

lenguaje” (Reynares, 2013). El objeto (su sentido), se construye dentro de un sistema relacional de diferencias y “(...) el acto de otorgarle sentido es constitutivo de esa misma acción (...) ya que nunca hay acción “desnuda” de significado” (Reynares, 2013). La Teoría Política del Discurso, evitando caer en los errores que sus detractores trabajan para mostrar, no fetichiza al discurso, esto es, no reniega de que “todo ente existe más allá del discurso” (Reynares, 2013). Sin embargo, a este lo conceptualizamos como la mediación inescindible a todo acto significativo: no podemos acceder al ente en sí mismo, sin más, sino que la existencia de toda configuración de sentido como mediación es lo que explica el carácter medular del discurso desde nuestro abordaje (Laclau, 2006). Nuevamente, el movimiento ontológico explica un enfoque despreocupado por encontrar verdades últimas que ordenen la realidad y desde allí construir herramientas para aplicarlas de manera invariable. Es característica central del giro lingüístico, asumiendo las consecuencias en la práctica del carácter discursivo de lo social, “(...) donde la identidad de cada elemento es relacional, pero no por ello es arbitraria, sino que dicho proceso transcurre sobre un determinado orden de relaciones sistemáticas que definen los valores diferenciales (...)” (Daín, 2011). El giro es ontológico e implica asumir, por un lado, la imposibilidad de un fundamento último ordenador, pero, al mismo tiempo, la necesidad de la existencia de fundamento(s) que doten de sentido a esa totalidad fallida. Justamente, en nuestro lenguaje, “lo político” funciona como la operación de sutura que, bajo una estabilización de indescifrable temporalidad (pero siempre susceptible de ser desplazada de ese lugar privilegiado), permite detener un movimiento de puras diferencias: “Lo político (...) consiste en la fijación de los límites de la totalidad” (*Ibid.* 2011).

Distanciándose de principios teóricos caros a la herencia marxista, Laclau y Mouffe van a cuestionar, a partir del carácter constitutivo de lo discursivo en lo social, la posición privilegiada de un sujeto en la tarea por avanzar hacia una sociedad no capitalista. La centralidad del momento político en la construcción de lo social vuelve fundamental la tarea de fijación identitaria: la identidad, desde el post-estructuralismo, no la podemos pensar más que como articulación contingente, enmarcada en un contexto discursivo determinado. Este contexto, como vimos con la estructura lingüística desde Derrida, no es el de una estructura cerrada: es posibilitado por un exterior excluido y, a la vez, constitutivo. Por ello, para pensar las identidades no intentaremos reconocer fundamento último que explique su constitución, sino como contingentes y precarias, vinculadas a un “otro” que posibilita su ser.

La crítica al estructuralismo, sin embargo, no conduce a nuestros autores a un relativismo hiper-contextualista. Por el contrario, a través del concepto de sobredeterminación (recogido de Althusser que éste, a su vez, toma de una interpretación lacaniana sobre un texto de Freud) nos permitimos hablar de que, como lógica social, existe una relativa estructuralidad susceptible de ser advertida en las distintas prácticas particulares, pero que, con mayor o menor intensidad, permea todo el entramado social. Volviendo al concepto de sobredeterminación, decimos que asumir el principio político para la constitución de lo social impide pensar en determinaciones en última instancia, de una esfera “concreta” de lo social, como por ejemplo la economía. Esto no implica que no existan limitantes estructurales, significa que la

articulación entre las esferas (sólo divisibles a fines teóricos) es, en última instancia, de carácter político: contingente y precaria. Sin embargo, existen marcos de sentido que, de manera diversa, informan las prácticas particulares. La lógica de la sobredeterminación nos permite “(...) dar cuenta del hecho evidente de que cada coyuntura histórica es única *a pesar de que las contradicciones presentes sean las mismas*” (*Ibid.* 2011), habilitando la posibilidad de reconocer la presencia de la estructura en sus efectos. Con Althusser, no identificamos a la estructura como una formación exterior al fenómeno particular que lo contamina o condiciona, sino que su presencia es verificable en las particularidades internas a esa totalidad.

El sentido de este marco referencial, como fundamento del abordaje teórico para un análisis político de la economía popular en argentina, su emergencia como sector específico de la sociedad argentina y su posterior organización desde mediados de los noventa, responde a una forma de mirar al fenómeno específica. Como señala Daín:

*“(...) por un lado, el análisis político va a consistir en escrutar las operaciones ideológicas que contaminan una identidad particular (...) y, por el otro, al mostrar el modo en que la relativa estructuralidad está presente a partir de sus efectos sobre las configuraciones particulares, el análisis político dará cuenta de la operación político-ideológica por excelencia: la hegemonía”.*

### **Dislocación y antagonismo**

En consonancia con la bibliografía reseñada previamente para interpretar la emergencia del sector de la economía popular, decimos que la operación política por excelencia es la “sutura” hegemónica, cierre precario y, por lo tanto, en permanente riesgo de ser reconfigurado, en tanto la estructuralidad de la estructura no es interna al proceso de configuración de sentido. Se trata de estabilizar temporalmente sentidos para ciertos significantes, es decir, volver a determinada interpretación como la más verosímil y difundida por sobre el resto. La “esencia” contingente de toda configuración identitaria verifica la posible subversión o dislocación de sentidos. Sin embargo, nunca esos giros suceden en el vacío o por una simple rearticulación en un plano ideal, sino a través de un movimiento discursivo en un marco situado que condiciona todo desenlace posible. Toda dislocación implica “(...) una ampliación del campo de lo posible, pero esto tiene siempre lugar en una situación determinada: es decir, en una en la cual hay siempre una estructuración relativa” (Laclau E. , 2000). Es decir, que la idea de “dislocación” no implica recortes a partir de los cuales “todo pasa a ser posible”, “(...) simplemente porque en un tal universo psicótico no podría haber dislocación alguna: para dislocar una estructura debe haber una estructura en primer término” (*Ibid.* 2000). Una situación de dislocación, entonces, se explica a partir de una falta, insuficiencia que lógicamente presupone algún tipo de estructuralidad. En definitiva, decimos que una dislocación conlleva una ampliación del campo de lo posible siempre situada y relativamente estructurada.

Ahora bien, la multiplicación de “centros de poder” que supone un movimiento dislocatorio habilita también una multiplicidad de resistencias a esos núcleos, espacios con distinta capacidad de irradiación y

“estructuración”. En palabras de Laclau, “esto es lo que significa una estructura descentrada: no la simple atinencia de un centro, sino la práctica del descentramiento a través de los antagonismos” (*Ibid.* 2000). ¿Qué es un antagonismo y cómo se resuelven sus tensiones internas? Para responderlo, Laclau inicia con una crítica profunda a interpretaciones racionalistas y mecanicistas propias del marxismo. El punto de partida es proponer una diferenciación de los términos “contradicción” (como juego de suma cero entre, por ejemplo, quienes detentan los medios de producción y quienes ofertan en el mercado su fuerza de trabajo, en la lucha por apropiarse los excedentes resultantes) y “antagonismo”. Si las relaciones capitalistas son contradictorias en ese registro, no podemos decir que sean intrínsecamente antagónicas: “(...) es sólo si el obrero *resiste* esa extracción que la relación pasa a ser antagónica” (Laclau E. , 2000). De este modo, Laclau concluye que “para que la historia pueda ser apropiada conceptualmente como proceso racional y coherente, el antagonismo debe ser reducido a contradicción” (*Ibid.* 2000).

Laclau entiende al antagonismo como resultante de la construcción de un “otro” ante la existencia de una demanda insatisfecha. La distancia entre la necesidad hecha demanda y la fijación de ese “otro” es la que justifica la ausencia, en nuestro caso, de un antagonismo. Los antagonismos “no son relaciones objetivas sino relaciones que revelan los límites de toda objetividad” (Laclau E. y., 2006). Decimos esto, en tanto la construcción de un antagonismo revela las fallas en las posibilidades de construcción de una identidad plena: “(...) lo que en él (antagonismo) se expresa no es mi identidad sino la imposibilidad de constituirla; la fuerza que me antagoniza niega mi identidad en el sentido más estricto del término” (Laclau E. , 2000). Podríamos agregar que la función del antagonista opera como exterior constitutivo, en tanto que niega e imposibilita mi identidad plena y, al mismo tiempo, es su condición de posibilidad. Si previamente decíamos que toda dislocación es políticamente “habilitante”, esto responde al hecho de que las mismas puedan ser interpretadas como frutos de un daño y, así, dar lugar a procesos de antagonización, volviendo conflictiva una coyuntura antes estabilizada. Como bien señala Retamozo, “el antagonismo es la encarnación de un espectro que regresa para abrir lo político donde la política se muestra impotente y la demanda es su síntoma” (Retamozo, Las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales en Argentina, 2009).

### **Estado y mercado en Foucault: el neoliberalismo más allá del liberalismo económico**

Hasta el momento, hemos referido a las bases onto-epistémicas sobre las cuales desarrollaremos nuestra investigación, especificando algunos conceptos importantes para justificar el punto de vista que seleccionamos de manera deliberada. A su vez, desde la TPD como “modelo” de investigación, estamos obligados a definir uno o varios problemas-guía de nuestra investigación. Nos preguntamos por las condiciones de posibilidad para la aceptación de las reformas estructurales del menemismo en la década de 1990 y la deriva “emprendedorista” y “descolectivizada” de la enorme población de nuevos/as-

desempleados/as. Este “problema” teórico responde a formulaciones ulteriores: ¿de qué manera el discurso neoliberal sobredetermina las prácticas del sector de la economía popular? En otras palabras: ¿qué componentes propios del discurso neoliberal reconocemos en la economía popular?

Como reseñábamos más arriba, creemos que un abordaje político del fenómeno de la economía popular necesita caracterizar a los actores que posibilitaron dicha alteración en la formación social argentina de fines de Siglo XX. Un enfoque anti-esencialista y post-estructuralista nos obliga a acercarnos a los elementos abordados como especificidades históricas, nunca producto de una estructura identificable a priori. Al Estado, por ejemplo, no podemos pensarlo como actor subsidiario de una correlación de fuerzas específica en un momento dado: de esta manera, lo pensamos como elemento sobredeterminado por un discurso hegemónico, es decir, contaminado por la relativa estructuralidad que opera sobre su configuración en un momento determinado. Creemos que, para acercarnos a la construcción de un enfoque teórico para el abordaje aquí desarrollado, es interesante trabajar la noción de neoliberalismo y el rol del Estado problematizadas por Foucault. Serán herramientas de gran utilidad para la comprensión que del fenómeno de la economía popular queremos arrojar aquí.

Recientemente surgieron estudios en los cuales el foco era pensar la relación entre neoliberalismo y el Estado. Tomamos nosotros un texto del filósofo colombiano Castro Gomez. Allí, el autor enmarca su investigación sobre una obsesión foucaultiana, referida a la capacidad del liberalismo (y del neoliberalismo) para crear aceptabilidad a partir de construir un ethos “libertario” en las sociedades capitalistas modernas. Lo que asombraba a Foucault era la sensación de libertad con la que los gobernados se desenvolvían en reglas predeterminadas por otros. Justamente ese carácter “ordenador” del Estado podría hacernos presuponer que replicaría en una sensación de imposición, y sin embargo la aceptación libertaria predominaba. ¿Cómo se construye ese ethos?, ¿Dónde reside la capacidad “hegemónica” del discurso neoliberal? Foucault echa mano a la noción de “tecnologías de gobierno” como la racionalidad propia del Estado para construir legitimidad (en general, más allá de su faceta liberal o neoliberal), como estrategias que pueden orientarse de dos maneras: “(...) para crear estados de dominación política o para favorecer prácticas de libertad” (Castro Gomez, 2010). Lo que interesa a Foucault es pensar las tecnologías de gobierno no indagando en torno al carácter racional o no de sus prácticas, sino justamente que las utiliza como concepto que permite caracterizar a la racionalidad concreta que informa determinada gubernamentalidad. Sumado a ello, Foucault propone pensar el carácter de la “racionalidad” de una manera distinta a la weberiana: da por supuesto el carácter “calculador” detrás de toda práctica, a su vez que la fundamentan también un conjunto de valores que la dan por buena y deseable. La novedad en nuestro autor responde al hecho de que, para hablar de una práctica de gobierno racional, va a centrarse fundamentalmente en la recepción (interpretación) que los propios gobernados hagan de la misma: no interesa tanto el móvil desde la agencia (tarea, a su vez, imposible desde un enfoque no “racionalista” del sujeto como el nuestro) sino en cómo acoge la ciudadanía la política en

cuestión. Dicho de otro modo, sólo hay racionalidad cuando los gobernados interpretan que las tecnologías de gobierno están orientadas a fines y con medios racionales.

La diferencia central del liberalismo con el “ordo-liberalismo” (neoliberalismo) se encontraría, según Foucault, en el rol que el Estado debía cumplir para garantizar que la lógica mercantil estructure la mayor cantidad de esos ámbitos: “(...) no se trata simplemente de liberar la economía. Se trata de saber hasta dónde podrán extenderse los poderes políticos y sociales de información de la economía de mercado” (Foucault, 2007). Para el neoliberalismo, el Estado tiene un rol fundamental y de carácter productivo a la hora de generar las condiciones para el desarrollo del mercado. Hay una intervención, artificial, que habilita la expansión de las fronteras de la racionalidad mercantil. Hay un esfuerzo deliberado del sector público por multiplicar las esferas de lo social donde la lógica hegemónica sea la del sector privado. Sin embargo, es interesante también cómo este giro respecto del liberalismo tradicional, radicalizando su formulación, conlleva una diferencia teórica antropológica en tanto no se presupone al sujeto como naturalmente competitivo. En este marco es que el neoliberalismo, coherentemente con aquél postulado, intenta producir activamente “(...) al homo-económicus como sujeto de competencia que funciona como la *condición no natural* para el pleno desarrollo del juego también artificial del mercado” (Reynares, El neoliberalismo cordobés. La trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987 y 2003, 2014). Volveremos sobre la construcción del “homo-economicus” más adelante.

De este modo, buscamos rescatar una concepción del neoliberalismo que evite circunscribirlo a un conjunto de políticas y orientaciones de gobierno macroeconómicas, como un paquete más o menos identificable a ser activado de manera ahistórica y universal, sino pensarlo como un “(...) discurso político, hegemónico a fines del siglo XX, que promueve una tecnología de gobierno basada en la expansión de una lógica empresarial en todas las instancias de interacción social” (*Ibid.* 2014).

En síntesis, acordamos con Reynares cuando propone pensar al neoliberalismo “(...) a la vez, como un discurso político (...) y como una tecnología de gobierno” (Reynares, Neoliberalismo y actores políticos en la Argentina contemporánea, 2017). En nuestro caso, veremos cómo la construcción del “homo-economicus” como sujeto “(...) empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor y la fuente de sus ingresos” (Foucault, 2007), significó, *al mismo tiempo*, una tecnología de gobierno para contaminar la lógica mercantil sobre la mayor cantidad de esferas de lo social y, de este modo, reforzar una discursividad específica, neoliberal. Sin embargo, el vínculo entre una epistemología foucaultiana de la gubernamentalidad y la TDP encuentra coherencia y sentido si acordamos en el presupuesto ontológico discursivo, desde donde resulta imposible una coincidencia plena entre una racionalidad general y el conjunto de prácticas subsidiarias: “es así que asumir el neoliberalismo como gubernamentalidad centrada en una lógica empresarial en todos los ámbitos sociales conduce a la pregunta por cómo se instanció el neoliberalismo en actores e institucionalidades puntuales” (Reynares, Neoliberalismo y actores políticos en la Argentina contemporánea, 2017). Incorporar la caracterización del neoliberalismo como tecnología de gobierno específica y, a su vez, reconocer el hiato entre un contexto general y la aplicabilidad específica

sobre actores particulares, nos permite abordar políticamente el fenómeno, es decir, más allá de explicaciones racionalistas donde lo que está en juego, centralmente, es la adaptación de los sujetos.

En definitiva, el orden causal propio de la literatura canónica al respecto es cuestionado: el conjunto de políticas macroeconómicas al cual se limitaba la definición tradicional de “neoliberalismo” aparece como posible en un proceso de largo aliento previo, a partir de la construcción de una gubernamentalidad específica como tecnología de gobierno neoliberal. Y la economía popular, en lugar de ser concebida exclusivamente como producto de aquellas transformaciones estructurales, aparece como novedad sintomática de la hegemonía neoliberal. A lo largo de la investigación buscaremos justificar lo aquí expuesto y extraer algunas implicancias específicas a partir del abordaje propuesto.

# Capítulo II

## *Yo no me caí del cielo*

### **Construir neoliberalismo**

*“Ese amor, ese descubrir la libertad económica a toda una generación joven de argentinos, algún día será más útil como arma política para no saltar al vacío, o enfrentar al dirigista de turno, que todos los estatutos y regulaciones que quiera imponer ahora, con el desgaste de 6 años, este proceso militar”*

*Editorial del periódico Ámbito Financiero a 6 años del comienzo del golpe de Estado (24/3/82)*

Como señalábamos anteriormente, la economía argentina sufrió fuertes transformaciones estructurales desde mediados de los años 70. Someramente podemos decir que la propuesta de articulación entre el Estado, el mercado y la población propia del modelo peronista, si bien con matices, había estructurado una forma de intervención económica hasta esa época no alterada. En ese marco, el trabajo ocupaba un lugar central en la construcción identitaria de buena parte de la sociedad argentina, con índices de empleo formal mucho más cercanos a los de un país europeo desarrollado que a los de naciones limítrofes. Por ello, autores como Villarreal (Jozami, 1985) hablan de un proceso de “latinoamericanización” de la configuración de la estructura social y productiva argentina a partir de las transformaciones inducidas por la última dictadura. El trabajo como operación sobre la naturaleza que modifica a su vez al propio sujeto se encontraba asociado a ciertas categorías como formalidad o relación de dependencia. La acción colectiva comúnmente desplegada en el marco laboral se vinculaba fuertemente a la tarea del sindicato, como órgano legitimado para organizar ramas laborales y, más allá también, estructurar horizontes de sentido de una porción importantísima de la población económicamente activa.

Decimos así, con Svampa, que la tradición “obrerista” argentina “(...) marcada por la experiencia de la integración a la vez política (la identidad peronista), económica (el acceso al consumo) y social (los derechos sociales, protección social, estabilidad laboral)” (Svampa & Pereyra, 2004) será víctima de fuertes alteraciones que erosionarían su legitimidad y, con ello, la potencialidad hegemónica hasta el momento demostrada. Siguiendo a Villarreal, decimos que la estrategia del gobierno militar (como herramienta de los sectores dominantes) tenía que ver con trastocar un orden contrario a la defensa de sus intereses. El autor entiende, en sintonía con Svampa, que esa relativa homogeneidad de la clase trabajadora era complementaria con una “heterogeneidad por arriba”, es decir, el contradictorio y antagónico mundo de los intereses de los sectores dominantes. La estrategia acordada para lograr

compatibilizar dichos intereses fue, como es bien sabido, la vía libre para el ingreso y egreso del flujo financiero. Si bien con marchas y contramarchas, el gobierno de facto lograba dar una respuesta a esos intereses encontrados y, sin embargo, tenía también que explorar la posibilidad de fracturar la homogeneidad “por abajo”, invirtiendo el orden de la ecuación. Esta fue la tarea política por excelencia del gobierno militar, en tanto su consecución no podía reducirse a afectar los intereses de sus adversarios (en términos generales, la clase trabajadora). Más allá de todo economicismo (y sin por ello renegar del carácter disciplinario de toda alteración en las condiciones de vida materiales de cualquier fracción de la sociedad), el gobierno dictatorial trabajó en el terreno de “lo cultural”, como reseña la editorial del periódico *Ámbito Financiero* que encabeza el capítulo.

La tarea era ambiciosa: por un lado, la necesidad de contener vía represión estatal a una masa enorme y en un contexto de fuerte ebullición y organización popular, principalmente de jóvenes con convicciones políticas antagónicas a la de los sectores dominantes; por otro, construir un nuevo ethos del “homo-economicus” como base para un proceso de reorganización nacional. Desafortunadamente para los intereses de las grandes mayorías de la Patria, la efectividad del gobierno militar fue altísima. No detallaremos acá lo vinculado a la política sistemática de represión a personalidades y organizaciones “opositoras” al gobierno militar. Simplemente recordarla como una de las páginas más tristes de nuestra historia como nación, donde el acto disciplinario respondió a una radicalización por parte del Estado asesinando y desapareciendo a miles de compatriotas. Política que, en el relato construido por militares y aliados, enhebraba con un discurso de refundación del país donde “la política” era la razón de todos los males y “el Estado” su brazo ejecutor.

El modelo neoliberal se presentaba ahora como la concreción de un hecho ineludible, de alcance global, donde cualquier voluntad detractora aparecía como “ideologizada”, como el “otro” de un sentido común inexcusable. En este sentido, la tarea ideológica del gobierno militar tenía que ver con “(...) crear un sujeto específico, el *homo-economicus*” (Fridman, 2008), como momento específico de un movimiento de largo aliento. La tarea político-económica del gobierno de facto, simplificada por la ausencia de instituciones liberales que distribuyan al menos una porción del poder entre sus aspirantes, era bifronte: generar una serie de modificaciones en la política macroeconómica que logre transformar la estructura societal heredada de la década del 40’, y modificar los sentidos asociados a la cultura laboral sintetizados en la “tradición obrerista” señalada por Svampa. Lo sorprendente, como señala Barros, es que fue el fracaso del primer objetivo señalado lo que explica el éxito de la batalla hegemónica.

La política económica de la última dictadura cívico-militar articuló un discurso de “Estado mínimo” en un entramado complejo pero homogéneo, que cimentaría las bases para la implementación de medidas tendientes a abrir la economía nacional al mercado mundial, flexibilizar los contratos laborales, receptor deuda externa por montos millonarios, etc... Dicha orientación se enmarca en un contexto global donde las grandes potencias contaban con enormes sumas de capitales (fundamentalmente por el proceso desencadenado a partir de la crisis del petróleo), reconociendo en los países latinoamericanos un objetivo

seductor donde colocar esas partidas. Resulta llamativo, como señala Rapoport, cómo los ingenieros de lo que hoy conocemos como “modelo económico neoliberal” lograron que su prueba piloto haya sido antes en los países depositarios del excedente de las potencias, que en su propio suelo (Rapoport, 2018).

Con Fridman podemos constatar el lugar central que ocupaba la práctica ideológica (en el sentido previamente expuesto) para el gobierno militar a partir de la asignación de enormes recursos para su consecución (Fridman, 2008). Refiriéndose a los obstáculos encontrados en la puesta en práctica de este “cambio de mentalidad” (nombre asignado a un cortometraje ampliamente difundido en televisión y más de 600 cines en el año 1977), Martínez de Hoz señalaba que:

*“No podíamos pretender cambiar todo de la noche a la mañana sin tener en cuenta la tremenda resistencia inercial que encontraríamos en la organización misma del Estado, de las corporaciones sectoriales, de los intereses adquiridos y de las mismas mentalidades”* (Fridman, 2008)

La tradición “obrerista”, el lugar del trabajo para la construcción identitaria del asalariado/a en Argentina, el caso nacional como “anomalía” a nivel latinoamericano y la necesidad imperiosa de los sectores dominantes para romper esa “resistencia inercial” en una batalla hegemónica: todas esas aristas hasta aquí mencionadas pueden reconocerse en las palabras del primer Ministro de Economía de la última dictadura. Sin embargo, como señala Barros, lo paradójico del caso reside en que la profundidad y alcance de los cambios de mentalidad pretendido por el gobierno militar “(...) fueron mucho más radicales y profundos en relación a los fracasos que a los éxitos de la política económica” (Barros, 2002). Esto responde a la implosión, como señalábamos más arriba, de la homogeneidad del “polo peronista” que terminaría por habilitar una nueva hegemonía en la Argentina.

Obtener indicadores del discurso neoliberal (considerando como “discurso” el conjunto de prácticas significativas que pretendieron instalar o hegemonizar las autoridades del último gobierno cívico-militar) aparece como una tarea central. Esos indicadores, a falta de encuestas que indaguen este aspecto en la fecha fijada, pueden ser pensados justamente como los efectos concretos habilitados por esa “cosmovisión” neoliberal. Como señalábamos previamente, aquí reside el carácter “material” de un abordaje discursivo. Es decir, que la capacidad hegemónica del neoliberalismo no solamente es identificable a partir de verificar desplazamientos de sentido, sino fundamentalmente en cómo dichas dislocaciones habilitan movimientos más “concretos”, que hacen a políticas de Estado o modificaciones en la estructura social de un país. En nuestro caso, la tesis es que la emergencia del sector de la economía popular es un indicador del carácter hegemónico del discurso neoliberal hacia finales del Siglo XX en Argentina. La economía popular no es un “puro efecto”, sino que constituye al neoliberalismo en su versión argentina de la década de los noventa. Así, reconocemos el alcance de prácticas y lógicas propias del discurso neoliberal hasta nuestros días, por lo que nos permitimos rastrear el carácter sobredeterminado del lenguaje mencionado haciendo un recorte de la realidad sobre los contornos de ese concepto novedoso.

## **Fantasmas de la historia argentina**

Estos principios se articularon de múltiples maneras y, combinados, forjaron una trama histórica novedosa, de sorprendente potencia hegemónica. Pero, para llegar a nuestro foco, no podemos obviar otro acontecimiento como antecedente que volvió posible la reconfiguración en el mundo del trabajo y la informalidad a principios de la década de 1990: la hiperinflación.

Como renegamos de la fuerza explicativa desde cualquier tipo de esencialismo, el peso de la hiperinflación para nuestro abordaje no reside en posibles explicaciones al fenómeno, sino de manera central en la interpretación generalizada que de la crisis se elaboró y difundió en la sociedad. En particular, se trata de indagar qué tipo de explicación sobre la crisis predominó. Si las explicaciones para comprender los fundamentos de la crisis hiperinflacionaria fueron múltiples, el consenso respecto de los efectos modulares en el orden simbólico de la población argentina es, por el contrario, muy importante.

Hablamos, con Laclau, de una dislocación en sentido ontológico, como característica de toda estructura des-centrada, producto de la imposibilidad de lo social como totalidad plena. Dicha falla constitutiva, si bien es inerradicable, no adquiere siempre las mismas características: siempre habrá una falla que vuelve imposible la totalidad de la estructura y, sin embargo, la dislocación perenne se encuentra siempre sujeta a la contingencia como cualquier construcción significativa. Desde esta perspectiva, las identidades emergen como “(...) narrativa(s) propuesta(s) a partir de y para suturar los efectos desestabilizantes de la dislocación” (Groppo, 2010). Como señala Groppo, “la idea de dislocación da cuenta de eventos que interrumpen e irrumpen en el orden simbólico (...)” (*Ibid.* 2010).

Si tomamos solamente como referencia el mes de mayo de 1989, la inflación fue del 78,5%, mientras que la de Junio fue del 114,5%, “(...) sumando un total de 613% en sólo seis meses” (Fair, 2008). La sensación generalizada de estar constantemente perdiendo dinero y, consecuentemente, poder adquisitivo, condujo a que la temática central de la sociedad argentina sea la crisis hiperinflacionaria que atravesaba el país. Como señala Alejandro Grimson, “(...) genocidio e hiperinflación son dos núcleos duros de las memorias colectivas de los argentinos” (Grimson, 2004) al punto de afirmar que “(...) difícilmente puedan comprenderse los últimos diez años sin comprender el peso que esos fantasmas tuvieron sobre la imaginación y sobre las prácticas políticas” (*Ibid.* 2014). En nuestra terminología, hablamos de una dislocación en tanto las distintas explicaciones respecto de las fallas de “lo social” que emergieran, independientemente de sus rasgos “ideológicos”, de ahora en adelante no podrían eludir los efectos simbólicos que la hiperinflación producía en el conjunto de la sociedad. A tal punto impactó, que obligó al gobierno de Alfonsín a adelantar las elecciones presidenciales. Menem asumiría en 1989 con la hiperinflación como “fantasma” agobiante y, por lo tanto, con la necesidad de definir una política concreta que apunte a extinguirla. Como bien sabemos, la “convertibilidad” fue la herramienta que, dos años más

tarde, el entonces flamante Ministro de Economía, el cordobés Domingo Cavallo, aplicaría para subsanar dicha problemática.

Iniciaba así un ciclo económico paradójico para la Argentina. La inflación fue contenida con una efectividad asombrosa (Bayón, 2003), a través de una política monetaria que sostenía la estabilidad del peso respecto del dólar. Dicha combinación era sostenida por la apertura comercial y la venta de numerosas empresas del Estado, como método para fortalecer las reservas que garantizaban la convertibilidad. Sin embargo, y aquí la paradoja, ni siquiera en la fase inicial (1991-1994) del experimento menemista el interesante crecimiento económico fue acompañado por disminución alguna del desempleo. Por el contrario, “(...) a pesar del fuerte crecimiento económico experimentado durante los primeros años del decenio, el desempleo creció casi ininterrumpidamente desde 1991” (*Ibid.* 2003). Según datos de la CEPAL, solamente entre 1990 y 1995 el índice de desempleo en Argentina crecería por encima de los doce puntos porcentuales, pasando de 6.3% 18.6% solo en este período (Cerrutti, 2003). En el Gran Buenos Aires, donde se concentra la mayor porción de la población nacional, la cifra era aún mayor, pasando de 6% al 20.2%. Sólo en el ámbito estatal, el total de empleadxs se redujo de 350.000 en 1989 a 67.000 en 1993 (Marshall, 1996). El caso argentino se convertía así en el más extremo de toda Latinoamérica, donde el “mejor alumno” del modelo neoliberal, catapultado en la región mediante el consenso de Washington, lograría controlar la inflación a un costo social altísimo. Extremo con relación a la intensidad, rapidez y extensión de la adopción de medidas de apertura externa, desregulación económica y privatización de empresas públicas, como también en relación con el desempleo abierto.

Y, sin embargo, luego de su primera gestión como presidente, Carlos Saúl Menem sería reelecto presidente con el 49,94% de los votos en mayo de 1995. ¿Cómo explicar, en este marco, la enorme estabilidad política que caracterizó al primer gobierno Menemista en un contexto de creciente desempleo y, consecuentemente, pauperización de una parte importante de la población? El peso del “fantasma” de la hiperinflación, en este punto, no puede ser subestimado. Era la variable más temerosa para buena parte de la sociedad argentina, y parecía ser la única imprescindible para reconstruir la economía del país, a punto tal que toda estrategia debía subsumirse al objetivo principal de la “estabilidad” de los precios. El resto de las variables (desempleo, balanza comercial, incluso el crecimiento económico) eran percibidas como secundarias por las “marcas” que dejaba el proceso hiperinflacionario.

Queremos decir que las políticas macroeconómicas de tinte neoliberal del gobierno menemista fueron posibles no solamente por la victoria en términos culturales que los sectores dominantes obtuvieron a fuerza de represión y creación de consensos; el peso del “fantasma” hiperinflacionario hizo mella en el conjunto de la sociedad y, combinado con una certera estrategia discursiva del oficialismo, permitió dotar de legitimidad al arsenal de medidas tomadas a principios de la década. Podemos identificar así a la hiperinflación con un sentimiento generalizado de crisis que afectó al conjunto de la sociedad y que permitió a los sectores dominantes desarrollar una política económica que, al tiempo que lograba contener dicho desequilibrio, dinamizaba un conjunto de transformaciones estructurales que alterarían profundamente la

configuración social, cultural y económica del país. Sin embargo, no podemos soslayar que la posibilidad de que este relato construido resulte verosímil para buena parte de la población residía en la dislocación y rearticulación de distintos sentidos caros a la tradición obrerista que reseñábamos en un comienzo, tarea iniciada de manera deliberada por funcionarios de la última dictadura cívico-militar. Conjugadas las operaciones simbólicas pertinentes, el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem iniciaba así su gestión con la posibilidad de aplicar una batería de medidas tendientes a profundizar la desintegración social y la miseria. La resultante, consecuentemente, respondería a la proliferación de sujetos, colectivos y sectores atravesados por la lógica neoliberal propia de su contexto de emergencia.

### **Emergencia de un gigante**

Como señalábamos más arriba, la tradición obrerista argentina estaba tan arraigada producto de los bajísimos índices de desempleo y subempleo, al punto que “(...) la centralidad del estatus ocupacional ocasionó la exclusión de los trabajadores del sector informal del acceso a los derechos sociales” (Bayón, 2003). Es que los bajos niveles de desempleo sedimentaban un principio según el cual lograr el “pleno empleo” en Argentina era solo cuestión de tiempo, en tanto la política de industrialización por sustitución de importaciones conducía a ello. Como señala Bayón, la tan mentada frase de que “*en este país el que no trabaja es porque no quiere*” se populariza justamente durante la década del 70. Es una construcción verosímil, agregamos, en tanto se asiente sobre indicadores de desempleo concretos de la realidad como los sostenidos durante esa época, al tiempo que prefigura una tipología de desempleados necesaria para la batalla ideológica que, como reflejábamos más arriba, fue desatada por el gobierno militar y aprovechada por el menemismo: hablamos de la articulación entre desempleo con incapacidades individuales, desvinculando plenamente su condición de las políticas que asuma un gobierno determinado.

Decimos así que el gobierno militar había iniciado un proceso para terminar con dicha tradición, con esa “homogeneidad por abajo” que señalábamos: desapareciendo físicamente a buena parte de la militancia política y condenando al exilio a otro importante sector; con una batería de medidas económicas que tendía a modificar la estructura productiva (*Ibid.* 2003) admitiendo el flujo libre del capital financiero; y, coherentemente, disputando un “sentido común” según el cual la situación económica de cada cual responde a capacidades individuales: el Estado era crecientemente identificado con la corrupción y, por lo tanto, como causa-eficiente de los males que afectaban a la sociedad, nunca como su posible solución. El problema no era cómo se manejaba el Estado, sino la “lógica estatal” en sí.

### **Institucionalizar cambios estructurales**

Es en este marco que la estructura del mercado laboral argentino sería alterada hasta el presente. Como vimos, dicha transformación no fue solamente consecuencia de un conjunto de políticas macro-económicas tendientes a incrementar la desocupación, sino que su éxito estuvo posibilitado, además, por la disputa hegemónica desatada, buscando naturalizar un violento proceso de exclusión. El mercado laboral argentino se transformaría sensiblemente y sus marcas perviven hasta el presente. ¿Qué políticas estatales nos permiten dar cuenta de ello? La aparición de planes sociales como herramienta de negociación entre el Estado y sectores desocupados es ya una manifestación importante: "(...) de un volumen inicial de aproximadamente 140.000 subsidios vigentes promedio en 1997 (...) esa cifra había aumentado a 1.300.000 en el octubre de 2002" (Svampa & Pereyra, 2004). Sin embargo, resulta aún más contundente el hecho de que, en el año 2003, el organismo encargado de elaborar índices a nivel nacional (INDEC) alteraría las condiciones de interpretación de lo que es y no es "trabajo".

Dicho proceso queda en evidencia al revisar los indicadores durante el estallido social de 2001, que marcaron un crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza, para luego retroceder de manera sostenida, fundamentalmente durante los dos primeros gobiernos kirchneristas (Hagman, 2014). Si para el año 2001 el desempleo era del 21.5%, recién en el año 2015 Argentina retornaría al índice de desempleo de 1992 (7.1%) (Fuente: INDEC). Sin embargo, las características de lo que se consideraba trabajo en unas y otras mediciones fueron sensiblemente distintas.

Según la justificación para la elaboración de la Nueva Metodología del año 2003 para la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la medición del mercado del trabajo se modificó para contemplar "el debate de inicios de la década del 90" centrado en

*"(...) la recuperación de actividades no fácilmente reconocibles, más vinculadas a la actividad doméstica, a la producción familiar, más típica de las mujeres (sic), de los menores o de personas mayores. Es decir, todas formas que eran esquivas a la estadística y que fundamentalmente no eran reconocidas por la población como actividad laboral" (INDEC, 2003).*

La necesidad del Instituto de Estadísticas y Censos Nacional de reformular criterios en torno al "trabajo" es sintomática de un mercado que se había transformado de manera traumática: nuevas dinámicas de hacer en la economía habían emergido producto de una nueva etapa política, que combinaba exclusión del mercado laboral formal de una importante porción de la población, con una racionalidad hegemónica individualista propia del discurso neoliberal. Esas "(...) actividades no reconocidas por la población como trabajo" pasaban ahora a ser aceptadas por la autoridad nacional máxima en estadísticas, al punto que el principal giro que reconoce el instituto bajo esta nueva metodología en lo respectivo al mercado laboral responde a la necesidad de *"(...) recuperar formas ocultas de ocupación: trabajo femenino, trabajo irregular, changas, actividades no reconocidas habitualmente como trabajo por la población" (Ibid. 2003).*

Según lo dicho, no puede sonar más que como una gran paradoja el "blanqueo" (por parte de un gobierno con políticas activas de redistribución) de formas de trabajo precario. Lo que la estadística no

puede indagar, en todo caso, son las características identitarias que adquiriría este novedoso sector de la población argentina. En el capítulo siguiente nos abocaremos a ello.

## Conclusiones

El modelo neoliberal dejaba huellas sensibles en el sector de trabajadorxs argentino. No solamente dejaría sin trabajo formal a un porcentaje muy importante de la población total, la más alta de la historia como vimos, sino que además la matriz productiva se modificaría de manera tal que las expectativas de conseguir un trabajo en relación de dependencia disminuirían sensiblemente. La hegemonía neoliberal, a su vez, afectaba directamente las características de cualquier iniciativa en respuesta a la exclusión, en el marco de una crisis de magnitud. Independientemente de las estrategias colaboracionistas de dirigentes sindicales vinculadas a estrategias oficiales (Svampa M. , Profunda ruptura de lealtades, 2007), lo cierto es que la persistencia del discurso del gobierno menemista por trabajar para lograr la estabilidad del país (clivaje sobre el cual se asentaría su *diferencia* con el radicalismo), resultaba verosímil en tanto el índice modular indicaba un éxito rotundo: la inflación había sido contenida.

Como señala Barros (Barros, 2002), la necesidad de reforma económica, a través de una reducción y una liberalización del Estado, venía siendo enunciada por la UCR desde el año 87'. Sin embargo, es Menem quien da sentido a la dislocación por la "crisis terminal" de la economía, y después de un año y medio de zozobras logra una importante estabilidad económica y, con ello, el consenso necesario para imponer una liberalización de la economía: "luego de la Ley de Convertibilidad, la idea de *Estabilidad* comenzó a jugar el rol que la *Democracia* había jugado durante la presidencia de Alfonsín" (*Ibid.* 2002). Es decir que el eje articulador del discurso menemista, que dotó de legitimidad a un período de desguace del Estado y crecientes índices de desempleo y subocupación, era la estabilidad económica. De este modo, el temor al desastre económico constituyó "(...) una fábrica de parálisis y conservadurismo" (Grimson, 2004), ya que el único conjuro contra el fenómeno hiperinflacionario fue "(...) aferrarse a una estabilidad total y totalitaria" (*Ibid.* 2004). Como toda dislocación (y volveremos sobre este aspecto más adelante), los efectos habilitantes son tan evidentes como el provecho "conservador" que distintas fracciones del poder puedan sacar de dicho acontecimiento.

En este contexto, la relativa estructuralidad vinculada a la estabilidad habilitaba, como toda dislocación, nuevas configuraciones identitarias que doten de sentido al momento histórico. Las posibilidades articuladoras, si bien indeterminadas, surgen siempre en un marco de relativa estructuralidad que opera sobre sí y es en disputa con el resto de sentidos emergentes que terminará por predominar (o no). Resulta ejemplificador, en este punto, el caso particular del sector de la economía popular: una fracción de

trabajadores que no puede pensarse sin registrar este momento específico de emergencia (en tanto producto de un proceso de reformas macro-económicas específicas desarrolladas bajo la hegemonía del discurso neoliberal en la Argentina) y que, sin embargo, su nominación le viene dada muchos años más tarde.

El conjunto de nuevxs desempleadx de Argentina en los noventa no solamente significó una variable de ajuste “aceptada” por buena parte de la población en nombre de la estabilidad, sino que además la ausencia de un vínculo orgánico con la identidad política que tradicionalmente organizaba al trabajador/a (producto de la “heterogeneidad por abajo” trabajada por la dictadura) volvía muy difícil su representación. El peso de la hegemonía neoliberal recaía sobre él, además, por la articulación de un discurso individualista revitalizado por el menemismo, ubicando al Estado como responsable de todos los males económicos sufridos. Dicho rechazo al Estado es la contracara de una creciente responsabilización individualista respecto de la ubicación del propio-sujeto-desempleadx en los estamentos del mercado. Como remate a esta articulación hegemónica, la imposibilidad de retorno al mercado formal por parte de lxs nuevxs desempleadx condujo a la emergencia de nuevas formas de hacer en la economía: esas “*formas ocultas de ocupación*” que en 2003 incorporaba el INDEC como criterio de sus informes, debido a su magnitud, considerándolas al fin como trabajo.

Como señala Laclau, “mostrar el sentido originario de un acto significa así mostrar el momento de su contingencia radical, es decir, reinscribirlo en el sistema de opciones históricas reales que fueron desechadas” (Laclau E. , 2000). La formación social se transformaba en la Argentina neoliberal, modificando sensiblemente el horizonte de sentidos de los sectores populares: la semilla que germinara gracias al fracaso de la política económica del gobierno dictatorial y que fuera potenciada por el discurso liberal del menemismo, lograría perforar las barreras de la subalternidad y diseminarse en el dislocado mundo de lxs excludxs. El individuo se vuelve

*“(...) empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor y la fuente de sus ingresos” y, al mismo tiempo “(...) es moralmente responsable de su destino, exitoso o frustrado. Estas dos características traen aparejadas una aceptación de la realidad como precondition para la adaptación necesaria a fin de lograr el éxito”* (Reynares, Neoliberalismo y actores políticos en la Argentina contemporánea, 2017)

La población ahora desempleada, de características estructurales y de magnitud creciente mientras la larga década menemista-aliancista duró, emergía atravesada por esa discursividad que trabajaba en la proliferación del homo-economicus. Conocer las implicancias de ello al nivel del sujeto es un objetivo del siguiente capítulo, así como también lo es identificar, luego del creciente proceso de organización y construcción antagónica de desempleadx frente al Estado, las huellas de dicha discursividad en la construcción política de los movimientos que representaron al sector.

# Capítulo III

## *Yo, caníbal*

*"Me acaban el cerebro a mordiscos,  
Bebiendo el jugo de mi corazón  
Y me cuentan cuentos al ir a dormir"*

*(Yo Canibal – Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota – Cordero Atado – 1993)*

*"Al principio, cuando descubrimos que todos estábamos en la misma, nos desesperamos. Algunos compañeros se suicidaron, otros se deprimieron. Yo estaba como si me hubieran pegado un martillazo en la cabeza y también muy frustrado. Hicimos algunas reuniones, pero no sabíamos qué hacer y como terminábamos peleando entre nosotros, dijimos que cada cual iba a hacer lo que pudiera por su lado".*

*(Juan, despedido a comienzos de los noventa) (Soldano, 2011)*

### Introducción

Las profundas transformaciones y reestructuración sufrida por los sectores populares en Argentina tuvieron un impacto en los sujetos, ya que afectaron formas históricamente construidas y arraigadas en esta porción de la población. Como señaláramos en clave epistemológica, evitamos una lectura mecanicista y/o determinista de los procesos sociales, donde a un movimiento de la estructura del trabajo le sucede un conjunto de acciones previsibles. Es en el mismo proceso situado, en la Argentina de fines de siglo, donde la representación que de la realidad hacen los sectores populares se construye en una batalla de sentido librada en un terreno específico. El marco, decíamos, se encontraba relativamente estructurado por un discurso que denominamos como "neoliberal". Su carácter hegemónico, sin embargo, no anulaba las posibilidades de construcciones de sentidos diferentes o antagónicos: dicha clausura implicaría el fin de la política. Entre el crecimiento exponencial de la porción de desocupadxs de principios de los noventa y el estallido social de 2001 que clausuraría un ciclo político en Argentina, identificamos un movimiento que va de la difusión de alternativas económicas cuentapropistas a la creciente organización en movimientos de desocupadxs. En el presente capítulo buscaremos caracterizar las condiciones de posibilidad para esa primera reacción "emprendedorista" de la población desempleada. A su vez, registramos la construcción antagónica de mediados de los noventa frente al Estado como acontecimiento que resquebrajaría la hegemonía neoliberal en el sector analizado. Esta construcción política, fundada en el creciente despliegue de iniciativas colectivas ordenadas por el desempleo que sufría una importante porción de la población, sería fundamental para comprender no solamente la potencia disruptiva y destituyente del movimiento piquetero, sino además las características de las distintas orientaciones políticas al interior de este. Decimos esto, en tanto sostenemos que la forma que adoptaría el antagonismo que construían lxs desocupadxs respecto del Estado influiría en su propia identidad a posteriori: la ausencia de un proyecto instituyente luego de la "pueblada" que forzaría la crisis de 2001, entendemos, resultaría sintomática de una construcción identitaria refractaria a la implicancia en el aparato estatal.

## **El trabajo**

Es importante aclarar desde un principio el peso diferenciado de las consecuencias del modelo neoliberal según las características de cada Provincia, e incluso según cada localidad. El caso paradigmático argentino, en tanto las transformaciones alteraron sensiblemente al ordenamiento social imperante, es el de la Provincia de Buenos Aires, donde la desocupación subió del 6 al 20.2% solo durante el período 1990-1995. Si bien el incremento del desempleo fue una variable común al conjunto del país, las características productivas y poblacionales de Buenos Aires condujeron a que se convirtiera en la provincia que más “sufriría” la re-estructuración neoliberal. Mientras que otras provincias contaban previamente con índices de desempleo mayores, lo cierto es que justamente por eso fue esta la provincia más damnificada, la que más sentiría los nuevos aires de época.

Soldano señala que la “sociedad salarial” articuló un vínculo de dependencia con el “(...) goce de los beneficios derivados de la tutela del Estado en sus formas bienestaristas” (Soldano, 2011). Es decir, que no solamente la retribución económica de un lazo formalizado de trabajo le proporcionaba al asalariado estabilidad económica, sino que además a esa relación le venía “por añadidura” una serie de derechos frente al Estado, típico engranaje de seguridad social del Estado de Bienestar. Sobre esta población, señala Castel que existen tres posiciones de sujeto a diferenciar: un polo ocupado por el sector integrado, donde habría una fuerte correlación entre el “trabajo estable” y una “inserción relacional sólida” (Castel, 2007); en el otro extremo, el sector de desempleados, zona de exclusión en la que los sujetos están marginados, lo que acarrea tendencias al “aislamiento relacional”; entre medio de ambas posiciones, una “zona de vulnerabilidad”, donde prima la inestabilidad típica del empleo precario, sumado a la incertidumbre respecto del futuro. Es esta posición intermedia la que se expandió de manera sensible durante la década de los noventa. Si bien las salidas económicas frente a la situación de inestabilidad laboral fueron múltiples (“proliferaron agencias de remises, los quioscos, las verdulerías pequeñas (...) otros innovaron llevando a cabo emprendimientos de cuentapropismo informal” (Soldano, 2011)), lo cierto es que las representaciones que construyeron respecto de su situación personal se encontraron notoriamente atravesadas por el dispositivo neoliberal de sentido, edificando un conjunto coherente y articulado de respuestas ante la crisis que operaron fuertemente sobre las prácticas alternativas desarrolladas. La cita que encabeza este capítulo resulta, por descarnada, elocuente: la situación de exclusión fuertemente extendida en el sector de desempleados y las respuestas atomizadas frente a la crisis. Dicha atomización no era evidente, mucho menos natural: nuestra hipótesis reside en que dicha atomización es sintomática de una hegemonía neoliberal que permeaba profundamente las construcciones de sentido e interpretaciones que los propios sujetos excluidos elaboraban. En el siguiente apartado, buscaremos señalar sentidos clave para caracterizar dicha constitución identitaria.

### **Sacralizar al mercado: irresponsabilidad y culpa**

Siguiendo a Jahoda (Kessler, 1996), decimos que el trabajo se estructura en cuatro “categorías de experiencia”: la estructuración de la temporalidad propia de la jornada laboral estable, la planificación de proyectos que exceden la individualidad, el sostenimiento de relaciones sociales regulares por fuera de la familia y un estatus e identidad social. En este contexto “(...) se vuelve imperativa la necesidad de hallar otra lógica que hilvane la vida cotidiana habiendo desaparecido un potente organizador y reductor de las incertidumbres” (Soldano, 2011), el trabajo. En nuestro caso, implica “(...) una nueva vinculación con el no-trabajo, una novedosa territorialidad y una concomitante reconversión de la forma de reproducción, del tiempo libre, una nueva relación con el barrio, la familia, los amigos, etc.” (Retamozo, 2005). Una “nueva vinculación” no puede realizarse desde el vacío: la presencia de códigos de significación dominantes incide en la construcción de representaciones y sentidos, en este caso, realizada por los sectores damnificados por la exclusión: “la hegemonía del pensamiento neoliberal como dispositivo de control social supone una dominación de sentidos comunes y una operación subjetivante” (*Ibid.* 2005).

Un elemento nodal del discurso neoliberal es la caracterización del mercado como actividad por definición bienhechora, asociándolo con un proyecto político modernizador. Esta disposición no es novedosa ni propia del neoliberalismo, sino que funcionó como un elemento crucial para la consolidación de la hegemonía del liberalismo occidental en los Siglos XIX y XX en Occidente. Como advierte Habermas en su *“Historia y crítica de la opinión pública”*, la potencia argumentativa de dicha articulación radica en la interpretación que la burguesía realizó respecto de las fuerzas incontenibles que permitieron derribar al feudalismo (Martínez, 2016). Si la burguesía como clase logró desmontar un régimen y construir “modernidad”, es el mercado el elemento explicativo de un “progreso” histórico arrasador. La cantidad de supuestos positivistas detrás de dicha lectura no puede conducirnos a desconocer que dicha interpretación fue la predominante, logrando que conceptos tan diversos como los de *progreso* y *modernidad* aparezcan ligados al “mercado” como actividad por definición bienhechora. Sumado a ello, los avances en materia de derechos individuales que supuso terminar con gobiernos monárquicos y que simboliza como acontecimiento la revolución francesa, terminan por completar la cadena asociando al mercado con la idea de *justicia*.

Como reseñábamos en el primer capítulo, Foucault presenta al neoliberalismo como dispositivo gubernamental donde la caracterización positiva del mercado es presupuesta: tal es así, que la especificidad de estos gobiernos reside en la voluntad de propagar la lógica mercantil en la mayor cantidad de esferas posibles. De allí su carácter “intervencionista” en sentido estricto, en tanto dispositivo *con la tarea de* liberalizar/mercantilizar incluso la propia institucionalidad estatal. Lo que nos interesa remarcar con esto es que la centralidad que adquiere el mercado para el discurso neoliberal como eje ordenador

que optimiza la asignación de recursos, se desarrolla en simultáneo con un desplazamiento en la representación que la ciudadanía construye sobre el Estado. La articulación de sentidos es antagónica: el Estado representa lo antiguo, que impide que el desarrollo natural de las fuerzas del mercado modernice la formación social argentina. Y, finalmente, el lugar del individuo se desplaza sensiblemente: el movimiento podría sintetizarse en el salto identitario de ciudadanos a conjunto de productores/emprendedores. En esta nueva configuración, si el mercado es el mecanismo que optimiza la asignación de recursos (en definitiva, la idea de “pensamiento único” supone la sinonimia economía=mercado) y el Estado no tiene otra tarea que la de asegurar que dicha lógica se reproduzca al infinito, entonces cada posición de sujeto se explica por la capacidad individual de desenvolverse en el mismo. La cosmovisión neoliberal, en definitiva, como discurso sencillo y articulado que disloca sentidos sedimentados, construyendo una novedosa lógica explicativa tendiente a una creciente descolectivización de la sociedad. Al respecto, señala Retamozo que los “códigos de significación dominantes” de mediados de los noventa condujeron a que *“la idea de la responsabilidad individual y la libertad de elección en mercados que se autoproclamaban el reino de la libertad, [pretendieron] justificar que la situación derivada de las elecciones supuestamente libres de los hombres era, además, justa”* (Retamozo, 2005).

Numerosos estudios de mediados de la década de los noventa y principios del Siglo XXI (entre los que destaco a los ya citados Kessler, Svampa, Soldano y Beccaria) se encargaron de mostrar, desde otras perspectivas teóricas, cómo operó en los sujetos desplazados dicha dislocación. En primer lugar, citando el título del artículo de Bayón desde donde extraemos algunas de las opiniones de desempleados, aparece con fuerza la erosión de las certezas previas, de un mercado formal estable. Así lo demuestra Juana, desempleada de 49 años en ese entonces, refiriéndose a ese mundo laboral que ahora se modificaba de manera rotunda:

*“Yo sabía que llegaba fin de mes y tenía mi plata, me enfermaba, tenía mi obra social, tenía dónde llevar a mis chicos cuando necesitaban médico, sabía que tenía aportes para mi jubilación, todas esas cosas”* (Bayón, 2003).

Sumado al reconocimiento de una situación personal precarizada, muchas de las personas entrevistadas reflejan el carácter arraigado del vínculo entre “trabajo”, “estabilidad” y un conjunto de derechos que deben ser respetados. Su novedosa condición de desempleadxs los ubica en una posición incómoda en tanto las tareas domésticas y cotidianas de supervivencia no son consideradas, por los propios damnificados, como un trabajo. A este respecto, es sugestivo el comentario de Graciela, también desempleada:

*“(…) lo que pasa es que no sé si se puede llegar a considerar... yo no lo considero trabajo, ¿no?, en una época yo había estudiado peluquería... y ahí a veces así venían algunas vecinas del barrio [...]; no lo considero trabajo desde el momento que yo no lo legalicé, no tuve aportes para el fisco [...]; lo consideraba una changa, lo que vulgarmente se llama changa, trabajo precario”* (Ibid. 2003).

El correlato del sentido construido frente al nuevo escenario, dada la centralidad otorgada al trabajo como eje articulador, era muchas veces la desazón frente a la triste realidad que “tocaba”. Al respecto, es elocuente el relato de Nora:

*“Para mí que me hayan quitado la dignidad, porque para mí en este país te quitan la dignidad absolutamente cuando te sacan el trabajo, no sos nada, nada, nada [...]; sentís como que ya no pertenecés a la sociedad, que no sos nada, que no servís para nada”* (Bayón, 2003).

Si bien buena parte de la población desempleada decidió (o no encontró alternativa a) realizar changas, una porción nada despreciable se animó a actividades vinculadas al cuentapropismo, haciendo carne la verosimilitud del discurso neoliberal desde los sectores populares. Es interesante el relato de Marcelo al respecto, quien desarrolló diversas iniciativas con el horizonte de construir una fuente estable e independiente de ingresos:

*“Con el maxi-kiosco de entrada anduvimos bárbaro, porque no había ninguno, se trabajaba bien... pero después a medida que fue pasando el tiempo se fueron poniendo otros locales y llegó un momento que éramos cuatro en la cuadra, entonces [...]. No daba los números por los costos [...]. Después abrimos un negocio de pollos [...] ahí aprendí a hacer milanesas, aprendí a hacer, a deshuesar un pollo, aprendí a hacer todo lo relacionado con pollo [...]; no nos fue nada bien, encima nos robaron [...]; ahora yo alquilo un auto para taxi y... pero lo tengo a cargo, o sea, las veinticuatro horas con..., lógicamente no trabajo veinticuatro, trabajo veintiuna [...]. Y depende, hay días que puedo traer veinte pesos, hay días que traigo diez, treinta [...] y no trabajaba el domingo porque más o menos andaba, ahora tengo que salir los domingos”* (Bayón, 2003).

El caso de Marcelo y su experiencia entre el “maxi-kiosco” y su negocio de pollos, fue una constante por aquellos años de creciente desempleo: la orientación al mercado cuentapropista por parte de la enorme población que experimentaba como “primera generación” el desempleo estructural. Una aventura individualizada a la que eran inducidos lxs desempleadxs, montada sobre un escenario desprovisto de garantías y derechos laborales como sucedía previamente. El Estado operaba para finalmente lograr desentenderse de aquellos roles que ocupaba, dejando lugar a la libre disputa propia de la iniciativa privada. En ese marco, la “vocación” emprendedora que reflejan los testimonios de Marcelo, Nora, Juana o Graciela, entendemos no emerge *producto de* la exclusión, sino que es sintomática de una operación ideológica ya-acontecida, reflejo del triunfo hegemónico de aquella cosmovisión neoliberal que reseñábamos. Es decir: si bien es imposible pensar esta “explosión” de iniciativas cuentapropistas y “changarines” sin un crecimiento exponencial del desempleo, ello no agota la explicación de la deriva emprendedorista del sector ahora-desempleado. De este modo, hablamos de los efectos “materiales” de estabilizaciones de sentidos ocurridas previamente, en este caso ligadas al pensamiento neoliberal.

## Antagonismos

La incertidumbre respecto del futuro debido a la ausencia de trabajo formal y la diversidad de prácticas consideradas como changas, el sentido de pérdida de dignidad y la multiplicación de fracasos cuentapropistas fueron moneda corriente entre la población desempleada. Lo singular del caso, es que la interpretación que los propios sujetos hacían para explicar su situación terminaba por auto inculparse, sin construir un “otro” responsable de tanta desigualdad. Por lo tanto, en términos laclausianos, coexistía una población con una demanda específica común (trabajo), con la ausencia de un antagonista.

Durante los primeros años de neoliberalismo “descarnado” del gobierno menemista, la potencia de la hegemonía neoliberal y el peso del fantasma hiperinflacionario (que, según dijimos, operó habilitando la preeminencia de la “estabilidad” como variable jerarquizada para evaluar la situación económica del país) permitían sostener “por abajo” una situación de creciente desigualdad. Esta porción de la población como novedad de la formación social argentina nacía, como insistimos desde el primer capítulo, marcada a fuego por la “constelación de sentidos” neoliberal, donde prevalece lo individual por sobre toda actividad colectiva o solidaria, el mercado por sobre la asignación de recursos desde el Estado y la figura del productor/emprendedor en lugar de la “ciudadanía”. Para comprender el marco de estabilidad en el que se desarrollaban estas transformaciones estructurales, no debemos subestimar el carácter “culpógeno y disciplinario” (Retamozo, Las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales en Argentina, 2009) del discurso neoliberal, como fundamento del gobierno para minimizar la responsabilización que sobre sus espaldas recaía de la creciente desigualdad, fundamentalmente por parte de la propia población excluida. A esta novedad en la formación social argentina la identificamos como una dislocación. Sin embargo, hubo un proceso transcurrido entre ella y la constitución identitaria donde el Estado era el antagonista responsable de la marginalidad para la propia población desempleada. Decimos así que toda dislocación es habilitante pero no necesariamente *deviene* en antagonismo. Las características que adopte la interpretación del fenómeno (en nuestro caso, como la responsabilización del Estado ante la creciente desigualdad), es el terreno político por excelencia.

Entre la inacción de principios de los noventa y el estallido social de diciembre de 2001, con los altibajos comunes a todo movimiento subterráneo descoordinado, comenzaba a forjarse la organización de la población que hoy caratulamos como la “economía popular”. Si, como vimos, “(...) a una dislocación no le corresponde necesariamente la aparición de un antagonismo” (Muñoz, 2006), dicha construcción fue fundamental en esta instancia de la trayectoria identitaria del sector, en tanto la definición de aquello que limitaba la plenitud de lxs desempleadxs era desplazada, pasando de la auto-inculpación a la responsabilización de otro. La incapacidad estatal venía a reemplazar a la incapacidad individual como razón de ser de la marginalidad, movimiento sustantivo para comprender tanto la organización como el devenir jacobino del movimiento de desempleadxs. Veremos, en adelante, las implicancias a nivel político que dicha construcción generaría.

Si el Estado era ubicado casi por la totalidad de las nacientes organizaciones sociales de desocupados como el responsable de la creciente desigualdad, la imposibilidad de fijar un sentido literal en toda identidad habilita una multiplicidad de interpretaciones sobre esa afirmación. El Estado ocupaba un lugar ambiguo, en tanto significativo que permitía unificar diversas interpretaciones de la crisis. El Estado puede ser responsable de la miseria generalizada en tanto gobierno neoliberal, en tanto gobierno burgués, en tanto reproduce una lógica estatal que produce desigualdad independientemente de quien lo gestione, etc... Decimos esto debido a que el pasaje del “quietismo” de los sectores subalternos de principios de los noventa a la irrupción del movimiento piquetero, no supuso una interpretación común respecto de ese “otro”, el Estado. Es decir, el giro político fundamental que abrió paso a la lucha y organización de múltiples actores fue el reconocimiento común de que la situación de los y las desplazados del sistema no respondía a incapacidades propias, sino a responsabilidades ajenas. En otras palabras, comenzaba a resquebrajarse el discurso oficial cobrando cada vez más verosimilitud la idea de que existía, invisible, un hilo común para explicar la situación de la población más desprotegida. Sin embargo, la responsabilidad fijada para construir ese “otro” antagonista tenía tantas caras como movimientos que surgían al calor de la organización en la población más humilde. La multiplicidad de razones y de estrategias diagramadas para su combate, explican la diversidad de corrientes que lentamente comenzaron a emerger a lo largo y ancho del país. Hablamos de movimientos de fuerte raigambre territorial, con características particulares respecto de los partidos políticos tradicionales.

### **Mujeres y jóvenes organizados en el barrio por trabajo digno**

Retomando el hilo de nuestra investigación, nos encontramos ante un interrogante puntual que orienta la reflexión del momento histórico y los actores que abordamos: ¿cómo fue posible y qué características adquirió esa ruptura de los sectores subalternos con el discurso hegemónico? En primer lugar, retomar la concepción de Antonio Gramsci respecto de que “(...) los sentidos anquilosados en la cultura subalterna pueden ser reaccionarios, pero también pueden servir como elemento significativo de cuestionamiento del status quo” (Retamozo, Trabajo, subjetividad y acción: desempleo, sentidos y acción colectiva, 2005). Di Marco y Palomino señalaron al respecto que

*“a mediados de la década pasada la gente sintió que había un proceso de profundización de la pobreza y que, además, no había retorno con respecto a la desocupación. Algo de la experiencia histórica de los argentinos se había quebrado y había que pensar soluciones alternativas a esto”* (Palomino, 2003).

Siguiendo a Retamozo, decimos que las “soluciones alternativas” que emprendieron los sectores subalternos respondieron a “necesidades materiales”, por un lado, pero también motivados por un “proceso de contención, integración y reconocimiento” (Retamozo, Trabajo, subjetividad y acción: desempleo, sentidos y acción colectiva, 2005). Esto se verifica, fundamentalmente, debido a que existieron diversas posibilidades en vistas de satisfacer las necesidades cotidianas, como por ejemplo la integración a las

redes clientelares tradicionales del justicialismo en el conurbano bonaerense o a iglesias disidentes, como refleja el importante crecimiento de la rama pentecostal dentro del evangelismo (Seman, 2003). Como señalan Svampa y Pereyra, “(...) la emergencia de organizaciones de desocupados tiene como telón de fondo la crisis y el debilitamiento del peronismo en los sectores populares” (Svampa & Pereyra, 2004). Surgieron agrupaciones que comenzaban a construir lecturas particulares para explicar su condición de excluidos. La organización fue la mediación necesaria entre una multiplicidad de desocupadxs con necesidades materiales insatisfechas, es decir con una demanda de trabajo específica, y la construcción de antagonismos. La proliferación de colectivos de desocupadxs, como espacios que buscaban garantizar de manera comunitaria la satisfacción de necesidades materiales, así como también la contención e integración en un contexto de creciente exclusión, aparecen entonces como síntoma de quiebre con el discurso hegemónico.

Es importante insistir en la centralidad que adquiría el trabajo para unir en una “posición de sujeto” a la población más afectada por las transformaciones estructurales que sufría el país. Al convertirse el (no) trabajo en el eje aglutinador, la construcción de la demanda contenía un potencial disruptivo mucho mayor al orden neoliberal que, comparativamente, el que podían mostrar las redes tradicionales del peronismo o aquellas donde el punto nodal respondía a una religiosidad específica. La población excluida que, como vimos, había asimilado y hasta “practicado” lógicas económicas promovidas por el neoliberalismo (de manera hibridada<sup>3</sup>, nunca totalmente “determinada”), comenzaba a organizarse por “trabajo digno”, movimiento “(...) que supone, por un lado, una continuidad con experiencias, representaciones e imaginarios populares (el trabajo como derecho) y por otro lado interpelaba al orden social manifestándole una demanda que choca con la imposibilidad estructural del sistema de satisfacerla” (Retamozo, Trabajo, subjetividad y acción: desempleo, sentidos y acción colectiva, 2005). Si el sistema era incapaz de absorber dichas demandas, la legitimidad construida del reclamo por trabajo volvía conflictiva la lucha de los sectores en incipiente proceso de organización y dotaba de radicalidad<sup>4</sup> al reclamo de sus actores. La organización de desocupadxs evidenciaba un agotamiento en la efectividad del discurso neoliberal como hegemonía disciplinar en una porción creciente de la población y el antagonismo emergía, en el mismo proceso de lucha, encarnado en el Estado. Sintomático de dicho agotamiento son los resultados que arroja un informe del documento PIMSA (Redes, 1998) realizado en La Matanza, donde 2/3 de las personas encuestadas manifestaban no estar de acuerdo en considerar que la desocupación era responsabilidad de quienes la padecen, rompiendo con un principio individualista caro al discurso neoliberal.

---

<sup>3</sup> Verónica Gago, en “La Razón Neoliberal”, caracteriza la pragmática popular como proceso de heterogeneidad radical, concepto para pensar la hibridación en las lógicas de reproducción, enhebrando (de manera desprolija, pretendidamente mecánica pero prácticamente azarosa) formas de hacer comunales con prácticas productivistas propias del desarrollo capitalista contemporáneo.

<sup>4</sup> Cabe aclarar que por “radicalidad” nos referimos a la capacidad construida a partir de instalar la demanda por “trabajo”, en tanto potenciaba cuantitativa y cualitativamente la capacidad de intervención sobre la realidad, generando mayores niveles de conflictividad. Vale la aclaración en tanto la utilización de dicho concepto esconde aquí una paradoja: hablamos de radicalidad cuando sectores empobrecidos luchan por “trabajo”, evidenciando pérdidas en derechos conquistados por parte de lxs trabajadores respecto de un pasado reciente. En términos históricos, se trata de una disputa “a la baja” por parte de los sectores populares, no siendo la “radicalidad” el concepto más adecuado para calificarla.

Efectivamente en Argentina comenzaba a forjarse un movimiento subterráneo de insubordinación que, de manera no-lineal, se aglutinaba en la demanda de trabajo a sectores desplazados de la posibilidad de acceso a un trabajo formal. La organización en espacios no-tradicionales, nuevas plataformas que condesaban diversas raíces y procedencias, pero donde el eje estaba puesto en un presente de exclusión, fue el caldo de cultivo para que emerjan discursos contrahegemónicos de manera creciente. La combinación entre estas novedosas construcciones discursivas y la urgencia por cubrir necesidades básicas materiales, fueron movimientos que se articularon con una re-territorialización hacia el barrio como “punto nodal” para la construcción identitaria, desplazando a la fábrica industrial como epicentro. A este respecto, es interesante la observación que realiza Retamozo para explicar el protagonismo de mujeres y jóvenes en el nacimiento y sostenimiento de estas organizaciones: “En definitiva, [las mujeres y los jóvenes] eran los que habían experimentado por más tiempo los lazos contruidos en el territorio [el barrio] y podían desembarazarse más fácil de los resabios culpógenos de asumirse como sin empleo” (Retamozo, Las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales en Argentina, 2009). La nueva matriz territorial que atravesaba las construcciones de desocupados implicó recuperar y resignificar prácticas y saberes comunitarios que moldeaban las organizaciones “barriales” preexistentes, donde mujeres y jóvenes asumían niveles de participación mayores que varones de la población económicamente activa. A su vez, el proceso “hibridado” que caracterizábamos previamente suponía combinar de diversas maneras saberes comunitarios de pueblos originarios locales y de poblaciones inmigrantes con lógicas de producción y consumo típicamente capitalistas. En ese complejo marco es que las organizaciones territoriales de desocupadxs comenzaban a gestar nuevos sentidos y nuevas prácticas en un contexto de creciente empobrecimiento.

### **El movimiento piquetero: la potencia de un método y la orfandad de un proyecto**

Si en fragmentos previos nos fue necesario aclarar la centralidad de la Provincia de Buenos Aires para comprender el peso específico de las transformaciones neoliberales en este territorio, la emergencia del movimiento piquetero responde a la confluencia de esta experiencia situada con “puebladas” ocurridas en el interior del país. Fue en estas manifestaciones donde surgió el método -corte de ruta-, la modalidad organizativa -la asamblea-, un nuevo tipo de demanda -los planes sociales- y una nueva identidad -la piquetera-, significantes que quedaron asociados para buena parte de la población en general. Estos piquetes fundantes tuvieron origen en el año 1996 en la localidad neuquina de Cutral Có y Plaza Huincul, y se replicarían en importantes puebladas en Salta y Jujuy entre 1997 y 1998 (Svampa & Pereyra, 2004).

El carácter fuertemente disruptivo del naciente movimiento piquetero residía, fundamentalmente, en la radicalidad de la acción directa, que tenía como fundamento la exigencia de soluciones concretas para paliar el déficit de trabajo que causaba que necesidades materiales básicas se encontraran insatisfechas.

La “crudeza” del reclamo y la capacidad de irrumpir en el espacio público impidiendo la libre circulación de sujetos y mercancías por vía pública, dotaron a piqueterxs de una visibilidad mediática extendida, nada despreciable y en constante crecimiento. El método piquetero fue cobrando relevancia por su efectividad comprobada. Sumado a ello, el carácter de “puebladas” que acompañó distintos piquetes le otorgó, a muchos de sus futuros impulsores en distintos puntos del país, una garantía para enfrentar las represiones oficiales y los posibles embates de organizaciones territoriales, en el Gran Buenos Aires, vinculadas al peronismo tradicional. Resulta gráfico, al respecto, el comentario de una jueza federal donde expresaba que “*es todo el pueblo que está en la ruta*” (Auyero, 2002) refiriéndose a un piquete de la población de Mosconi.

De esta manera, decimos que la irrupción radical plebeya del interior de país, con una creatividad exitosa si nos atenemos a la capacidad de instalar su demanda, conseguir visibilidad y capacidad de negociación frente a las autoridades, potenció la incipiente organización de desocupadxs en el foco territorial del desastre neoliberal: el conurbano bonaerense. Como señalábamos en el apartado anterior, así como las organizaciones de desocupados comenzaron a gestarse hacia 1995, “(...) estas no se hicieron visibles hasta que reconstruyeron un repertorio de acción colectiva que le otorgó visibilidad, capacidad estratégica y que aportó en la dirección de construir nuevos sentidos, estamos hablando, claro, del piquete” (Retamozo, Las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales en Argentina, 2009). Evidencia del rol estratégico del movimiento piquetero para la organización popular en general es el hecho de que “(...) si para 1992 se producía un corte cada siete paros, para 1998 esta proporción se había invertido” (Andujar, 2011). Resulta sugerente a su vez el hecho de que, previo a 1997, la magnitud de reclamos por planes sociales o trabajo representaba el 1% sobre el total de manifestaciones, variable que escalaría al 13% posterior a la fecha mencionada.

¿Cómo operó esta convergencia? Creemos que no fue solamente un traspaso de saberes prácticos entre sujetos de características similares organizados. Sostenemos que existe una diferencia en la identidad construida como “desocupadxs” respecto de los “piqueterxs”, en tanto la primera define al sujeto a partir de una falta: es la ausencia de trabajo lo que unifica la multiplicidad. Por el contrario, el mote de “piqueteros” permitía una identificación “por la positiva” con un potencial vaciamiento de fronteras difusas, en tanto la posición de sujeto no respondía a una estricta ubicación en la formación social argentina. En otras palabras, podría definirse como piquetero un estudiante de una Universidad del interior del país que reclamaba mediante la acción directa por presupuesto en educación, al igual que un desempleado de Tierra del Fuego o una ama de casa porteña. Siguiendo a Barros, decimos que

*“(...) una demanda social particular, puede ser examinada desde dos puntos de vista diferentes: desde la lógica de su contenido particular y desde la lógica de su capacidad potencial de transformarse en un espacio de representación para otras posiciones. La efectividad de esta demanda dependerá de su habilidad para reorganizar el espacio político, constituyendo un nuevo espacio de representación que absorberá e integrará otras demandas sociales. Esta absorción e integración implicarán que la demanda particular pierde parte de su particularidad”* (Barros, 2002).

Evidentemente, el método piquetero logró una efectividad tal que fue imposible ignorar las demandas del sujeto organizado y, al mismo tiempo, habilitó la identificación de un importante número de organizaciones de desocupadxs. Es decir que su *“capacidad potencial de transformarse en un espacio de representación para otras posiciones”* respondió fundamentalmente a la identificación del sujeto organizado con el exitoso método de acción directa, vaciando tendencialmente la especificidad del reclamo que dio origen al movimiento (ex trabajadores de petroleras privatizadas en el Sur argentino). Finalmente, la demanda pierde su particularidad mediante la identificación de un sinnúmero de actores con el movimiento piquetero. Nuestra hipótesis es que fue justamente este “tendencial vaciamiento” del significante “piquetero” lo que, al tiempo que diseminó un método de lucha que potenció la incipiente organización del sector de desocupados, habilitó la convivencia de múltiples orientaciones políticas al interior del movimiento. Dicha heterogeneidad, sin embargo, no obturaba la posibilidad de una crítica común, desde el movimiento piquetero, a “(...) los cimientos del neoliberalismo no sólo respecto de su propuesta económica sino particularmente al impugnar sus principios ideológicos” (Natalucci, 2011).

Al unificar la identificación de distintos sectores en lucha bajo el denominador común de un método de acción directa, habilitaba a que el resto de las características propias de cada actor puedan construirse de diversas maneras, incluso con principios antagónicos entre sí. El caso más notorio del extraordinario nivel de heterogeneidad al interior del movimiento piquetero lo refleja la coexistencia de organizaciones “autonomistas” que rechazaban de plano cualquier disputa institucional, con espacios vinculados a la izquierda tradicional o incluso peronistas. La mediación de “planes sociales” (con el “Plan Trabajar” como política pública más difundida, que en los 2000 pasó a llamarse “Plan Jefas y Jefes de Hogar”), fue un elemento clave para explicar la diversidad de “líneas políticas”<sup>5</sup>. Esto, debido a que la demanda *-trabajo digno-* era negociada con el Estado a través de planes, lo que obligaba a sostener un vínculo estrecho entre las partes y, por lo tanto, a tomar posición respecto de ese vínculo. Sostiene Maristella Svampa que, al interior del movimiento piquetero, podíamos identificar tres grandes lógicas políticas: una sindical, otra político-partidaria y, por último, una de acción territorial. Más allá de estas tres tipologías respecto de las lógicas subyacentes a cada agrupación, aparecían muchas veces entremezcladas en la organización concreta donde se combinaban trayectorias y saberes diversos.

De límites similares a los establecidos por la autora, Natalucci refiere a la heterogeneidad de líneas políticas al interior del movimiento piquetero, señalando la coexistencia de “(...) tres gramáticas: autonomista, clasista y movimientista” (*Ibid.* 2011). Esta última, ligada al ideario nacional-popular, era la porción minoritaria del movimiento, mientras que la “clasista” era dinamizada por fuerzas políticas de la izquierda partidaria argentina, por lo que reproducía su estructura ideológica para abordar la realidad e incidir políticamente. La porción más importante del movimiento piquetero se identificaba con los principios autonomistas, basada en la idea de “cambio social” a pequeña escala a partir de la construcción de “poder

---

<sup>5</sup> Tomamos de Juan Reynares el concepto de “línea política” como “el relato (...) sobre lo que sucede y lo que se proponen hacer {los dirigentes} a partir de ese diagnóstico, en una coyuntura de relativa duración”.

popular”, de manera paralela al Estado. A este lo conciben como “(...) monolítico, unívoco, desconociendo que su composición es el producto de relaciones sociales en pugna”, lo que redundaba en “(...) muchas resistencias a pensar en una dinámica instituyente” (*Ibid.* 2011). Más adelante nos detendremos con mayor precisión sobre este aspecto. Por lo pronto, interesa recalcar la heterogeneidad política del movimiento como factor de peso para comprender la deriva del mismo.

### **No fue magia: entre la potencia destituyente y los debates instituyentes del movimiento piquetero hacia 2001**

*“Las asambleas barriales mostraban que la crisis era total: como por arte de magia, el nuevo ethos destituía la totalidad de poderes causales previos (partidos políticos, sindicatos), incluyendo aquellos que pudieran invocar un saber profesional, una expertise, cualquier suplemento de sentido que apuntara a la expropiación de la voluntad política asamblearia o pudiera ser portador de una tentación hegemónica” (Svampa, 2011)*

Durante el último mes del año 2001, las consecuencias de la política neoliberal en Argentina desembocarían en un estallido social sin precedentes en la historia nacional. El gobierno aliancista conducido por Fernando de La Rúa había asumido en 1999 en un contexto marcado por la creciente desigualdad, como señaláramos previamente. Sin embargo, la orientación político-económica que explica dicha situación no fue cuestionada: por el contrario, ninguno de los pilares del modelo neoliberal fue alterado. La convertibilidad, por caso, continuó ordenando la política monetaria argentina, al mismo tiempo que la apertura comercial y el vínculo estratégico con los Estados Unidos no se modificaron. El dato distintivo respecto del modelo menemista respondía a la dificultad de la Alianza para garantizar el ingreso de divisas que equilibre la balanza comercial: ya no quedaban empresas estatales a ser privatizadas y el acceso al crédito se encontraba fuertemente limitado debido a la acuciante herencia financiera (Rapoport, 2018). La reprimarización de la economía argentina se había consolidado y sólo el movimiento de capital financiero podía redundar en ingresos de divisas, volviendo a la economía nacional extremadamente frágil a los vaivenes del contexto internacional. La imposibilidad del Estado de afrontar el pago de intereses de deuda inducía al gobierno a tomar una decisión: o bien modificar alguna de las variables fundamentales del modelo económico, o bien recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir crédito que le permita postergar una crisis inminente. La salida fue recurrir al FMI, iniciando un breve período de negociaciones y renegociaciones que se agotaría en 2001 con la declaración de default, es decir, la cesación en el pago de intereses de deuda.

Pero no fue solamente la agencia institucional lo que provocó los sucesos que derivaron en la renuncia anticipada de Fernando de La Rúa: como señala Natalucci enfáticamente, “(...) el ciclo de movilización abierto en 1997 tuvo una fuerza destituyente excepcional al punto de contribuir decididamente a la inestabilidad política durante 2001 (...)” (Natalucci, 2011). ¿Qué transformaciones en la movilización social

se sucedieron para comprender el rol protagónico del emergente movimiento piquetero en la destitución de 2001 de estos sectores? Natalucci entiende que fueron dos las consecuencias nodales de esas transformaciones en la movilización social que explican su potencia:

-La acción directa de los movimientos post-1997, con el escrache y el piquete como métodos más difundidos, esparcieron una lógica para la toma de decisiones que contrariaba la forma que adoptaba la política tradicional. La ciudadanía ya no quería recluirse para observar cómo otros tomaban decisiones por su cuenta: como señala la autora, “concretamente, lo que se quebró fue la autorreferencialidad de la clase política” (*Ibid.* 2011). Si la organización replicaba en el debilitamiento de aquella concepción instrumental de la democracia, la dinámica asamblearia contribuía a formular un sentido más colectivo de lo político, otorgándole la posibilidad a sectores postergados de tomar la palabra y representarse a sí mismos.

-La recuperación de una gramática del Estado asociada a la garantía y promoción de derechos. En la constitución del Estado como antagonista, los reclamos venían dados por su responsabilidad en la insatisfacción de necesidades básicas que debía garantizar. Refiere, precisamente, a lo que en nuestro trabajo denominamos como “politización” del desempleo por parte del sector excluido del mercado formal. No pueden explicarse las singularidades de la crisis sin tomar en cuenta el creciente proceso de organización y progresiva radicalización de la población excluida y empobrecida desde principios de la década. El sector de la sociedad más damnificado por la reestructuración neoliberal se encontraba, a finales de la década del 90, con herramientas generadas en la novedosa organización popular que le permitían erigirse como factor destituyente de peso.

Ahora bien: ¿cómo explicar que un movimiento emergente, de innegable capacidad destituyente, no haya sido también parte fundamental en la (re)construcción posterior a la crisis de 2001? En primer lugar, debemos reconocer la heterogeneidad de “líneas políticas” propia del movimiento piquetero: la coexistencia de espacios que coincidían en un plano reivindicativo, pero divergían respecto al modelo de país a construir y, por lo tanto, en los medios para su consecución. Dicha heterogeneidad es ya un factor fundamental para la construcción de un bloque con protagonismo piquetero, y sin embargo no agota la explicación, entendemos, respecto de su fragilidad instituyente.

Cabe recordar, como dijimos previamente, que la tendencia predominante de las tres líneas políticas caracterizadas era la autonomista, facción de frágil organicidad debido justamente a la forma de comprender la política: la centralidad era puesta en las construcciones “de base”, en territorios específicos, sin forjar grandes acuerdos ni “orgánicas” más allá de lo local (Longa, Formas organizativas y subjetividad política. Una lectura generacional de los ‘ethos militantes’ en el Frente Popular Darío Santillán, 2003). A lo sumo, los espacios de mayor alcance territorial se convertían en grandes “coordinadoras” de trabajos de base, desarrollando la política “desde abajo” hacia arriba, es decir, jerarquizando lecturas e iniciativas territoriales por sobre definiciones generales. Siendo esta línea política mayoritaria, resulta más fácil comprender la ausencia de un proyecto surgido desde las entrañas del movimiento político que mayor capacidad había demostrado para fracturar el hegemónico discurso neoliberal y, además, había sido parte

fundamental en el proceso de movilizaciones previos y durante diciembre de 2001. Ahora bien: ¿qué explica el carácter “mayoritario” de esta tendencia? Si las variantes de izquierda partidaria y la “nacional-popular” contaban con un trayecto mucho más extenso y desarrollo territorial previos, ¿cómo comprender la difusión de esta línea política en tan pocos años de existencia del movimiento?

Es que la identidad piquetera, según dijimos, fue constituyéndose al calor de la politización que lxs desempleadxs realizaban respecto de su condición de excludxs del mercado laboral formal. Como intentamos demostrar previamente, este proceso implicó resignificar al Estado, elemento que pasara a ocupar un lugar fundamental en la explicación del/la desempleadx como responsable de la exclusión. La autoinculpación ya no era la explicación predominante a la hora de justificar el desempleo, sino que comenzaba a imponerse la idea de un problema sistémico, al cual le correspondía una solución estatal:

“El gobierno dice: salen los planes “Trabajar”, los planes de esto, los planes de lo otro, pero se creen que los desocupados están solamente en las clases bajas (...) *Entonces es como que a nosotros nos tienen ahí en el medio, nos dejan ahí, a la buena de dios (...) Por eso yo sí, me siento desprotegido*” (Bayón, 2003)

Esa identificación del Estado como institución protectora, que no realizaba plenamente su cometido, sino que operaba con mala praxis, errando en la construcción de diagnósticos y “utilizando” a ciertos sectores a fines corporativos, significa un movimiento importante de las responsabilidades asignadas. Responde al proceso de “politización” del desempleo que señalamos. La construcción identitaria del movimiento piquetero ubicaba al Estado como responsable y cómplice de la exclusión en la que estaban inmersos. El Estado constituía la identidad piquetera en tanto otredad responsable de la miseria. Así, una explicación que ubicara al Estado como radical otredad, responsable de la miseria no debido a su orientación política específica, sino a su lógica propia, a su mera existencia, resultaba perfectamente verosímil. Nos referimos a una valoración negativa del sistema político en general, donde la inexistencia de alternativas reales de poder desde una facción importante de los movimientos populares, responden a una crítica esencialista a la “lógica estatal”.

Las implicancias de este proceso de politización resultan ahora más concretas para responder nuestro interrogante: la demonización del Estado como institución responsable de la miseria lo ubicaba en la discursividad piquetera como “otro” al cual había que “arrancarle” derechos. Dicha identificación volvía verosímiles discursos radicalmente anti-Estado, al tiempo que ubicaba bajo un manto de sospechas a todo espacio proveniente de la “política tradicional”, como “contaminados” por su lógica propia, causa-eficiente de las desigualdades sociales en tanto herramienta fundamental de los sectores dominantes. No resulta sorprendente, entonces, la preminencia de sectores autonomistas por sobre minorías de izquierda partidaria y movimientistas/nacional-populares, vinculados estos últimos al sistema político institucionalizado.

*“Nosotros no confiamos en ningún gobierno, en ningún político, creemos que la situación no se va a cambiar por ese lado, sino atacando directamente a los intereses que se están llevando la riqueza de nuestro país (...)”* (Santillán, 2001).

Sorprendentemente, la vanguardia en la lucha frente a los gobiernos neoliberales de Menem y De la Rúa articulaba su potencia destituyente con una asociación negativa apriorística entre la acción estatal y un horizonte de bien común. Resulta esclarecedora, al respecto, la respuesta del líder piquetero Darío Santillán (asesinado por la policía bonaerense, meses después, en una recordada manifestación piquetera de puente Pueyrredón) ante la consulta, en el año 2002, sobre la perspectiva propositiva del movimiento piquetero. Como señala Muñoz, “(...) la falta de articulación entre demandas detrás de un proyecto “piquetero” (...) fue la oportunidad para que otros actores “hegemonizaran” esas demandas dispersas en el espacio social” (Muñoz, *Sísifo en Argentina: orden, conflicto y sujetos políticos*, 2012). No es casual el derrotero en los debates de las organizaciones entre 2001 y las elecciones presidenciales de 2003. El movimiento popular argentino comenzó a darse discusiones que giraban en torno al siguiente eje: cómo actualizar la orientación política desde las organizaciones que, si bien habían cumplido un rol central en el proceso destituyente, se encontraban ahora con una coyuntura donde la incertidumbre signaba cualquier alternativa que se propusiera instituyente. Como marca Longa, en Argentina el dilema

*“(...) emergió fuertemente durante el ciclo de luchas instituyentes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en el marco de la proliferación de un conjunto de movimientos sociales autogestivos como asambleas barriales, fábricas recuperadas y movimientos de trabajadores desocupados, entre otros”* (Longa, 2018).

El autor entiende que, originariamente, la dinámica para el funcionamiento de estos movimientos se encontraba signada por soluciones vinculadas al trabajo en las barriadas populares y que “(...) rechazaron la disputa institucional” (*Ibid.* 2018). Sin embargo, con la asunción de Néstor Kirchner en 2003 “(...) los contornos de este debate cambiaron sustancialmente, experimentándose un verdadero cambio de época en el país (Svampa, 2008)” (*Ibid.* 2018). Al respecto de ese cambio de época, señala Natalucci que “(...) ese proceso tuvo una seria deficiencia. Dicha movilización renegaba de la dimensión instituyente de la política, transformándose esto en una limitación”. Creemos que la construcción del antagonismo, que permitiera la constitución identitaria del emergente movimiento de desocupadxs a partir de la dislocación referida operó, a su vez, sobre la definición de las líneas políticas que prevalecieron en la disputa instituyente post-2001. Esto, no solamente por el carácter difuso de las fronteras del movimiento piquetero que caracterizamos, sino también por las especificidades identitarias del sujeto. De alguna manera, si el Estado funcionaba como el exterior constitutivo de la identidad excluida, ¿cómo imaginar que sea a través de su integración el medio indicado para mejorar las condiciones de vida de sus representadxs? De esta manera, ese “laboratorio político social” (a partir de la multiplicación de “focos de rebeldía” (Svampa, Argentina, una década después, 2011)) en que se había convertido la Argentina, producto de la crisis hegemónica del modelo neoliberal, que “(...) impugnaba la formas convencionales de representación

política y buscaba recomponer molecularmente el vínculo social desde abajo” (*Ibid.* 2011), prontamente mostraba incapacidad para generar un proyecto alternativo de país.

El estallido de diciembre de 2001, entonces, ligó a este sector de la población con sectores medios damnificados por la política económica, en particular debido a la iniciativa gubernamental de limitar la extracción de dinero atesorado en bancos, popularmente conocida como “corralito”. La consigna que logró unificar fue el “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, en referencia al conjunto de la clase política nacional. Sin embargo, resulta interesante remarcar que esa crisis de representatividad respondía a la confluencia de sectores de trayectoria identitaria bien distinta. Si el rechazo a la clase política por parte de la población desempleada respondía a un proceso que venimos caracterizando, el desencanto de los sectores medios se encontraba atravesado por dinámicas específicas que exceden el alcance de este trabajo. Simplemente interesa remarcar que la heterogeneidad de proyectos no solamente era interna al movimiento piquetero, sino también del conjunto unificado por el rechazo a la clase política. En ese marco, los sectores movilizados desde mediados de los noventa tampoco tuvieron la capacidad para configurar un proyecto que interpele a esas grandes mayorías más allá del sujeto organizado. Por el contrario, un rápido repaso a los resultados electorales de las elecciones de 2003 nos permitirá constatar cómo variantes internas al muy deslegitimado sistema político argentino fueron las más votadas a nivel nacional.

## **Conclusiones**

A modo de conclusión de este segundo capítulo, decimos que el sector de nuevxs desocupadx de los años noventa atravesó una trayectoria desde la desorganización y atomización (donde el carácter hegemónico del neoliberalismo traducía el desamparo como culpa individualizando cualquier alternativa que permita salir de la exclusión), hacia un creciente agrupamiento bajo la bandera del trabajo digno, construyendo de manera descoordinada un movimiento piquetero de gran diversidad política en su interior. Este proceso supuso, además, la constitución de una identidad y la difusión de la misma bajo fronteras difusas, admitiendo su apropiación por diversos actores en lucha y movilizados a nivel nacional, conviviendo bajo su denominación muy diversas líneas políticas.

Respecto del proceso de des-colectivización fundamentado en el primer capítulo pudimos reconocer, a partir de incorporar la voz de la propia población aludida, cómo operaron esos sentidos contruidos coherentemente con un dispositivo como el neoliberal, obturando transitoriamente la posibilidad de acción colectiva que tienda a cuestionar su lugar de exclusión. Justamente, la potencia del discurso neoliberal radicaba en volver hegemónica (es decir, construir como la más verosímil de todas las interpretaciones posibles) la idea del sujeto individual en el mercado, que triunfa o fracasa fundamentalmente debido a destrezas propias. En tanto esa cosmovisión se erigiese como la más diseminada y aceptada, resultaba

muy complejo construir un antagonista claro que identifique al polo excluido y delimite las fronteras entre el nosotros y ese “otro” responsable de la miseria.

Pudimos observar también cómo, hacia mediados de la década menemista, comenzaron a aparecer diversas organizaciones territoriales más allá de la tradicional red del peronismo en Provincia de Buenos Aires. Desde organizaciones religiosas hasta espacios de trabajo territorial centrados en la necesidad creciente de resolver problemáticas básicas/materiales de la población. La creciente exigencia de trabajo por parte de estos últimos fue condición de posibilidad para la constitución de un antagonismo, frente a un sistema imposibilitado estructuralmente de incluir al conjunto de la población. En paralelo, distintas ciudades y pueblos del interior del país comenzaban a ser renombradas por la aparición de un método de lucha particular: la acción directa con corte de ruta y asamblea por diversas exigencias al gobierno. La identidad piquetera que emergía cobraría entonces un enorme peso, al permitir a ese conjunto de agrupaciones nucleadas fundamentalmente en Buenos Aires apropiarse del método y, por lo tanto, de la identidad piquetera.

La creciente organización de sectores marginados permitió a sus agrupaciones exigir al gobierno la necesidad de tomar ciertas medidas para paliar el déficit social, siendo los planes sociales la moneda de cambio en la negociación. La efectividad del método piquetero condujo a la diseminación y apropiación creciente de dicha identidad por amplios sectores en lucha. En ese mismo movimiento, el apego de la identidad respecto del método favoreció la coexistencia, en el amplio abanico de espacios autoidentificados como piqueterxs, de múltiples “líneas políticas”. La negociación por planes sociales profundizó las diferencias al interior del espacio debido a la necesidad inevitable de posicionarse de algún modo frente a la institucionalidad. Este escenario es el antecedente fundamental que nos permitirá comprender la diversificación de estrategias en los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner. Sumado a ello, la identificación del Estado como el “otro” al cual se le disputaba poder, generó las condiciones para la difusión de un relato anti-Estado “sin más” entre los sectores organizados. Esta “marca” en la identidad del fenómeno emergente, como sujeto que construye de manera antagónica al Estado, la creemos fundamental para acercarnos a la configuración de líneas políticas hacia fines de los noventa.

Rechazamos, con Laclau, lecturas racionalistas donde la “línea política” puede ser deducida de la posición del sujeto en la estructura social del caso particular que tratemos. Ello implicaría suponer que “(...) la sociedad sea una adición de grupos separados, cada uno de los cuales tiende a su propio objetivo y está en constante colisión con los otros” (Laclau E. , ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?, 1986). La idea de “orden” en un contexto de desorden radical como la Argentina en 2001, puede significarse a partir de la presencia de una ausencia. Es decir, el orden puede representarse como aquello que está ausente. El “recipiente” (significante) que ocupe ese lugar no está predeterminado, ni existen razones de orden causal que doten, de manera apriorística, a determinados términos de mayor potencialidad para poblar ese espacio: “hegemonizar algo significa, exactamente, llenar ese vacío” (*Ibid.* 1986). Nuestra hipótesis, como mencionábamos previamente, es que la resistencia a una disputa

hegemónica que contemple la cuestión estatal responde a la persistencia de sentidos caros a la identidad piquetera, siendo la fórmula autonomista la variante ideológica que permitió articular el rechazo a la lógica estatal con una salida anti-sistémica. De hecho, identificarse con lo “anti-sistémico” respondía fundamentalmente a atacar al Estado como institucionalidad burguesa. En definitiva, reconocemos en este período una politización del desempleo y, con ello, una antagonización con el gobierno nacional: ello, sin embargo, no supuso la construcción, en paralelo, de un proyecto de estatalidad con capacidad de imponerse en un escenario de crisis como el acontecido hacia fines de 2001.

En el marco de una aproximación ideológica al trayecto identitario de los sectores de la economía popular hacia la conformación de la CTEP, es fundamental precisar que la insubordinación de sectores subalternos desde mediados de la década de los noventa es un hito precioso para comprender la rebelión popular de diciembre de 2001. Es que las fracturas iniciales del discurso neoliberal fueron impulsadas “desde abajo” por un conjunto importante de sectores excluidos que, de manera desarticulada pero pragmáticamente complementaria entre el centro y las periferias nacionales, pudieron construir formas de organización y protesta efectivas. De conjunto, estas articulaciones fundaron una praxis que cuestionaba las bases del proyecto neoliberal a través de la constitución de una demanda -trabajo digno- que no podía ser satisfecha. La asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación en Mayo de 2003, modificaría las coordenadas en que las organizaciones que aglutinaban a buena parte de la población marginada en los noventa se desenvolvían. Un nuevo modelo de acumulación, de un gobierno de procedencia peronista, pero con perfil novedoso, obligaría a las organizaciones a tomar posiciones, dividiendo así las aguas en ese espacio tan diverso. En el siguiente capítulo buscaremos dar cuenta de los movimientos que explican el último trayecto hacia la conformación de la CTEP, indagando los debates de las organizaciones, el modelo de acumulación y las operaciones políticas que posibilitaron el surgimiento de ese espacio.

# Capítulo IV

## *El tesoro de los inocentes*

*“Y sobre todo, pregunta para el presente y **para el futuro**: ¿cómo establecer con las masas relaciones que, yendo más allá de la clásica distinción sindicato–partido, garanticen el desarrollo de las iniciativas populares, que **ya superan la división entre economía y política**, y también su unión?”*

*(Louis Althusser en “Dos o tres palabras (brutales) sobre Marx y Lenin”- 1977)*

*“Nos enfrentamos con una fragmentación creciente de los actores sociales, pero esta fragmentación, lejos de ser el motivo para ninguna nostalgia de la “clase universal” perdida, debe ser la fuente de una nueva militancia y de un nuevo optimismo.”*

*(E. Laclau en “Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo”)*

### Introducción

Las características de la formación social argentina se alterarían de manera sensible a principios de los años noventa. La gran cantidad de nuevos desempleadxs forjaría un sujeto tendiente a desarrollar iniciativas de sobrevivencia novedosas, imposibilitado estructuralmente de acceder al mercado laboral formal. Como vimos en el primer capítulo, no hubo acción colectiva significativa entre la población desempleada, signada por la construcción de un ethos individualista y culpógeno en la búsqueda de explicaciones de su condición de excluidos/as. El sujeto típico al que hacemos mención (varón del conurbano bonaerense) sufría la exclusión y el lugar de reclusión era el barrio, donde tradicionalmente mujeres y jóvenes ocupaban parte importante de su jornada diaria. De allí que, progresivamente y bajo el liderazgo de estos últimos, comenzara la organización por trabajo. El estallido económico, político y social de 2001 no puede explicarse sin este continuo “despertar” de la organización del sector desplazado del mercado laboral formal argentino. Este proceso, al ritmo de los crecientes índices de pauperización, fue ganando en radicalidad, con la pueblada de Cutral Có y Plaza Huincol como bisagra en la aparición y difusión de la identidad y el método piquetero. Al calor de los acontecimientos, surgieron y se multiplicaron organizaciones territoriales de distinto signo o línea política vinculadas a sectores empobrecidos, desde donde se organizaban alternativas económicas, culturales y movilizaciones para reclamar por planes sociales. Esto significó una novedad en la tradición organizacional de los movimientos sociales en Argentina, forjando nuevas estructuras ajenas a la forma-partido tradicional.

El estallido de 2001 hizo entrar en crisis al sistema político argentino. La consigna del “que se vayan todos” permitió aglutinar un sinnúmero de organizaciones sociales con sectores medios urbanos, empobrecidos y bajos. La crisis de representatividad complejizó cualquier impulso “normalizador” que pretendiera recuperar la institucionalidad perdida. La renuncia de Fernando de La Rúa como presidente de la Nación puso en evidencia dos características del movimiento emergente de organizaciones

territoriales antes mencionadas: la potencia destituyente y la fragilidad instituyente. La heterogeneidad del movimiento en cuanto a la línea política adoptada por cada cual replicaba en una imposibilidad de construir acuerdos más allá del plano reivindicativo. Como mencionamos en el capítulo previo, el rechazo de buena parte de las organizaciones de desocupadxs a generar una propuesta “por la positiva”, bajo un proyecto civilizatorio que condense un conjunto de acuerdos del sector más excluido de la población, era sintomática de la forma que adquirió el antagonismo frente al Estado, como constitutivo de la identidad piquetera. Tal es así que fueron finalmente variantes internas al ya muy deteriorado sistema político, que lograron tomar las riendas de la institucionalidad a nivel nacional. De esta manera, luego de casi dos años de incertidumbre y altos niveles de conflictividad institucional y callejera, Néstor Kirchner asumía como presidente de la Nación el 25 de Mayo de 2003. Si las discusiones al interior de las organizaciones territoriales, ordenadas por los sucesos de 2001, comenzaban a focalizarse en el rol del Estado en general y el vínculo entre las partes en particular, la asunción de un gobierno con una política específica para estos movimientos terminaría por acrecentar esas diferencias.

El gobierno kirchnerista iniciaría un ciclo de marcadas rupturas respecto del modelo neoliberal (1989-2001) (Longa, Formas organizativas y subjetividad política. Una lectura generacional de los ‘ethos militantes’ en el Frente Popular Darío Santillán, 2003). El sector excluido de la economía, con sus dirigentes y organizaciones atravesadas por un proceso de organización creciente y un ‘ethos’ militante marcado a fuego por el 2001, se veía obligado a posicionarse de una u otra manera frente al nuevo gobierno. Si durante la década del noventa surgió una población desempleada estructuralmente marginada, que más tarde comenzaría a organizarse para reclamar trabajo y formaría parte activa de los sucesos destituyentes de 2001, la década subsiguiente sería testigo de dos transformaciones fundamentales: las características del modelo de acumulación, que afectaría al conjunto de la economía nacional; y las características del sector organizado, con la conformación de la CTEP como acontecimiento fundamental y punto de llegada de un extenso proceso precedente. Sin embargo, las rupturas con el modelo neoliberal no redundaron en la desaparición (ni siquiera la disminución) de la economía popular: por el contrario, el peso del sector en la economía local incrementó en ese lapso.

Según lo dicho, abordar el sector de la economía de excluidos durante el kirchnerismo nos presenta, de entrada, una gran paradoja. Si coincidimos en que el modelo de acumulación fue distinto del neoliberal (punto que abordaremos a continuación), con mejoras en prácticamente todos los índices referidos a las condiciones de vida de la población, sorprende el hecho de que el sector de “la otra economía” no haya disminuido en su tamaño, sino incluso haya crecido su peso específico en la economía nacional respecto de la década de los noventa. En otras palabras, la paradoja radica en que la ejecución de un modelo económico distinto al neoliberal propio de la década Menem-De la Rúa, no haya tenido la capacidad de retrotraer índices de empleo formal previos.

La continuidad de esta porción de economía popular durante el kirchnerismo nos conduce a caracterizar alteraciones cualitativas en su interior. En el presente capítulo, en primera instancia buscaremos

caracterizar brevemente al modelo económico kirchnerista y el marco discursivo según el cual se pretendía legitimar dicha orientación. Desde allí, adentrarnos en las implicancias discursivas del “modelo” kirchnerista en la economía popular, donde identificamos cierta ambigüedad significativa para definir la política para con los sectores estudiados.

¿Cómo se articula dicha ambigüedad con la emergencia de la CTEP? Entre la continuidad del sector aún en un contexto de crecimiento económico sostenido y las mejoras cualitativas en sus condiciones de vida; entre la difusión de un discurso estatal antagónico al neoliberalismo vinculado a la inclusión social fundamentada muchas veces a la mejora en los índices de consumo y la proliferación de una racionalidad articulada con sentidos propios de ese exterior constitutivo: en ese contexto distintas organizaciones territoriales creaban la organización de trabajadores de la economía popular. Este es el punto de llegada de nuestro análisis de la trayectoria identitaria del sector, cerrando un ciclo particular entre su emergencia como novedad en la formación social argentina de los noventa y su organización en la CTEP.

### **Neodesarrollismo**

El gobierno de Néstor Carlos Kirchner, iniciado en Mayo de 2003, adoptaría características de marcada ruptura con el modelo precedente desde un comienzo. Sin pretensiones de ahondar en este punto, simplemente referenciar la política de integración regional, de derechos humanos, en materia represiva y de seguridad, educación, ciencia y tecnología, etc...:

“Entre los dos procesos de producción del sujeto que coexisten, el Estado cambia sus poderes regulatorios y su forma de regulación en la salida del neoliberalismo, aumenta su capacidad de intervención, amplía políticas focalizadas y comienza a tener políticas direccionadas o que interactúan con las organizaciones sociales” (Serra, academia.edu, 2015).

En términos netamente económicos, coincidimos con Svampa (Svampa M. , 2011) en caracterizar al modelo como una apuesta por un “consenso neodesarrollista”, donde la economía argentina (al igual que en el conjunto de países latinoamericanos a comienzos de siglo) forzaría una creciente reprimarización. En un contexto de aumento del precio de commodities a nivel internacional, gobiernos latinoamericanos de orientación progresista veían en el aumento de exportaciones una herramienta que les permitía mayor soberanía en el escenario global. De la mano de esta reorientación, los gobiernos posneoliberales latinoamericanos<sup>6</sup> volcaban el excedente en el fomento y desarrollo de un mercado interno disminuido,

---

<sup>6</sup> Usamos la definición de Benjamín Arditi de gobiernos “posneoliberales” para denominar al conjunto de fuerzas políticas que condujeron los destinos de países latinoamericanos y tendieron a un fortalecimiento del desarrollo regional. Estos “parecidos de familia” pueden discriminarse, como lo realizan numerosos autores (Féliz, Hagman, etc...) en sub-grupos atendiendo a modelos de mayor o menor radicalidad. Sin embargo, nos parece suficiente para la definición de Arditi para referir a gobiernos que, con matices, forzaron rupturas respecto del neoliberalismo descarnado típico de los años 80 y 90.

heredado de una década donde el acento era puesto antes en la oferta que en la demanda. La encrucijada de estos gobiernos respondía al hecho de que, en pos de diversificar una economía extremadamente extranjerizada y, por lo tanto, dependiente, pusieron en marcha un modelo cuya base angular era la exportación de materias primas, de bajísimo valor agregado. Atado al valor elevado de las commodities, el modelo neo-desarrollista era cuestionado por autores como Svampa debido a una supuesta incongruencia entre una retórica “nacionalista” en términos económicos y, a su vez, una creciente dependencia producto de un modelo extranjerizante, perjudicial para el medio ambiente y cortoplacista en tanto el alto valor de las commodities no garantizaba estabilidad en el tiempo. Para sostener dicha interpretación, la autora muestra cómo en todos los países de la región incrementó el peso de las exportaciones de materias primas sobre el total: entre 2008 y 2009 “(...) para el caso del MERCOSUR (...) pasaron del 59,8% al 63,1%” (*Ibid.* 2011). De allí que el estilo de desarrollo sea caracterizado como “extractivista”, un “(...) patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como ‘improductivos’” (*Ibid.* 2011).

Si bien no compartimos las conclusiones políticas que Svampa extrae desde dicho abordaje, no nos interesa entrar en la discusión respecto de la supuesta impostura de los gobiernos progresistas, sino simplemente señalar que fue pieza clave del modelo kirchnerista el fomento de la productividad y crecientes niveles de exportación de materias primas. Desde allí, el gobierno captaba divisas que le permitieron impulsar el consumo en el mercado interno. La distribución del ingreso se realizaba de manera directa (incrementando el alcance y montos de asignaciones familiares a sectores desprotegidos) e indirecta, aumentando el conjunto de partidas presupuestarias, absorbiendo personal al sector público, etc.... Un modelo que buscaba ubicar al Estado como impulsor de una economía que lograba bajar los niveles de desigualdad, por ejemplo, graficados en el índice de Gini (Redacción, 2016). Como señala Hagman, entre 2003 y 2009 el gobierno tuvo la posibilidad (y, agreguemos, la capacidad) de compatibilizar el crecimiento de dos variables que, en la historia de nuestro país, difícilmente fueron posibles de efectivizar. Por un lado, el aumento de la tasa de ganancias del conjunto del sector empresarial y, al mismo tiempo, incrementar el poder adquisitivo de los/as trabajadores y niveles de consumo en general de sectores populares (Hagman, 2014). Volveremos sobre el vínculo entre extractivismo y un modelo de “capitalismo con inclusión social” más adelante. Por ahora, simplemente, señalar con Gago que

“(...) es posible detectar al menos dos grandes ruedas girando sobre un mismo eje: una de ellas hace girar los negocios vinculados a recursos naturales (*commodities*) y en torno a la otra se despliegan una miríada de negocios sostenidos en la circulación interna del capital, dinero y mercancías” (Gago, 2014).

El conflicto desatado por el intento del gobierno de ejecutar la resolución 125, que buscaba elevar el cobro de retenciones para las exportaciones agropecuarias, abría lentamente un nuevo período donde esa compatibilidad entre crecimiento de ganancias empresarias y poder adquisitivo del conjunto de la población, se tornaría cada vez más dificultoso. Los niveles de crecimiento económico previos configuraban un nuevo escenario, en un juego de suma cero en el que dicha compatibilidad

“(…) era difícil de sostener en un contexto en donde ya no era posible hacer crecer los salarios sin afectar las ganancias empresarias ni hacer crecer la rentabilidad del capital sin reducir los ingresos populares” (Hagman, 2014).

La imposibilidad del gobierno de torcer la resistencia de las entidades agropecuarias, complotadas con el conjunto del establishment económico y mediático, obturó la posibilidad para el gobierno de resolver dicha disputa macro-económica en favor de las grandes mayorías. Luego, la premisa de concertar en “sintonía fina” entre Estado, sindicatos y el empresariado de 2011 en adelante, mostraba las intenciones del gobierno de, en un contexto internacional complejo, intentar sortear el cuello de botella alcanzado entre sectores del capital y el trabajo mediante la prolongación en el tiempo de un empate entre partes.

En definitiva, nos interesa referenciar al neodesarrollismo como modelo económico propio del kirchnerismo donde la apuesta por apuntalar economías extractivas era condición de posibilidad para dinamizar el mercado interno y, a partir de sus resortes, reconstruir una industria nacional fuertemente degradada. A su vez, ese fortalecimiento del extractivismo era condición de posibilidad de una política social de signo inclusivo, de consecuencias específicas en la economía popular que buscaremos caracterizar. Finalmente, identificar al giro post-2011 de “sintonía fina” como símbolo de un reajuste respecto de la forma que iba a adoptar la distribución del ingreso en Argentina. Ambos fenómenos resultan ineludibles para comprender el proceso identitario que va desde la atomización del movimiento piquetero a principios de siglo, a la unificación en la CTEP en 2011.

### **Circuitos entre el avión, el tren y las chancletas**

Si bien los niveles de desempleo descendieron notablemente entre 2001 y 2015, es importante recordar, en primer lugar, que hubo modificaciones en la metodología elaborada para su cálculo. Como vimos en el capítulo II, las transformaciones en la formación social argentina condujeron a que la Encuesta Permanente de Hogares en 2003 comenzara a contemplar iniciativas previamente catalogadas de “no convencionales”, como iniciativas de trabajo. Las transformaciones del mundo laboral en los años noventa parecían no tener retorno, a tal punto que el propio Estado se veía obligado a resignificar el sentido del trabajo. Por lo tanto, la estadística oficial no debe confundirnos: el sector de trabajadorxs excluidxs del mercado laboral formal durante los años noventa, ese 25% que, con altibajos, se sostuvo durante aquella larga década, entre 2003 y 2015 no se redujo para regresar a la formalidad, sino que su estatus se modificó *cualitativamente*. En otras palabras, decimos que las condiciones de vida mejoraron en la población estudiada en tanto los niveles de consumo incrementaron, producto de un modelo económico diferente al neoliberal en este aspecto. La forma en la que se insertaron en la economía responde a un nuevo circuito, paralelo al formal pero decididamente interdependiente. ¿Cómo afecta la dinámica estructural de la economía nacional al sector en cuestión?

Grabois y Pérsico, dirigentes de la CTEP, caracterizan al mercado laboral argentino del nuevo siglo como el producto de una economía que se mueve a tres velocidades paralelas: la economía trans-nacional que “viaja en avión”, la nacional de pymes que se traslada en tren y, por último, la economía popular que camina y en chancletas (Pérsico, 2014). Esta última, es la herencia marginal de la política neoliberal, la novedad argentina en términos laborales que caracterizamos previamente: “(...) está fuera de los convenios colectivos de trabajo, es un autogestor, pero no cuenta con los plenos derechos que sí cuentan los trabajadores en relación de dependencia” (del Frante, 2013). La metáfora de aviones, trenes y chancletas intenta subrayar que, aun dentro de una misma economía, conviven sectores con distintas realidades por lo que, en momentos de crisis o “enfriamiento”, sufren consecuencias muy distintas: “(...) cuando las cosas van mal, el avión sigue volando, el tren empieza a fallar y los peatones nos caemos todos en el barro” (Pérsico, 2014). ¿Cuál es la característica fundamental de este sector de la economía? Grabois y Pérsico señalan:

“lo cierto es que cuando el país crece (...) los poderosos ganan muchísimo y nosotros con suerte estamos un poquito mejor. Pero cuando el país se estanca o entra en recesión, los primeros que caemos en la miseria somos nosotros. ¡Somos socios en las pérdidas, pero nunca en las ganancias!” (*Ibid.* 2014).

El vínculo entre la situación económica nacional general y los efectos diferenciados en cada sector de la economía es un aspecto central para comprender la dinámica de nuestra población.

La división que, en términos teóricos, establecemos entre el mercado laboral formal y el sector de la economía popular, es una operación que puede conducir a despreciar el vínculo entre las distintas economías que conviven al interior del total nacional. Es que la emergencia de un sector estructuralmente excluido no es la única evidencia de dependencia respecto de un mercado laboral formal sin capacidad para garantizar pleno empleo: la experiencia desde el año 2001 en adelante nos muestra que las condiciones de vida de sectores populares excluidos del mercado formal se encuentran fuertemente determinadas por las características del conjunto de la economía y, por lo tanto, del rol del Estado en la distribución del ingreso. Gago recupera estadísticas del sociólogo Ariel Wilkis, respecto del incremento de micro-créditos en sectores populares desde el año 2003: “(...) pasaron de 4.540 millones de pesos (...) a 106.303 millones de pesos en abril de 2012 (...)” (Gago, 2014). Es decir, el acceso a micro-créditos en villas, asentamientos y barrios populares se multiplicó veintitrés veces en nueve años, dato que refleja un fuerte incremento en la capacidad de consumo del sector. ¿A qué responde este movimiento?

En primer lugar, debemos atar dicho incremento al crecimiento económico nacional durante buena parte del período seleccionado. La recuperación económica, que se tradujo en un incremento sostenido del poder adquisitivo (Beccaria & Maurizio, Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010, 2012) replicaba en un impulso a las economías populares, en tanto la liquidez también aumentaba. Este fenómeno que podríamos denominar “derrame a pequeña escala”, donde son los sectores medios (ligados a las economías transnacionales y al mundo pyme, sea como trabajadores o pequeños propietarios) y bajos quienes dinamizan la economía popular mediante el acceso al consumo de bienes y servicios producidos por cuentapropistas de pequeña

escala, deviene factor explicativo importante del caso en cuestión. Sin embargo, lo señalado no puede ser variable suficiente que explique el todo ya que, como sucediera en el primer lustro del gobierno menemista, *puede una economía que crece potenciar, al mismo tiempo, la exclusión de sectores postergados*. El crecimiento económico, por sí mismo, no redundaba en una baja en los índices de desempleo o desigualdad. De esta manera, contrariamente a la premisa ortodoxa donde “a mayor liberalización de la economía, más acumulación” y por lo tanto más oportunidades para el conjunto, el kirchnerismo aplicó una política redistributiva buscando inducir aquel “derrame a pequeña escala” entre los sectores medios y bajos. Como señala Gago, el

*“(…) consumo ya no es solo efecto del ingreso salarial, sino también del dinero que el estado transfiere a los barrios periféricos en concepto de subsidio, pero sobre todo, como ya señalamos, de múltiples modalidades de ingreso en concepto de laboriosidades también múltiples” (Ibid. 2014).*

Hablamos de una política estatal que induce la masificación del consumo como universalización de la ciudadanía propia del siglo XXI. Es la porción retenida de la renta extraordinaria, producto de la exportación de commodities, la mediación para redistribuir “hacia abajo”.

Por último, el dinamismo que adquiere la economía popular en las condiciones señaladas vuelve atractivo ese mercado para el desarrollo de las “bajas finanzas”, un conjunto de empresas y cuentapropistas que, de manera legal o ilegal, negocian micro-créditos, préstamos de baja escala de alcance masivo. Al respecto, Gago señala en un artículo periodístico que, a diferencia de la situación de otros países latinoamericanos, el surgimiento de las “bajas finanzas” como fenómeno de masas se produce en Argentina a partir de la crisis de 2001 y estos “(…) no decrecieron con el fin de la crisis, sino que, por el contrario, se expandieron” (Gago, Lobo suelto, 2013). No es casualidad que su emergencia sea tardía en nuestro país, teniendo en cuenta el proceso de “latinoamericanización” del mercado laboral que reseñáramos en el primer apartado. Las políticas sociales del kirchnerismo “(…) supieron aliarse a estas economías. *No las combatieron ni intentaron reemplazarlas, sino que fueron parte del impulso general del consumo*” (Ibid. 2013).

En resumen, decimos que un modelo económico volcado a dinamizar el mercado interno, que pretende incrementar el poder adquisitivo de sectores medios y bajos y aumenta partidas presupuestarias en planes sociales y desembolsos en general para sectores populares, genera las condiciones para el fortalecimiento del “derrame a pequeña escala”, ya sea a través de la demanda (sectores medios y bajos integrando la economía popular en su consumo habitual) como de la oferta (capitales interesados en el negocio de las micro-finanzas y la rentabilidad del pequeño consumidor). Es la política que caracterizó al “capitalismo con inclusión social” defendido por el kirchnerismo, modelo que, en la porción más postergada de la población, refleja tanto sus diferencias con el modelo neoliberal descarnado, como sus continuidades. A las diferencias creemos ya haberlas clarificado y, antes de introducirnos en la emergencia de la Confederación que representaría a nuestra población, nos adentraremos en una discusión respecto de las limitaciones o contradicciones de ese modelo, lo que denominamos la “ambigüedad” del kirchnerismo.

## ¿Dignidad o consumo?

*“Mapear las economías populares es una forma de mapear el neoliberalismo como campo de batalla (...) Son estos territorios los que nos permiten conectar las formas en que el neoliberalismo es, simultáneamente, deslegitimado como política macroestructural de ajuste y a la vez incorporado en formas del saber-hacer popular que lidian con las consecuencias de esas reformas estructurales ya acontecidas”*

(Verónica Gago – La razón neoliberal – 2014)

En el trabajo por reconstruir, desde un abordaje político-ideológico, la trayectoria identitaria de la economía popular en Argentina, comenzamos sosteniendo la tesis de que la hegemonía neoliberal fue condición de posibilidad para la emergencia del sector, en tanto discursividad habilitante de un proceso inusitadamente excluyente para el país. Luego caracterizamos el proceso de descolectivización en la población “estructuralmente desempleada” propio de los noventa: de alguna manera, buscamos reconocer las condiciones en que el proceso de creciente pauperización anudaba con sentidos propios de la discursividad neoliberal, vinculados al hiper-individualismo, edificando una moral culpógena para explicar la exclusión. La estabilidad económica, como sostuvimos desde lenguajes distintos con Barros y Grimson, funcionó como marco de sentido fundamental para la evaluación del gobierno de turno. Dijimos también que ese proceso de descolectivización comenzó lentamente a resquebrajarse, mediante la organización de desocupados/as concentradas poblacionalmente en la Provincia de Buenos Aires, siendo un punto de inflexión el nacimiento del movimiento piquetero hacia el año 1997. Finalmente, en este capítulo buscamos rastrear el proceso propio de las organizaciones entre el estallido de 2001 y el nacimiento de la CTEP, a partir del reconocimiento de una operación política audaz posibilitada por un importante despliegue territorial. Dicha operación registraba, además, la persistencia de la población propia del desempleo estructural menemista durante la gestión posneoliberal kirchnerista. Si bien la CTEP trabajó por el reconocimiento de sus miembros como trabajadores/as, justamente a esa población le venía por añadidura una adjetivación: no hablamos de trabajadores “sin más”, sino aquellos que se las ingenian para sobrevivir a la exclusión a la que los condena el mercado formal. Hablamos, entonces, de un cambio cualitativo en las condiciones de vida cotidianas de, aproximadamente, 3,5 millones de trabajadores/as del sector en la actualidad en toda Argentina (Féiz & Lopez, 2010). Nos referimos, centralmente, al incremento en los índices de consumo, vinculados a una política macro tendiente al aumento del poder adquisitivo fomentando el mercado interno. Sin embargo: ¿qué rasgos adquiere, de 2003 a esta parte, la población estudiada en estas nuevas formas de “ciudadanía por consumo” (Gago, La razón neoliberal, 2014)? En términos más concretos, nos interesa preguntarnos por la subjetividad construida en un contexto cualitativamente distinto al de los noventa: no solamente que la “estabilidad” ya no era el signifiante “amo” para ordenar las interpretaciones que de la situación política y económica se realizaban, sino que, además, las condiciones de vida del sector fueron sensiblemente modificadas mediante políticas redistributivas. Si

hasta ahora nos preocupamos por la configuración política-identitaria del sector post-2001 hasta la conformación de la CTEP registrando al nivel de las dirigencias, la tarea siguiente trata de reconocer aspectos de la subjetividad construida “por abajo” en este lapso. A la luz de la deriva política argentina en la actualidad, consideramos este abordaje de relevancia en la tarea por identificar los alcances y condiciones de posibilidad del discurso neoliberal y su capacidad de penetración en los sectores populares.

### **Ni patrones, ni bancos, ni ahorros**

Debemos recuperar sentidos asociados a la crisis y el estallido social de 2001: el “que se vayan todos” era una crítica y deseo de capitulación del conjunto de la clase política argentina. La miseria ostensible (fácilmente apreciable en la pauperización de buena parte de la clase media) desató un escenario donde sus responsables eran “los políticos”. Esto es importante por lo que *no* aparecía como demanda: la crisis de representación no se fundaba en un rechazo al “neoliberalismo” como modelo respecto del cual la clase política no generaba alternativas, sino como desconfianza y rechazo, nuevamente, a la lógica propia del Estado en sí misma. Esto explica, de algún modo, la epopeya de dos largos años, durante los cuales se sucedieron cinco presidentes no electos hasta la asunción de Néstor Carlos Kirchner el 25 de mayo de 2003. ¿Cómo operó, a nivel discursivo, la presencia tan acentuada de la crisis de representatividad como fenómeno novedoso que estructuraba la política argentina?

Siguiendo los planteos de autores como Funes (Funes, 2016) o Dagatti, podemos decir que el discurso del primer kirchnerismo estuvo enfocado en asociar la crisis de 2001 con el “neoliberalismo”. En diálogo con la premisa de Grimson respecto de los fantasmas de la historia argentina, sostiene Dagatti que “los acuerdos acerca de los «derechos humanos» y el «consumo» constituyen, por decirlo así, los cimientos de toda la arquitectura argumentativa kirchnerista” (Dagatti, 2014). Buscando conectar el aparato ideológico y económico de la última dictadura con el gobierno menemista, el kirchnerismo construía un relato donde el neoliberalismo era un “modelo” responsable de la vejación de derechos humanos y la miseria en la que se encontraba el pueblo. La tarea, de algún modo, tendía a explicar la crisis de 2001 como producto de ese modelo y, por lo tanto, edificar la identidad propia a partir de ese exterior constitutivo: las bases del modelo kirchnerista, entonces, respondían a un antagonismo con lo no-democrático y lo socialmente excluyente, ambas categorías vinculadas a “lo neoliberal”. Ponderar una política estatal de derechos humanos era la respuesta a lo primero, dinamizar el acceso al consumo a lo segundo. Cómo operó la puesta en práctica de dicho modelo en la subjetividad de los sectores populares durante el kirchnerismo es lo que nos interesa abordar.

Cuando hablamos de una alteración cualitativa del mundo popular entre 2001 y 2011, nos referimos fundamentalmente a la mejora en los índices de consumo. La política social del kirchnerismo contó con partidas presupuestarias sensiblemente mayores a la de gobiernos precedentes, como lo muestran nítidamente Seiffer, Kornblihtt y De Luca (Seiffer, 2011), entre otros. La “puesta en práctica” de un modelo con fuerte vocación de fomentar el consumo, entonces, es un aspecto de simple corroboración con estadísticas como la citada y otras (ver Bertranou, Casanova, Jimenez y Jimenez (OIT, 2013), Fumero y Hadad (Fumero, 2017), entre otros). Un Estado con mayor capacidad de recaudación fue la condición para dicha redistribución que, como vimos con Svampa y Gago, nutría sus arcas fundamentalmente en base a la captación de la renta agropecuaria.

¿Qué características adquiere el sector de la economía popular, sobre el cual la dinamización del consumo surtiría efectos específicos? Roig sostiene que el trabajo en la economía popular está “socialmente desvalorizado” (Roig, 2015), dado que no existe convención alguna o referencias legales a la hora de fijar el costo de la labor realizada y/o la mercancía intercambiada. Además del carácter precarizado del trabajador en cuestión, verificamos la ausencia de una “(...) relación fiscal directa asociada a su actividad” (*Ibid.* 2015) y, sin embargo, su inscripción en relaciones fiscales indirectas como el pago de IVA, entre otras. Es decir, son tributantes que, sin embargo, no se benefician del conjunto de derechos en reciprocidad como la población formal de trabajadorxs. En tercer lugar, es insoslayable su ubicación regresiva en la estructura general de costos: hablamos de costos financieros (en adelante revisaremos esto con más detalle), pero también en bienes de consumo y servicios. Como señala Roig, “(...) en general se aplica la lógica de *cuanto más pobre, más caro*” (*Ibid.* 2015). Por último, existe en el mundo de la economía popular una predominancia del acreedor por sobre el deudor, en función de condiciones contractuales profundamente regresivas para este último.

Respecto de este último punto, es importante no subestimar la influencia de las finanzas de pequeña escala en el mundo popular (al respecto, señalamos ya algunas observaciones en el capítulo III). Como muestra un relevamiento del propio Roig, sobre el total de encuestadxs (183 trabajadorxs de la economía popular entre los años 2013 y 2014 en la Provincia de Buenos Aires), el 73% declara haberse endeudado en el último año. Estos datos coinciden con sorprendente exactitud con los recaudados por otra encuesta<sup>7</sup>, donde el porcentaje de consumo vía endeudamiento es del 71%, validando la representatividad de la muestra. Retomando nuestro caso, aproximadamente un 25% de los escasos ingresos de un/a trabajador/a son destinados al pago de pequeñas cuotas que, en el 83% de los casos, no superan los \$500 por mes. Importa remarcar que solo el 1% de los créditos son contraídos con bancos y sólo un 17% vía tarjetas de crédito: notamos así un corrimiento en las características de los principales acreedores, cobrando mayor importancia circuitos informales y contratos directos con negocios, fundamentalmente del rubro electrodomésticos. Quizás el dato más sorprendente tenga que ver, como decíamos más arriba, con la ubicación regresiva en la estructura general de precios: la tasa de interés promedio en créditos

---

<sup>7</sup> Ver el trabajo ya citado de Fumero y Hadad.

adquiridos por trabajadores/as de la economía popular es del 89%, muy por encima de las cuotas a tasa 0 o ventanas de financiamiento accesibles para sectores medios y altos.

Todas estas características específicas del sector son importantes de remarcar, fundamentalmente porque no son variables que tiendan a revertirse mediante la aceleración del acceso al consumo. Como señala Seiffer,

“el gasto social (*sic*), en particular el destinado a asistencia, conlleva una mejora en las condiciones de vida en la clase obrera, pero no supone un cambio cualitativo en las condiciones de venta de su fuerza de trabajo” (Seiffer, 2011).

Es decir, que las cuatro variables que, siguiendo a Roig, caracterizan al sector, son independientes de una política social fundada en el consumo. Tal es así, que la encuesta citada del autor es del año 2014, habiendo transcurrido ya once años de la dinamización del modelo económico kirchnerista. Sumado a ello, como vimos con Gago, la última característica referenciada, vinculada a la financiarización de las economías populares, sufrieron un incremento de veintitrés veces entre los años 2003 y 2012 en Argentina. Como señala con precisión Roig, “la tendencia rentística del capital se expresa de manera más aguda en el proceso de financiarización de la economía popular” (Roig, 2015), subsumiendo las lógicas de producción a la captación del excedente por parte de los dueños del capital crediticio. En definitiva, habría dos grandes diferencias respecto de la economía general: la ausencia de mediaciones (bancos y empleadores) y la captación externa del excedente monetario por el gran acceso al crédito (orientado al consumo), mediante el cobro de altas tasas de interés. En otras palabras, hablamos de la economía popular como sector fundado en la ausencia de patrones y de bancos. Pero también de ahorros.

### **Paradojas del neoliberalismo**

Si acordamos con lo hasta aquí expuesto, identificaremos dos caras de la economía popular en contextos de inclusión vía consumo, como en el período 2003-2011 en Argentina. Por un lado, un dinamismo del mercado interno donde las posibilidades de trabajo por cuenta por propia generan un círculo virtuoso acelerando, a su vez, la dinámica del consumo. El hecho de que el 58% de los créditos otorgados en la encuesta citada hayan sido destinados a la compra de electrodomésticos, reflejan un notable cambio cualitativo habilitante de consumo de otros bienes que no sean de primera necesidad, ostensible en contraste con la caracterización del mundo popular de los noventa que hiciéramos previamente. Por otro lado, continuidades en aspectos que hacen a esa economía popular: subvaloración del trabajo, la ubicación regresiva en la estructura fiscal y de precios en general y una creciente financiarización, con la consecuente extracción de los excedentes por parte de capitales crediticios. Observamos así, como rasgo saliente de la etapa política, *la coexistencia de una creciente distribución de riquezas con la concentración del excedente de la economía popular en manos de acreedores externos al sector.*

Decimos así que la expansión del consumo, variable que explica una mejora cualitativa en las condiciones de vida de los sectores populares en el período kirchnerista, trajo aparejada, al mismo tiempo, la penetración de la lógica financiera a baja escala. La misma lógica que durante las últimas décadas adoptó la economía global como método más eficiente para la acumulación, ingresaba en la “pragmática popular” apuntalando el consumo: “(...) queda claro que estas economías antes visualizadas como insignificantes y meramente subsidiarias, se convirtieron en territorios dinámicos y atractivos para el capital (...)” (Gago, *La razón neoliberal*, 2014). Son consecuencias novedosas de reformas estructurales ya ocurridas en la formación social argentina, en contextos de mayor exclusión. Un informe de 2013 del Ministerio Público de Argentina (PROCELAC, 2013), refleja no solo la penetración de las finanzas en la economía popular, sino también sus efectos: “(...) lejos de tener un carácter integrador o democratizador, reprodujeron las diferencias sociales que operan en otros ámbitos de la sociedad” (*Ibid.* 2013).

Un abordaje de la subjetividad popular en este ciclo no puede ignorar la trayectoria del sujeto, pero tampoco las características de una estructura en la que el “consumo” ocupaba un lugar central a nivel discursivo y como tecnología de gobierno. Nuevamente, encontramos útil la incorporación de categorías foucaulteanas para caracterizar las consecuencias de un proceso desatado desde el Estado: la proliferación de zonas “atractivas” para el capital redundó en el aumento de esferas de lo social regidas por una lógica mercantil, allí donde no existían mediaciones que alteren el sentido de las prácticas en cuestión. Hallamos aquí una paradoja del ciclo estudiado: por un lado, una política destinada a la profundización de la distribución de la riqueza para fomentar el consumo, etiquetando a dicha operación como un movimiento “anti-neoliberal”, profesando un proceso de inclusión de grandes mayorías; por otro, las consecuencias “neoliberalizantes” (en sentido foucaulteano) producto de la ampliación del consumo y el proceso de financiarización de los sectores populares resultante.

Si bien no contamos con investigaciones que den cuenta de las consecuencias identitarias de este proceso, creemos que el proceso de financiarización de la economía popular no debe ser subestimado. Si, como vimos con Laclau, la disputa hegemónica responde a la tarea por volver la más verosímil de las explicaciones a una interpretación particular de los hechos, cabría preguntarnos: ¿cómo vivenció un trabajador/a de la economía popular el aumento de su capacidad de consumo durante la etapa kirchnerista? Si una parte para nada despreciable del consumo cotidiano era realizada vía endeudamiento: ¿cómo explica el/la trabajador/a su situación económica? Entendemos que, bajo la lógica financiera que penetraba fuertemente en la pragmática diaria de los sectores populares, subyace la posibilidad de una identificación individualista del consumidor en el mercado, que desarrolla estrategias particulares para desenvolverse de manera eficiente. De alguna manera, esta identificación tiende a desplazar al Estado como institución responsable de generar las condiciones para el desarrollo económico de la multitud, para reubicar al individuo como principio explicativo fundamental de su situación económica. Si la marginación del circuito de consumo se sucitaba en un contexto de identificación culpógena de lxs desocupadxs a principios de los noventa en un contexto de creciente liberalización de la política macroeconómica, interesa

remarcar cómo su dinamización en el ciclo posterior redunda en una interpretación nuevamente individualista de la situación económica.

Asistimos así a un proceso peculiar en la lógica hegemónica. Un gobierno que desarrolla políticas redistributivas contrarias al manual clásico del neoliberalismo y que, sin embargo, genera consecuencias sobre las cuales el capital financiero demuestra capacidad de adaptación. Paradójicamente, no solo se adapta para incrementar sus ingresos, sino que al mismo tiempo sus efectos subjetivos replican en un reforzamiento de principios individualistas en la explicación que los sectores populares hacen de su situación económica. En esta operación no solamente vemos la diferencia entre una política neoliberal (en su acepción macroeconómica), una gubernamentalidad neoliberal y la idea de neoliberalismo como discurso, sino que además podemos apreciar la centralidad de la disputa hegemónica en los procesos de redistribución de la riqueza. La interpretación que los sujetos hacen de su situación económica no decanta de manera unívoca de las políticas que efectivamente un gobierno desarrolle, por más ostensible que sea el beneficio de un determinado sector incluso en términos estrictamente económicos. Existen discursos subyacentes que, a modo de ordenadores, vuelven a ciertas explicaciones más verosímiles que otras. Por ello, decimos que la financiarización de la economía popular, en el ciclo kirchnerista, operó en un sentido contrario a una explicación no-neoliberal de la situación de los trabajadores en la economía.

### **Gubernamentalidad, discurso y condiciones de posibilidad para la organización de lxs excludxs**

Dijimos que el kirchnerismo “trabajó” por identificar la vejación de derechos humanos de la dictadura y la creciente pauperización de los noventa con el neoliberalismo. Dijimos también que, en la construcción antagónica con aquel dispositivo, el consumo fue piedra angular de su discurso anti-neoliberal. Ahora bien: si los efectos de la política de consumo kirchnerista tuvo consecuencias “neoliberalizantes” (entre otras, mediante la financiarización de la economía popular), ¿nos encontramos, inmediatamente, ante una gubernamentalidad también neoliberal? Nosotros creemos que no, en tanto la racionalidad que ordenaba la política kirchnerista contiene elementos antagónicos a la forma neoliberal. Veremos esto a continuación para justificar que, en la distancia entre la construcción discursiva anti-neoliberal y los efectos secundarios de su gubernamentalidad, el kirchnerismo se constituye como fenómeno fundamentalmente ambiguo. En este marco, la economía popular aparece como atravesada por dicha ambigüedad, en tanto territorio contradictorio donde se despliegan, en simultáneo, las consecuencias de una economía orientada a la mejora del poder adquisitivo de su población y los efectos de sentido neoliberal que observamos. Para abordar este punto, daremos un rodeo teórico previo que nos permita ubicar la complementariedad entre un enfoque discursivo del caso y la perspectiva foucaultiana de la gubernamentalidad como racionalidad de gobierno. Dicha perspectiva, que intentamos justificar inicialmente en el marco teórico de nuestro

trabajo, posibilita una distinción a nuestro criterio interesante para abordar el fenómeno de la economía popular, donde la organización en la CTEP es sintomática de la ambigüedad que buscamos abordar.

Mencionamos, en el principio de este trabajo, que el neoliberalismo

*“se apoya en una concepción en la que el Estado mínimo tiene como correlato una gubernamentalidad máxima que se ve reflejada como un dispositivo ambiental de producción de una subjetividad y una antropología del homo oeconomicus estructurado desde el lugar de la competencia (...)”* (Rossi, 2011).

Esa “gubernamentalidad máxima” responde a una racionalidad específica, vinculada al horizonte de permear la mayor cantidad de esferas institucionales y de “lo social” posibles de una lógica particular, vinculada a la “forma empresa”. Se trata, entonces,

*“(...) de una acción gubernamental que busca crear una sociedad sometida enteramente a la dinámica competitiva [...] Para ello es preciso construir una trama social en la que todas sus unidades básicas (la familia, las instituciones de la sociedad civil, el Estado, los individuos) adquieran la “forma empresa””* (Castro Gomez, 2010).

Veamos cómo aplican dichas categorías en nuestro caso. El neoliberalismo fue el exterior constitutivo en el discurso kirchnerista, con el tándem consumo/DDHH como clivaje para construir un discurso antagónico: si “lo neoliberal” era la creciente exclusión y desigualdad, el modelo K promovía crecientes niveles de acceso al consumo de los sectores populares. El rol del Estado aparecía como la herramienta central para remendar las heridas producidas por el neoliberalismo: “(...) dentro del universo de sentido kirchnerista {el Estado} se presenta como lógica de articulación social distinta a la del mercado con un fuerte sentido reparador (...)” (Yabkowski, 2017). Antagonizando con la concepción pro-mercado heredada de los noventa, emergía una lectura según la cual “(...) el Estado debe recuperar un fuerte rol regulador, asumiendo protagonismo en el campo económico, para producir desarrollo y crecimiento” (*Ibid.* 2017). De esta manera, la eficacia de las medidas adoptadas debería evaluarse según indicadores distintos a los del corpus económico ortodoxo, ya que la finalidad era otra.

A su vez, la gubernamentalidad kirchnerista no fue, al menos decididamente, neoliberal. Es decir, la lógica que orientaba la iniciativa estatal no estaba destinada exclusivamente a la promoción y expansión de la forma mercantil (Paulizzi, 2015). Por el contrario, muchas de las políticas más importantes de la etapa, en función de su carácter universal y redistributivo, tendían justamente a intervenir esferas de lo social donde la no-ingerencia estatal previa ubicaba al mercado como dispositivo hegemónico. Como señala Paulizzi, “(...) el Estado “protagónico” ejerce ciertas limitaciones al mercado recurriendo a elementos políticos y morales, que se articulan con la idea de justicia social, equidad y cohesión (...)” (*Ibid.* 2015). La propia fisonomía de la economía popular durante la etapa kirchnerista, donde la mejora en el poder adquisitivo de los sectores populares es factor explicativo de ese movimiento, es deudora de políticas que muestran una racionalidad novedosa, distinta a la neoliberal. Y, sin embargo, la “forma empresa” como lógica nuclear de aquella racionalidad, logró colarse entre las hendijas de una política social que hacía del consumo su principal arma para diferenciarse del modelo previo. Aquí es cuando las

categorías de gubernamentalidad y discurso encuentran sentido para nuestro análisis de la economía popular, en tanto la significación construida por los destinatarios de determinada política nunca viene dada, es decir, no puede determinarse a priori en la ingeniería estatal.

Vale nombrar algunas políticas públicas impulsadas por el kirchnerismo, a modo de ejemplo de iniciativas ordenadas por una racionalidad no exclusivamente mercantil, en los términos especificados. Por caso, la Asignación Universal por Hijo, “(...) se planteaba como una ampliación de las protecciones ya contempladas para los hijos de los trabajadores formales hacia los hijos de los desocupados o los trabajadores informales” (Mrejen, 2013). Para su implementación, fue imprescindible la modificación de la ley de AFJP heredada de los noventa, que volvía al ANSES garante del total de jubilaciones y pensiones, elevando el porcentaje de cobertura del 60% del año 2003 al promedio de 95,5% para 2010 (Sala, 2012). Para el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Estado argentino exigía condicionalidades, como presentar libreta de vacunación y escolar al día. Opera allí una lógica distinta a la neoliberal, entendiéndola a esta como tipo ideal donde se manifiesta la reproducción sin más de un principio de racionalidad mercantil. Como señala Mrejen, no podemos circunscribir la AUH a las típicas políticas de “gobierno de lo social” neoliberales, sino como híbrido producto de la convivencia de racionalidades (Mrejen, 2013). La AUH “(...) señala un tipo de protección alternativa a la lógica dominante durante decenios (...)” que abona a la posibilidad de “(...) escapar a la racionalidad neoliberal como proyecto social y cultural (...)” (Servio, 2012). El impulso del programa Conectar Igualdad, de Tecnópolis, la política de destinar más del 6% del PBI a la cartera de educación, los planes sociales a cooperativistas, la inclusión al sistema de seguridad social de más de dos millones de jubilados y la ley de movilidad jubilatoria, entre otras (Morel, 2015), son algunos de los ejemplos más conocidos que evidencian una racionalidad, al menos, distinta a la neoliberal. Una gubernamentalidad que no pretendía incorporar una lógica mercantil para el funcionamiento y evaluación de su propia institucionalidad, no al menos al conjunto de su estructura. Por el contrario, los ejemplos señalados reflejan que había objetivos concretos de políticas públicas, solamente alcanzables mediante la expansión del Estado, bajo una lógica tendiente a favorecer a sectores excluidos. Una lógica de intervención estatal sobre el mercado para provecho de grupos en desventaja en cuestiones como salud, educación, acceso a nuevas tecnologías o seguridad social. El Estado destinando recursos para alterar los desniveles generados por procesos sociales precedentes fuertemente atravesados por esa lógica neoliberal. En definitiva, una racionalidad no asentada en una antropología individualista del sujeto, donde el éxito y el fracaso personal responden a destrezas individuales, que tiende a alterar las consecuencias de procesos regidos exclusivamente por voluntades de mercado.

Bajo un discurso decididamente antineoliberal, la gubernamentalidad kirchnerista “(...) se teje en un heterogéneo y múltiple ensamblaje de racionalidades políticas” (Paulizzi, 2015): al menos, una “nacional-popular” vinculada a la centralidad del Estado-social-reparador, con otra tendiente al estímulo de ciertas lógicas de mercado, siendo el modelo extractivista de cultivo y exportación de materias primas el ejemplo

más acabado de esta última. En este híbrido, el Estado en su faceta nacional-popular, demuestra cierta incapacidad de generar anticuerpos que eviten la penetración de la “forma empresa” mediante las pulsiones del mercado incluso en aquellas políticas de finalidad antagónica. En nuestro caso, la financiarización de la economía popular muestra ello de manera brutal. Esto obliga a “(...) correrse de un modelo de adaptación lineal de los actores a un curso histórico ya dado, para observar las encarnaciones particulares de una lógica que, como todo orden simbólico, encuentra una falla constitutiva en su centro” (Reynares, Neoliberalismo y actores políticos en la Argentina contemporánea, 2017). No hay gubernamentalidad exenta del riesgo de ser significada de manera distinta a la racionalidad que la fundamenta.

Queda claro que, desde nuestra perspectiva, no interesa problematizar la intencionalidad del gobierno kirchnerista a la hora de medir las consecuencias de un modelo de consumo. Reconocer sus condiciones de posibilidad y articulaciones de sentido es el objetivo señalado. Ahora bien: estos primeros apuntes sobre la financiarización de la economía popular y sus efectos políticos en la construcción de sentidos neoliberales no deben desviarnos de nuestro objetivo central, que responde a reconstruir una trayectoria identitaria del sector en Argentina. Al respecto, podríamos preguntarnos: ¿el incremento generalizado del poder adquisitivo en sectores populares implicó *solamente* la financiarización y consecuente “neoliberalización” en la interpretación que sus trabajadores hacían de la realidad?

Buscaremos demostrar que no, en tanto la discursividad anti-neoliberal estatal, de manera conjunta con buena parte de las políticas de corte no estrictamente neoliberal, potenciaron a su vez procesos de organización, atravesados por un “acumulado” de saberes y prácticas desarrollados por los sectores populares, como vimos, desde mediados de los noventa. En este marco, las características que adquiere la organización de lxs trabajadorxs de la economía popular en la CTEP es también sintomática de la ambigüedad del modelo. La posibilidad de buena parte de sectores excluidos del mercado laboral formal de generar su propia alternativa económica a pequeña escala, la capacidad para satisfacer un conjunto de necesidades básicas, creemos que funcionaron como cimiento para la organización y consecución de objetivos más ambiciosos. Las condiciones contextuales que incrementaron el circulante y, de esta manera, apuntalaron la economía popular, fueron cruciales para el derrotero del sector.

Desprovistos de una creciente integración generada por la posibilidad de satisfacer necesidades básicas, donde el consumo es una consecuencia específica dentro de muchas otras más generales, sería realmente difícil imaginar la organización de sus trabajadores y la fundación de la CTEP que los nuclea. Las demandas que unificaban a la Confederación en su lanzamiento resultan ejemplificadoras al respecto, en tanto reflejan reivindicaciones que trascienden la mera satisfacción de demandas del sector excluido. Como señala Muñoz, al momento de su nacimiento, las principales demandas de la CTEP tenían que ver con

*“(…) ser reconocidos en el marco de paritarias como entidad gremial y la promulgación de un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores autogestionados, la regulación de sus condiciones de trabajo y, la igualdad de derechos con los trabajadores formales” (Muñoz M. A., 2017).*

Del mismo modo, los lemas que encabezaban sus reclamos de “somos lo que falta” y “no queremos ser objeto de asistencia sino trabajadores con derechos”, muestran, de alguna manera, la diferente interpretación que la propia organización hacía de la realidad del sector comparativamente a los noventa. Las “transformaciones cualitativas” que mencionábamos más arriba, alterando las condiciones de vida del sector, posibilitaron la organización sindical reivindicativa de derechos “de avanzada” a conquistar frente al Estado.

Nuevamente, el abordaje político de la trayectoria del sector nos conduce a una paradoja, una aparente contradicción que puede redundar en conclusiones simplistas a la hora de trabajar el fenómeno. Por un lado, reconocemos un discurso anti-neoliberal donde el consumo funge como pilar para dicha construcción antagónica. Por otro, una gubernamentalidad no-decididamente-neoliberal, pero habilitante de la reproducción de dicha lógica a partir del reforzamiento de aquel discurso “consumista”, gracias a un conjunto de políticas públicas tendientes a incrementar el circulante en sectores medios y bajos. Finalmente, sostenemos que la organización del sector de trabajadorxs de la economía popular justamente fue posible gracias: a) a la exclusión laboral producida en los noventa que implosionara en 2001; b) a una creciente integración laboral “informal” producida en un contexto de mayor actividad económica a nivel nacional. De alguna manera, aquello que posibilitó la inclusión y organización por derechos del sector excluido (nos referimos al trabajo), contenía en su seno efectos “neoliberalizantes”, plausibles de ser activados mediante una articulación específica de sentidos vinculadas al consumo. Con ello, la importancia de un abordaje de la gubernamentalidad desde la teoría de la hegemonía, que nos permita reconocer procesos aparentemente contradictorios en toda su complejidad. Donde no haya presupuestos racionalistas ni moralizantes que transformen la tarea del investigador/a en un pretendido acto de desenmascarar algún tipo de verdad o sistema oculto, sino que problematice las disputas de sentido, donde la trama del poder termina convirtiendo a ciertas interpretaciones como las más difundidas y legítimas.

En definitiva, creemos que las prácticas discursivas y gubernamentales del kirchnerismo, con las implicancias concretas en la economía de los sectores populares que ya identificamos, incidieron decididamente en la organización proto-sindical de sus trabajadores. Más específicamente, decimos que la posibilidad de reconocerse como trabajadorxs, de desarrollar su actividad, de generar sus propios ingresos y, con ello, lograr mayor capacidad de consumo, marcó la experiencia del sector y propició el creciente nivel de organización reivindicativa hacia el nacimiento de la CTEP. La complejidad del proceso de gobierno, con un discurso y una gubernamentalidad como las señaladas, también habilitaron y condicionaron las características del sector y su organización. A continuación, intentaremos acercarnos finalmente al contexto en el cual nace formalmente la Confederación.

## La audacia y el cálculo: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular

*“Nos sentimos parte y herederos de esa historia y de muchas otras, pero fundamentalmente de lo que salió a la superficie allá por el 2001, que es toda la miseria, la desocupación y el sufrimiento que se había venido acumulando durante los 90’ silenciado por los grandes medios y desconocido por el estado y que con el correr de estos años se fue transformando en lo que llamamos economía popular”*

**Juan Graboís** – Plenario de Referentes de CTEP, en el primer aniversario de la Confederación:  
12/12/12.

Es en este marco de expansión (en cuanto a la población) y, al mismo tiempo, fortalecimiento (en relación con el circulante disponible a pequeña escala), que distintas organizaciones territoriales dan nacimiento a la CTEP el 20 de diciembre de 2011. La fecha elegida no solamente grafica el peso que tuvo, para las organizaciones y personalidades participantes, el “argentinazo” del año 2001. Podríamos agregar, en relación con lo planteado al inicio de este capítulo, que la “organización de organizaciones” territoriales más importante del país, nace en un contexto político donde la orientación del flamante segundo gobierno de Cristina Fernández proclamaba la “sintonía fina”. Esto es, buscaba metaforizar la necesidad de estirar en el tiempo ese “empate entre partes” que referíamos previamente, en un contexto internacional notoriamente distinto al que posibilitó mejoras en ingresos tanto para el capital como para el trabajo. La necesidad de hilar fino en el diagnóstico y ejecución de políticas en cada provincia, municipio o ministerio, buscando “terminar con las avivadas”<sup>8</sup>. El contexto internacional y local obligaba a reparar en los detalles presupuestarios para sostener el “rumbo económico” de los primeros ocho años de gobierno kirchnerista. Tanto empresarios como sindicatos, funcionarios y organizaciones sociales debían achicar el margen de error en la subutilización de recursos y, para ello, publicitar previamente sus dividendos para un acuerdo de subsidios e impuestos entre las partes. En este marco, meses después del arrollador triunfo de CFK, quien fuera reelecta como presidenta de la Nación, nacía la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

El “derrame a pequeña escala”, si bien alteraba las condiciones de reproducción de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no era una política que, desde la óptica de la CTEP, pudiera resolver las problemáticas acuciantes de la población que representaba. De alguna manera, asociaban la ambigüedad del modelo como una limitante en la mejora permanente de las condiciones de vida de sus representados. Maxime si la orientación oficial, para el año 2011, refería a la necesidad de “sintonía fina”. Si el modelo no permitía la inclusión de lxs excludxs al mercado formal, esta reorientación hacía presumir, además, cierto congelamiento en la progresiva mejora cualitativa de las condiciones de vida del sector, como explicita un fragmento del documento fundacional de la organización:

---

<sup>8</sup> Cristina Fernández de Kirchner, discurso en Casa Rosada el 25/01/2012. Alocución completa en: <https://www.youtube.com/watch?v=3ZA0KvZ1Tbo&t=2156s>

*“observamos cómo desde el Estado, quizás con buenas intenciones, se aborda el problema estructural de la exclusión socio-laboral con asistencialismo encubierto y recetas de “flexibilización progresista”, la nueva cara de las “teorías del derrame” que esperan que a la larga el crecimiento del PBI nos resuelva la vida a todos” (Nosotros, 2011).*

Y continúa:

*“Pese al fuerte avance del sector laboral en la distribución de la renta nacional durante el período 2003-2011, existen inequidades estructurales que obstaculizan el progreso de los trabajadores en su conjunto e impiden que dicha distribución se transforme en dignidad para todos” (Ibid. 2011).*

Vemos así un diagnóstico de anteojeras estructuralistas, que mostraba a las claras tanto una percepción de mejora del sector que representaban, como su consolidación como sujetos excluidos, aún luego de dos gestiones de gobierno que buscaba apuntalar el mercado interno y fortalecer el acceso a la demanda.

Desde allí, el trabajo político desarrollado por la organización, que no decanta ni es producto unívoco de un abordaje particular de la realidad. Muchas organizaciones o sectores políticos realizaron lecturas similares a la esgrimida por la CTEP, fundamentalmente sectores de izquierda y centro-izquierda<sup>9</sup>, y sin embargo la orientación o “línea” política desarrollada fue otra. Resulta esclarecedor, al respecto, la poca inserción territorial de las organizaciones trotskystas, coherente con un arsenal teórico para el abordaje de la realidad que dota de una productividad política al conjunto de trabajadores/as excluidxs cercana a cero. En este sentido, la dirigencia social y política que daría nacimiento a la CTEP, de alguna manera “creó” la economía popular. Volveremos con detenimiento sobre este punto más adelante.

Bajo el lema “somos lo que falta”, el Movimiento Evita, junto al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (MNER), La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), daban nacimiento a la CTEP. En el transcurso de dos años, terminarían por confluir en la misma, organizaciones de tan variada línea política como el autonomista Frente Popular Darío Santillán, el Encuentro de Organizaciones de Córdoba, con organizaciones filo-kirchneristas como Patria Grande o la Organización Social y Política “Los Pibes”. En el acto fundacional previo al lanzamiento de la herramienta, el documento central rezaba que la CTEP nacía con la vocación de “promover la conformación de una organización de naturaleza puramente social, independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular (...)” (Nosotros, 2011). Ese factor puramente “reivindicativo” de la CTEP será fundamental, como veremos más adelante, para aglutinar a organizaciones territoriales de tan variada diversidad política.

La CTEP nacía como la herramienta gremial de lxs excluidxs, de quienes generan su propio trabajo y nunca podrían ser parte de un sindicato tradicional. La participación en colectivos de desempleadxs propia de los años noventa le había permitido al emergente sector librar una batalla frontal contra gobiernos de

---

<sup>9</sup> Ver alocución del economista porteño Claudio Lozano en el 48° Coloquio de IDEA, en octubre de 2012, digital en: <https://www.youtube.com/watch?v=Jx9DIIMKxMM&t=251s>

signo neoliberal como el menemista. Luego de 2001, como vimos, la multiplicidad de orientaciones al interior de las organizaciones territoriales, tendieron lógicamente a su fragmentación. La pervivencia del sector luego de años de crecimiento a tasas chinas, y el anunciado fin de dicha etapa metaforizado en la “sintonía fina”, hacían prever a la dirigencia que la tendencia progresiva podría ralentizar.

### **La unidad de lo múltiple (o “cómo trabajar políticamente la emergencia de un sujeto diverso”)**

Hablamos de un trabajo “político” como ontología de lo social, como operación fundante que posibilita la identificación a partir de la delimitación de un otro que, al mismo tiempo, lo constituye en su exterioridad. La población desafectada del mercado laboral formal emergente de los noventa ya desarrollaba iniciativas económicas por cuenta propia desde entonces. Eran “los desocupados”, que para los últimos años del siglo XX pasarían a ser “los piqueteros” y que, finalmente, se agruparían y reconocerían bajo el mote de “trabajadores de la economía popular”. Un enfoque de estas características nos permite reconocer tanto la arbitrariedad del significante, como los límites que la relativa estructuralidad impone en toda construcción identitaria. En otras palabras, un abordaje político-ideológico no circunscribe la emergencia de la CTEP a epifenómenos científicamente comprobables de una estructura que lo constriñe, sino que focaliza en las condiciones de posibilidad que explican los alcances de dicha herramienta gremial. El significante elegido cobra relevancia en nuestro abordaje, en tanto no se trata de nombrar una porción de la estructura social argentina que contiene en sí rasgos comunes, que vuelven evidente su pertenencia a dicha comunidad. Ello nos conduciría a un esencialismo que decanta en lecturas mecanicistas de los fenómenos sociales. Un giro hacia una ontología política de lo social nos obliga a ver, allí donde la sociología tradicional identifica procesos producto de transformaciones estructurales, decisiones políticas atravesadas por una relativa estructuralidad, que opera bajo la lógica de la hegemonía sobre sus condiciones de posibilidad.

Este enfoque, a su vez, nos permite desnaturalizar fenómenos de acción colectiva. A modo de ejemplo importa el caso brasileiro, donde lo que en Argentina consideramos trabajadores de la economía popular abarca una población porcentual mucho más importante que la vernácula, y sin embargo no se encuentra organizado en un “gremio” como es la CTEP en Argentina. No solo se trata de un caso novedoso para los países dependientes, donde el trabajo por cuenta propia es condición generada por la exclusión del sector formal, sino que la CTEP es, además, importante debido al peso político adquirido en tan pocos años de existencia. De este modo, habiendo reconocido ya el desarrollo de un lúcido diagnóstico del derrotero de los sectores populares desde los noventa hasta la primera década de los dos mil, podríamos preguntarnos: ¿qué características tuvo la operación política, que dotó de semejante potencial a la CTEP? Cuatro aspectos creemos fundamentales para responder dicho interrogante: la inserción territorial e institucional de las organizaciones fundantes, el carácter estrictamente reivindicativo de la herramienta y una

construcción discursiva acorde, que permitió aglutinar nuevas agrupaciones y, a su vez, potenciar la inserción territorial del conjunto.

Respecto de la inserción territorial, el Movimiento Evita es, sin dudas, la organización de mayor despliegue a nivel nacional (Natalucci, Americo, 2012). Sumado a ello, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (MNER) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (organizando, este último, alrededor de cinco mil cartoneros solo en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana), terminan por configurar un actor que, desde su nacimiento, contaba con una presencia territorial importante si tomamos en cuenta el total agrupado. La inclusión posterior de numerosas cooperativas, mutuales, organizaciones sociales y políticas, clubes, merenderos y distintas ramas de la producción y “changanines”, nos muestra un espacio que nuclearía a buena parte de la población excluida de cualquier vínculo formal en el mercado laboral. A este respecto, Natalucci realiza una pregunta que creemos importante:

*“¿Por qué organizaciones que habían tenido protagonismo en el ciclo de movilización precrisis quedaron progresivamente marginadas de la contienda política, y, a su vez, las movimentistas que hasta entonces habían tenido un desarrollo exiguo y una presencia pública reducida cobraron semejante gravitación post-2003?” (Ibid. 2012).*

De alguna manera, la pregunta apunta al vínculo entre la orientación política y el crecimiento territorial efectivo desde 2001/2003 en adelante. Como señalamos previamente, el “parteaguas” en la orientación política de las organizaciones tuvo que ver con la decisión de participar o no de la institucionalidad, a partir de la convocatoria explícita de Néstor Kirchner al conjunto de organizaciones que, de manera general, denominamos como “piqueteras”. Esto nos conduce directamente a la segunda característica a considerar.

Señala Natalucci que, durante la gestión como Presidente de Néstor Kirchner, las organizaciones que aceptaron integrarse a la gestión y denomina “movimentistas” (“populistas”, en palabras de Svampa) “(...) crecieron cuantitativamente y en su despliegue territorial, logrando una expansión nacional; algunos de sus dirigentes integraron las listas legislativas nacionales y provinciales o fueron designados en cargos ejecutivos (...)” (Ibid. 2012). Por el contrario, fue notorio el repliegue de las organizaciones de la izquierda partidaria (sorprendidas en 2003 ante la enorme participación ciudadana en la elección nacional, iniciando un proceso de recomposición del sistema político) y autonomistas (Ibid. 2012). Esto no solamente explica el peso específico de las organizaciones fundantes de la CTEP respecto del resto de espacios territoriales que, motivadas por la capacidad de acción e inserción del flamante gremio, comenzaron a sumarse rápidamente a la novedosa Confederación. Además, echa por tierra un prejuicio propio de las organizaciones territoriales autonomistas, que construían una (falsa) dicotomía entre la inserción territorial y la disputa “política” de las organizaciones, asumiendo una lógica de suma cero allí donde la experiencia, por ejemplo del Movimiento Evita, grafica un efecto de retroalimentación. La correlación de fuerzas en el nacimiento de la CTEP refleja cómo, durante el lapso 2003-2011 en que la fragmentación de las agrupaciones creció debido a estrategias políticas diversas, fueron las organizaciones “movimentistas” las que más potenciaron su inserción territorial. Sumado al vínculo con la institucionalidad pública, las

organizaciones fundantes (fundamentalmente el MTE y La Alameda de Gustavo Vera) tienen importantes relaciones con la Iglesia católica, factor de poder en las barriadas populares del conurbano bonaerense donde, como vimos, afectó la crisis de manera diferencial al total nacional. El peso político de las organizaciones, entonces, respondía a un juego multiplicador entre la inserción territorial y los vínculos político-institucionales (con funcionarios, legisladores y diputados “puestos” por los movimientos (Longa, ¿Tirando viejos por la ventana? Militancia juvenil y gestión estatal en el Movimiento Evita de Argentina (2005-2015), 2018)) y eclesiásticos (fundamentalmente en el conurbano bonaerense (Carbonelli, 2015)).

Una tercera característica fue la naturaleza eminentemente reivindicativa de la herramienta, la explícita independencia de cualquier partido político. Este rasgo permitió incluir a organizaciones de una gran diversidad al priorizar la representatividad del sujeto (trabajador/a de la economía popular), ya que la única condición para integrarla responde a la inserción en el sector. La adscripción partidaria de la dirigencia no era un condicionante, pudiendo convivir en su interior una gran cantidad de “líneas políticas”. Pero el gremio, como tal, se constituyó en el orden de la estricta representación gremial de lxs excludxs: la confección institucional no dejaba lugar a que las diferencias de orientación política impidan ni limiten acuerdos de conjunto para la población representada.

Por último, la decisión política de resignificar a lxs excludxs. En un contexto donde el crecimiento económico iniciaba un proceso regresivo (reconocido, como señalamos, por la propia presidenta de la Nación), las organizaciones en cuestión propiciaron una reorientación de su política en búsqueda de la concertación en un sindicato que unifique la población excluida del mercado laboral formal. Esa población, que en su emergencia fue nombrada “desempleada” y que, para los hechos de diciembre de 2001 serían catalogados como “piquetera”, ahora pasaba a ser nominada como “trabajadores de la economía popular”. Aquello que unificaba la multiplicidad, el aspecto destacado y común de la población representada, no era ya la exclusión, la informalidad en términos laborales o la belicosidad en sus métodos de lucha. El significante seleccionado vinculaba a la población en cuestión, de manera positiva, con trabajadorxs de sectores populares. La “economía popular” aparece como significante tendencialmente vacío que pretende nombrar un conjunto de particularidades, volviéndose cada vez más “(...) extensivamente pleno al incorporar demandas a la cadena, pero para ello debe volverse intensivamente más débil, deshaciéndose de sus aspectos particulares (que podrían entrar en antagonismo con los elementos que se espera articular)” (Cané, 2016). En tanto el carácter novedoso del término dificulta cualquier tipo de literalidad, potencia sus condiciones para “(...) constituir una “materia prima ideológica”, una superficie discursiva en la que pueden inscribirse nuevas reivindicaciones y antagonismos” (Montero, 2012). Cuando decimos que el nacimiento de la CTEP “crea” a la economía popular, buscamos dimensionar el peso que tuvo para el sector la operación política por excelencia, en el que “(...) la contingencia de todo origen se hace patente” (Cané, 2016). La decisión de nombrar de esa manera y no de otras posibles al sector, no es un dato accesorio: en nuestro caso, refleja justamente que los límites construidos, que circunscriben las fronteras de la población a la cual se pretende representar, responden al vínculo entre lxs sujetos y el mercado

laboral formal. Todo lo que no implica relación de dependencia formal aparece, potencialmente, fronteras adentro del mundo de la economía popular. Este sujeto, si bien se caracteriza por la multiplicidad de iniciativas económicas que desarrolla (de maneras diversas, muchas veces no planificadas o superpuestas unas y otras), es ahora políticamente unificado bajo el mote de trabajadorxs de la economía popular.

El diagnóstico realizado con anteojeras clásicas marxistas, donde la posición del sujeto se determina en función de su rol en el entramado productivo nacional, le permitía a la dirigencia de la flamante Confederación reconocer un patrón y la emergencia de un sujeto tan novedoso como desorganizado. La pervivencia en el tiempo de este “polo de desocupados” reflejaba que, si bien el menemismo generó las condiciones para su emergencia, las posibilidades de incluir al sector en el mercado formal eran nulas aún bajo un gobierno con orientación al mercado interno. Dicha lectura, de manera conjunta con una coyuntura que presagiaba un estancamiento en los niveles de inclusión y mejora en los guarismos de consumo, potenciaron la necesidad de una reactualización de la orientación política de los movimientos fundantes de la CTEP. La tarea política, posibilitada por el conocimiento privilegiado de las condiciones de vida del sujeto en función de una amplia inserción territorial, vínculos con la institucionalidad y una orientación política no-reactiva para la convivencia de diversas “líneas” en su interior, requería de la unificación identitaria en un significativo tendencialmente vacío que permita aglutinar una diversidad enorme de sujetos (tanto por las características de la iniciativa económica desarrollada, como por su origen, territorio, género, acceso cultural, etc...).

Como vimos previamente, si los noventa marcaron de nacimiento las características que adoptaba el sector, la etapa kirchnerista también haría mella en su identidad. La fundación de la CTEP, entonces, se encontró atravesada por la política gubernamental que tendía a favorecer el despliegue y rendimiento de iniciativas económicas por cuenta propia de los sectores populares no solamente mediante políticas redistributivas, sino además construyendo un concepto de Estado reparador donde la existencia de desigualdades aparecía como parte de las tareas estructurales a resolver, no como el producto de incapacidades individuales de sujetos en el mercado. Esos sentidos que el Estado pretendía hegemonizar convivían con una gubernamentalidad de racionalidades múltiples y hasta antagónicas, en tanto replicaban en la difusión y consolidación de lógicas propias de la forma neoliberal. Así, hablamos de una ambigüedad constitutiva del gobierno, siendo la economía popular un territorio a todas luces atravesado por dichas variaciones. Bajo estas coordenadas nacía la CTEP, como estrategia de diversos movimientos populares para aglutinar la diversidad propia del sector excluido del mercado formal y, de este modo, reestructurar de manera ostensible la representatividad del conjunto de trabajadores en Argentina.

# Capítulo V

## *Reflexiones finales*

### **Una trayectoria vertiginosa**

En primer término, nos interesa ubicar los efectos posibles de nuestro abordaje a nivel conceptual. La multiplicidad de significantes utilizados para nombrar a una misma población (informales, piqueteros, trabajadores de la “otra economía” o de la “economía social y solidaria”, etc...) es sintomática, fundamentalmente, del carácter reciente de las transformaciones en el mundo laboral argentino. La proliferación de excludxs con la necesidad de generar la fuente de sus ingresos condujo a la utilización de significantes como “parecidos de familia” para su nominación. Podríamos dividir así en dos los registros según los cuales se nombró el fenómeno.

Desde la academia, como reseñábamos en los antecedentes, mediante la utilización sinonímica de conceptos que, muchas veces, condujeron a (o reflejaban la forma de) razonamientos “románticos” basados en la construcción del sector como una esfera separada de la cosmovisión (y la reproducción económica) neoliberal. Lo excluido del sistema, naturalmente, aparecía como construyendo desde (y contra) las lógicas económicas hegemónicas. La utilización de “parecidos de familia”, en este caso, resulta clarificadora: si es excluido, de la “otra economía”, es parte de una lógica “social y solidaria”.

Desde la propia población en cuestión, vimos el proceso entre reconocerse como desocupadx, pasando por el movimiento piquetero, hasta la percepción de trabajadorxs de la economía popular. Se trataba de ligar al sector, antes que con una “lógica” subyacente vinculada a lo comunitario/solidario, con su ubicación en la formación social argentina, como la porción estructuralmente excluida del mercado laboral formal. La organización cumplió aquí un rol central, en tanto no podría pensarse el primer proceso de politización de la desocupación sin el agrupamiento en diversos movimientos buscando soluciones a su condición. Del mismo modo, el nacimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la creciente hegemonización de dicho significante para nombrar al sector, responden a un grado de articulación e inserción territorial crecientes.

La trayectoria identitaria de la economía popular en argentina refleja una vertiginosidad insoslayable: desde los índices cercanos al pleno empleo de los ochenta, al 30% estructural de empleo informal actual; desde la responsabilización personal por la condición de excludxs a la politización del desempleo y pronta organización frente a lo estatal; desde la marginalidad y pauperización de las condiciones de vida cotidianas al consumo creciente y la financiarización de los sectores populares durante el ciclo kirchnerista;

y, finalmente, desde la atomización de quienes fueran expulsados del mercado formal a la organización proto-sindical en la CTEP, pasando por el histórico proceso destituyente de 2001.

A lo largo de este recorrido, intentamos captar las condiciones de posibilidad para los virajes político-organizativos e identitarios que marcaron dicha trayectoria. Titulando los capítulos con metáforas ricoterias que, cronológicamente, acompañan el proceso identitario de la economía popular en Argentina, buscamos sintetizar el mensaje central que pretendíamos transmitir en cada ocasión.

Con la idea de **Yo no me caí del cielo**, buscamos destacar el conjunto de condiciones ideológico-políticas que marcaron la emergencia del sector, donde la proliferación de alternativas económicas cuentapropistas no aparecen “porque sí”. Discutimos aquí en dos frentes: por un lado, con quienes reconocen, en ese proceso, la verificación de una antropología competitiva que, “liberada” de las ataduras de un Estado de Bienestar asfixiante, emerge multiplicando iniciativas productivas. Por otro, con un marxismo mecanicista que, frente a la falta de correspondencia entre su teoría y el derrotero de la población en cuestión, aduce fenómenos racionalistas como la falta de consciencia para explicarse. Nuestra propuesta, por el contrario, se asienta en el carácter construido de ese “ethos” emprendedorista, donde encontramos fundamental la operación ideológica iniciada por la última dictadura cívico-militar y continuada por el gobierno menemista, sintomático de una hegemonía neoliberal preexistente. El fantasma de la hiperinflación, según vimos, fue inteligentemente utilizado por el oficialismo como clivaje que oriente la interpretación del éxito o fracaso de su propio gobierno. De este modo, si coincidimos con la explicación elaborada, nos será sencillo reconocer el componente ideológico vinculado al discurso neoliberal que marcaría “de nacimiento” a la economía popular en Argentina.

Tal es así que la respuesta ante la exclusión de buena parte de la población trabajadora fueron pacíficas iniciativas cuentapropistas y, ante los crecientes índices de marginalidad, una explicación que tendía a la autoinculpación. Echamos mano a la metáfora del **Yo, caníbal** por dos motivos. Por un lado, el “yo” como reflejo de un clima de época crecientemente individualista: la cosmovisión hegemónica de la sociedad como suma de individuos. Toda acción colectiva, en este marco, perdía posibilidades de manifestación a partir de una racionalidad donde la lógica mercantil predominaba por sobre el resto. Por el otro, la voracidad misma del caníbal, encarnada fielmente en el difundido lema del “sálvese quien pueda”. La “adaptabilidad” de los sectores excluidos al nuevo contexto económico, su carácter pacífico frente al Estado, era la contracara de un creciente clima de violencia urbana (“*se amasan las fortunas/se cargan los bolsillos*”). El Estado reconfigurándose mediante la adopción de la lógica mercantil y, a su vez, alterando políticas macroeconómicas que mitigaban la desigualdad que el mercado “libre” genera en sociedades como las nuestras. Ese “canibalismo”, construido por décadas, replicaba en una silenciosa marginación de la población más afectada, que lentamente comenzaría a politizar el desempleo y registrar al Estado como responsable. Su carácter voraz, lentamente, sufriría un desplazamiento desde las individualidades de la sociedad civil hacia el Estado, siendo las jornadas de diciembre de 2001 el summum de esa violencia con

un nuevo enemigo (*“¡Por favor! Que el adiós no se alargue (me cansé de tanto esperar), cuando el fuego crezca quiero estar allí”*).

Finalmente, luego del proceso destituyente de 2001 y la asunción de Néstor Kirchner en 2003 que construiría gobernanza con una discursividad sensiblemente antagónica a la neoliberal, abordamos el proceso identitario del sector, con transformaciones importantes bajo la brújula del consumo. **El tesoro de los inocentes** refiere al proceso organizativo ocurrido, siendo el “tesoro” la organización (y la construcción de la CTEP) y los “inocentes” el sector de la economía popular, herencia marginal de la discursividad y la política neoliberal trabajada desde 1976 hasta entonces. La organización de excludxs que es hoy un faro como experiencia para distintos movimientos a nivel Latinoamérica, donde la especificidad de ser trabajador/a por cuenta propia es una tradición mucho más arraigada (y, en la mayoría de los casos, más extendida) que en nuestro país y, sin embargo, no encontraron lógicas proto-sindicales para nuclearlos. El tesoro de contar con un reaseguro ante contextos de marcada regresión en lo social como el actual, a partir de una enorme red de cobertura social “arrancada” al Estado y con potencia disruptiva (¿y destituyente?) ante el gobierno de turno. Este proceso no estuvo exento de ambigüedades, identificando paradojas que atravesaron el desarrollo de la economía popular en Argentina.

### **La economía popular desde una ontología política de lo social**

Un abordaje político-ideológico, que reflexione en torno a las condiciones de posibilidad para la emergencia de la economía popular en Argentina en los noventa, nos permitió reconocer la fuerte penetración de sentidos propios de la discursividad neoliberal en el sector que se transformaría en nuevo-desempleado. De alguna manera, más allá de las denominaciones, lo que buscábamos era reconocer los sentidos en juego que estructurarían dinámicas propias del sector. De este modo, presentamos a las transformaciones macroeconómicas del gobierno menemista como tendientes a generar una importante masa de nuevxs desocupadxs, operación habilitada (en tanto cualquier posible reacción había sido previamente combatida) por una hegemonía neoliberal construida desde el último gobierno dictatorial. La ausencia de grandes conflictos gestados por la población ahora excluida, no solo se explica por el acuerdo entre el sector público y parte de la dirigencia sindical: la sensación de irresponsabilidad y culpa detectada en los propios trabajadores/as para explicar su situación económica refleja la efectividad de un discurso neoliberal sedimentado. Así, la idea de “auto-emplearse” para la generación individual de alternativas económicas más allá de la relación de dependencia tradicional del capitalismo, aparecía como una salida coherente. Reconocer esto interesa para captar de qué manera la discursividad neoliberal opera aún en la porción de población más afectada por políticas de ese corte. Allí no encontramos signos de organización colectiva y resistencia al neoliberalismo hasta mediados de la década, evidenciando la importancia y, a la vez, la contingencia de la disputa hegemónica.

Vimos también cómo, ante la creciente organización en movimientos de “desocupadxs”, se vieron desbordadas las estructuras tradicionales de organización comunitaria de los sectores populares. Fundamentalmente nos referimos a las agrupaciones vinculadas a la Iglesia y a los partidos políticos tradicionales (especialmente al Partido Justicialista). Cómo los sucesos originados en el interior del país difundieron el método y la identidad piquetera, homogeneizando a un sinnúmero de proyectos territoriales de barriadas populares y jerarquizando la potencia disruptiva para negociar con el Estado. En la tarea por recabar detalladamente en la composición ideológica del movimiento piquetero, identificamos tres grandes proyectos: el de la izquierda tradicional, de la “nueva izquierda” y el componente entonces minoritario, vinculado al movimiento nacional-popular. Ante la convocatoria de Néstor Kirchner al movimiento para integrar sus demandas y, consecuentemente, sus dirigentes al aparato estatal, las reacciones fueron disímiles. La izquierda partidaria tradicional, coherente con su aparato conceptual para leer e intervenir en la realidad, rechazó de plano esta posibilidad y continuó insistentemente con la metodología piquetera, al menos, hasta el año 2005. La vertiente nacional-popular, fundamentalmente condensada en lo que hoy es el Movimiento Evita y Libres del Sur y la fracción territorial de ATE (entonces, el Frente por Trabajo y Vivienda-FTV), decidieron integrar el Estado para “disputar desde adentro la orientación estratégica” del gobierno kirchnerista. Finalmente, el heterogéneo espacio autonomista rechazó la convocatoria, en base a argumentos fundados en una aversión generalizada a todo tipo de implicancia en el aparato institucional. Amparados en interpretaciones anti-estatalistas de raíz foucaulteana o de lecturas provenientes del autonomismo italiano, sumado al peso simbólico de la experiencia reciente y exitosa del movimiento zapatista en Chiapas, esta porción nada despreciable del movimiento piquetero instaba a la transformación permanente de la sociedad a partir de los trabajos “de base” en cada territorio, evitando “contaminarse” con el aparato estatal. La re-territorialización producto del desempleo (de la identidad obrerista a otra barrial), conectó también con una idea autonomista para pensar la disputa de poder frente a la estatalidad. La fuerza de la identidad localista reforzó alternativas de recreación del poder a nivel local, por sobre articulaciones estatalistas de mayor amplitud. Allí, identificamos la presencia del antagonismo fundamental entre el movimiento piquetero frente al Estado construido en el proceso de “politización” del desempleo de los noventa, como elemento habilitante de concepciones anti-Estado como la enunciada.

Reconocimos también la política de derechos humanos e inclusión mediante el consumo, como las respuestas que el flamante gobierno kirchnerista construía frente a dos “fantasmas” de la historia argentina: la violencia institucional y persecución política propios de la dictadura militar, y los altos niveles de desigualdad en los que se encontraba la sociedad para el año 2003. El discurso kirchnerista se constituía ubicando al consumo y los derechos humanos como elementos centrales frente al exterior neoliberal. En ese marco, su gubernamentalidad se encontraba permeada por racionalidades que convivían de manera ambigua: pudimos identificar iniciativas antagónicas a la forma mercantil propia del dispositivo neoliberal con otras tendientes a amplificar las esferas de lo social regidas por aquella “lógica” de mercado. La persistencia de la economía popular durante el kirchnerismo en términos cuantitativos y sus alteraciones cualitativas, fundadas centralmente en la dinamización del consumo, es tributaria de esa ambigüedad.

Concretamente, fueron las políticas tendientes a promover la exportación de materias primas las que permitieron generar los recursos con los cuales se edificó un amplio sistema de seguridad social, educativo y cultural, planificados y orientados bajo una racionalidad que tensiona la lógica hegemónica de mercado. Atravesada por aquel discurso construido *contra* el neoliberalismo y una gubernamentalidad híbrida, la economía popular transitó un período de transformaciones y organización permeado por sentidos que rastreamos desde su reciente emergencia. La fundación de la CTEP refleja esa ambigüedad constitutiva del kirchnerismo: la persistencia de un sector nada despreciable de trabajadorxs excluidxs del mercado formal, en simultáneo a la capacidad de organización por demandas que iban más allá de necesidades elementales típicas de los noventa y principios de siglo.

Más allá de cualquier supuesto valorativo, lo que nos interesa es remarcar la importancia de un diagnóstico preciso de este segmento de la población: teóricamente, la importancia de enfocar, desde la perspectiva analítica de la TPD, la encarnación de lógicas en actores específicos. De allí la preocupación por las condiciones de emergencia del sector, su organización, su potencia destituyente y su derrotero en la etapa kirchnerista. Su dirigencia, las lógicas comunitarias hibridadas con cierta pragmática de la subsistencia y los rasgos comunes al sector en ambas décadas. Reconocer las características mencionadas (y otras que trabajamos a lo largo del presente trabajo), son una condición fundamental para diseñar una política específica para un sector novedoso de la población argentina. Ese carácter, las condiciones de vulnerabilidad que le son constitutivas y, fundamentalmente, el tamaño de su población, vuelven imprescindible dicha tarea. Para ello, algunos comentarios finales a continuación.

### **Los límites son del pueblo: jacobinismo o poder popular**

La coexistencia “productiva” entre un discurso anti-neoliberal y tecnologías de gobierno híbridadas, de racionalidades diversas y combinadas, configuran al proyecto kirchnerista como fenómeno eminentemente ambiguo. La economía popular, como la porción social, cultural y económicamente más castigada en este contexto, da cuenta de dicha ambigüedad en toda su complejidad: identificamos persistencias y dislocaciones en el período mencionado respecto del modelo neoliberal. Una definición unívoca del “neoliberalismo”, evidentemente, conduciría a caracterizaciones que no contemplen dicha ambigüedad. Y, desde nuestra perspectiva, es una característica central para comprender procesos significativos ocurridos en los sectores populares durante la primera (larga) década de gobiernos posneoliberales en América Latina.

De alguna manera, lo que está en juego es la comprensión del fenómeno latinoamericano de inclusión de grandes mayorías durante la primera década del siglo XXI: un abordaje que intente ir más allá de los resultados positivos en términos de inclusión que arrojan las estadísticas, buscando mostrar nuevos aspectos del proceso que den cuenta de las implicancias marcadas por la ambigüedad de los procesos

políticos recientes. El fundamento gnoseológico subyacente, es la inquietud por el reflujo de los gobiernos de tinte “posneoliberal” a lo largo y ancho de la región de los últimos años. Sin problematizar la configuración subjetiva desatada, que incluya el rol del Estado en la redistribución de la riqueza, de los movimientos territoriales, la vocación “igualitaria” de futuros gobiernos populares puede redundar en la repetición de una dinámica que genere las condiciones para volver “aceptables” discursos antagónicos a los propuestos.

La ingeniería detrás de la política social, en sintonía con lo planteado, tendería a modificarse intentando que la inclusión sea acompañada por un proceso que no abone a la amplificación del espacio regido por lógicas meramente mercantiles. Ahora bien: esas lecturas eminentemente políticas deben funcionar como ordenadoras del diseño de iniciativas públicas, respecto de un modelo civilizatorio particular. Es decir, que para superar aquellas desigualdades que el dispositivo neoliberal produce, es necesario acordar “por la positiva” con un horizonte distinto, ordenado coherentemente en una gubernamentalidad acorde.

La vocación por superar las limitaciones del ciclo popular inaugurado con el siglo XXI en América Latina, encuentra en el abordaje de la economía popular una importancia insoslayable. Y su potencia radica no solamente en repensar estrategias de inclusión que no cimienten el terreno para que filtren discursos neoliberales, donde la contracción del consumo pone en jaque el desarrollo de un conjunto de políticas socio-culturales antagónicas al modelo individualizante hegemónico, sino fundamentalmente debido a que ese primer objetivo obliga a discutir y acordar un modelo civilizatorio paralelo. No se puede planificar una política social antagónica al neoliberalismo sin llenar de contenido un horizonte distinto que oriente las mediaciones entre el Estado y los trabajadores/as de la economía popular, que necesitan ser revisadas para no repetir errores del pasado. De otro modo: ¿cómo generar los anticuerpos necesarios para evitar la reproducción de la lógica mercantil en un proceso de inclusión de grandes mayorías, sin incorporar una lógica diferente que ordene la nueva gubernamentalidad?

Quizás aquí radique la mayor potencialidad del estudio de la economía popular: conocer las características identitarias de los sectores más postergados para, desde allí, indagar los efectos que tuvo una política redistributiva como la de gobiernos posneoliberales. Generar políticas sociales que incorporen en su formulación modificaciones a partir de las limitaciones precedentes en la disputa frente al neoliberalismo. Sumado a ello, la consecuente discusión respecto de qué es lo “no-neoliberal”: desde nuestra perspectiva, creemos haber mostrado sin ambages la persistencia de una población precarizada durante gobiernos posneoliberales, volviendo ostensibles también en un registro discursivo las implicancias de una política de fomento del consumo tal como ocurrió, al menos, en Argentina en los últimos años.

Ahora bien: desde un enfoque sustancial de la democracia, la inclusión en el acceso igualitario a bienes y servicios básicos es un “piso” fundamental, principio contrario al neoliberal. A su vez, desde nuestro enfoque teórico, la inclusión vía consumo no puede funcionar de manera unívoca como una “herramienta” del capital para expandir la lógica mercantil. En todo caso, se trata de reparar en las mediaciones que

derivaron en la proliferación de una lógica mercantil en lugar de otras formas posibles. Asociar directamente la capacidad de consumo con el neoliberalismo, entonces, podría cimentar un pensamiento aún más excluyente. De allí la importancia de reparar en los efectos concretos experimentados y generar otras mediaciones. Esas alteraciones, a su vez, necesitan de un horizonte construido que las justifiquen.

Decimos esto, a modo de conclusión, no solamente por los rasgos propios que adquirió la CTEP. Sino fundamentalmente, porque una evaluación crítica de los procesos populares de principios de siglo nos obliga a ir más allá de cualquier mirada estado-céntrica. Creemos que a las razones que expliquen las limitaciones de la etapa no debemos buscarlas *exclusivamente* en la iniciativa gubernamental. La forma de encarar nuestro abordaje admite escapar de una lógica estrictamente institucionalista, para incorporar otros elementos a la hora de pensar la disputa del poder y las articulaciones que, de manera contingente, estabilizan prácticas, saberes y sentidos. A modo de ejemplo: en nuestro trabajo pudimos ver cómo la potencia destituyente que reconocimos en el movimiento piquetero hacia finales de la década de 1990, como actor con capacidad para resquebrajar el discurso oficial, radicaba en su capacidad para mostrarse a sí mismo como la exclusión sobre la cual descansaba la estabilidad neoliberal. La centralidad que adquiere la “inclusión social” en el proceso post-2003 es sintomática de la potencia de aquél reclamo, a partir de la presencia de la desigualdad como ordenador de la política nacional hacia adelante. Allí, vemos las implicancias de acontecimientos que exceden o sobrepasan los límites de un análisis tradicionalmente institucionalista. Si identificamos efectos concretos de sectores y demandas tales como los señalados, entonces una conclusión se nos impone: no podemos pensar las “limitaciones” de los gobiernos nacional-populares *solamente* atendiendo a la agencia estatal.

Desde esta perspectiva, resulta verosímil la caracterización del kirchnerismo como proyecto “jacobino”<sup>10</sup>. Señala Rinesi que algunas de las demandas y derechos novedosos de la etapa kirchnerista fueron impulsados “de arriba hacia abajo”, sin base organizada con correlación de fuerzas para “arrancarle” al gobierno determinada demanda. Pero, fundamentalmente, sin consensos claros y mayoritarios en la sociedad sobre los cuales asentar la legitimidad de esas iniciativas.

Las transformaciones ocurridas en la formación social argentina durante los noventa, en particular en lo referido a la población de trabajadorxs, reconfiguraron el escenario en el cual se desarrollaban disputas de poder. Por ello, resulta insoslayable la importancia del trabajo político de la CTEP: la capacidad para unificar la multiplicidad propia del “mundo popular”, resultante del proceso de desindustrialización y descolectivización neoliberal. El surgimiento de la CTEP, con toda su magnitud y capacidad de intervención política a tan solo diez años de aquél histórico diciembre, refleja una capacidad nada despreciable de

---

<sup>10</sup> Eduardo Rinesi identifica cuatro modulaciones que convivieron y permearon la política de los gobiernos kirchneristas: una nacional-popular, otra típicamente liberal vinculada a derechos y garantías individuales, otra republicana en su discursividad por el “bien común” y, finalmente, el componente jacobino que comentamos. Detalla dicha caracterización en una clase magistral alojada en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=QdkVgtV1IH8>

reactualización estratégica. Pero su fundación no solo sorprende por su velocidad, por el tamaño de la organización, o por tratarse de la porción más vulnerable de la sociedad argentina: la CTEP refleja una lógica de agrupamiento reivindicativa con mucha potencia para realizar transformaciones que afectan intereses concentrados en la Argentina.

En adelante, será crucial para el destino de nuevas “oleadas” populares su consolidación y reactualización bajo nuevos escenarios políticos. Esto debido a la importancia que adquiere para todo proceso de transformación la existencia de agrupamientos corporativos con capacidad de construir acuerdos en demandas y correlación de fuerzas para su conquista. Maxime, si reconocemos que muchos de los avances en derechos y conquistas durante el kirchnerismo fueron bajo esa lógica jacobina. Difícilmente una nueva oleada de gobiernos populares en Latinoamérica pueda llegar más lejos que la de comienzos de siglo si las transformaciones estructurales no son el resultado de la organización de sectores excluidos, en todas las dimensiones que el neoliberalismo produce, en diálogo y apuntaladas por la institucionalidad.

Siguiendo el rastro del poder detrás de la trayectoria de la población estudiada, concluimos con la vaga, pero incontrastable certeza, de que la organización es el único medio para una transformación social con potencial hegemónico a partir del empoderamiento de sectores excluidos, es decir, del convencimiento de la necesidad y la propia capacidad para ello. La organización de trabajadorxs de la economía popular en Argentina, entonces, es signo de buena salud para contextos regresivos como el actual. Pero, por sobre todas las cosas, ubica a los sectores excluidos en mejores condiciones para desarrollar transformaciones estructurales en un futuro no muy lejano:

*“Como el poder popular favorece los procesos de independencia y autoconocimiento de las clases subalternas, con su extensión tiende a desaparecer cualquier idea de fuerza ciega que rige las sociedades. Sirve así para superar el fatalismo existencial y la desesperanza que las clases dominantes inoculan en las subalternas.” (Mazzeo, 2006)*

# Bibliografía

- Andujar, A. (2011). De maestras y piqueteras. Los cortes de ruta en Neuquén (1997). *Travesía*, 5-39.
- Auyero, J. (2002). Fuego y barricadas. *Nueva Sociedad*, 144-162.
- Barros, S. (2002). *Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991*. Córdoba: Alción Editora.
- Bayón, M. C. (2003). La erosión de las certezas previas: significados, percepciones e impactos del desempleo en la experiencia argentina. *Perfiles Latinoamericanos*, 51-77.
- Beccaria, L., & Lopez, N. (1996). *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*. Buenos Aires: UNICEF y Losada.
- Beccaria, L., & Maurizio, R. (2012). Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010. *Desarrollo económico*, 205-228.
- Cané, M. (2016). *Lo político en Ernesto Laclau. Sobredeterminación y pluralidad en la constitución de las identidades políticas*. Buenos Aires: IAES-UNSaM.
- Carbonelli, M. A. (2015). Militantes de Francisco: religión y política en tiempos del Papa argentino. *Nueva Sociedad*, 53-65.
- Castel, R. (2007). *La metamorfosis de la cuestión social*. Buenos Aires: Paidós.
- Castro Gomez, S. (2010). *Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Cerrutti, M. (2003). *Utexas*. Obtenido de <http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/cerrutti.pdf>
- Coraggio, J. L. (1996). *Coraggio Economía*. Obtenido de <http://coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/alternativas.pdf>
- Dagatti, M. (2014). *Felsemiotica*. Obtenido de <http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Dagatti-Mariano-Contribuciones-para-una-cartograf%C3%ADa-discursiva-del-primer-kirchnerismo.pdf>
- Daín, A. (2011). Ontología de la sobredeterminación. En *Ontología políticas*. Buenos Aires: Imago.
- De Soto Polar, H. (1987). *El otro sendero: la revolución informal*. Lima: Sudamericana. Obtenido de [https://www.elcato.org/pdf\\_files/Prologo-Vargas-Llosa.pdf](https://www.elcato.org/pdf_files/Prologo-Vargas-Llosa.pdf)
- del Frante, E. y. (2013). *Portal de la economía popular, social y solidaria*. Obtenido de <http://extension.unicen.edu.ar/jem/completas/374.pdf>
- Derrida, J. (1966). La escritura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. *Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre* (pág. sn). Baltimore: Universidad Jhon Hopkins.

- Fair, H. (2008). Los cambios en la representatividad social de la convertibilidad. *Querencia*, sn.
- Féliz, M., & Lopez, E. (2010). La dinámica del capitalismo periférico postneoliberal-neodesarrollista. Contradicciones, barreras y límites de la nueva forma de desarrollo en Argentina. *Herramienta*, sn.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: FCE.
- Fridman, D. (2008). *apuntescecy.com.ar*. Obtenido de <http://www.apuntescecy.com.ar/index.php/apuntes/article/view/124/109>
- Fumero, R. y. (2017). Una aproximación al estudio de los consumos financiarizados de los sectores populares de Buenos Aires. *Economía y sociedad*. Obtenido de <http://www.scielo.sa.cr/pdf/ey/v22n52/2215-3403-ey-22-52-48.pdf>
- Funes, A. (2016). En el comienzo de todo... Los orígenes constitutivos de la identidad kirchnerista durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). *Temas debates*. Obtenido de [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1853-984X2016000200003](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-984X2016000200003)
- Gago, V. (2013). *Lobo suelto*. Obtenido de <http://anarquiacoronada.blogspot.com/2013/11/el-consumo-popular-como-marca-de-epoca.html>
- Gago, V. (2014). *La razón neoliberal*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Gibson Graham, J. K. (2002). Intervenciones post-estructuralistas. *Revista Colombiana de Antropología*.
- Grimson, A. (2004). La experiencia argentina y sus fantasmas. En A. Grimson, *La cultura en las crisis latinoamericanas* (págs. 177-193). Buenos Aires: CLACSO.
- Groppi, A. (2010). Heterogeneidad y política en Bataille y Laclau. *Studia Politicae*.
- Hagman, I. (2014). *La Argentina kirchnerista en tres etapas*. Buenos Aires: CAMBIO.
- INDEC. (2003). *Nueva metodología para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)*. Buenos Aires.
- Jozami, E. (1985). *Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Kessler, G. (1996). *Algunas implicancias de las experiencias de desocupación para el individuo y su familia*. Buenos Aires: Unicef y Losada.
- Laclau, E. (1986). ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política? En E. Laclau. Obtenido de <http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/37%20-%20Laclau%20-%20Por%20qu%C3%A9%20los%20significantes%20vac%C3%ADos%20son%20importantes%20para%20la%20politica..pdf>
- Laclau, E. (2000). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Laclau, E. y. (2006). *Hegemonía y estrategia socialista*. Buenos Aires: FCE.
- Longa, F. (2003). *Formas organizativas y subjetividad política. Una lectura generacional de los 'ethos militantes' en el Frente Popular Darío Santillán*. Buenos Aires: FSOC.

- Longa, F. (2018). ¿Tirando viejos por la ventana? Militancia juvenil y gestión estatal en el Movimiento Evita de Argentina (2005-2015). *Ánfora*, 197-218.
- Marshall, A. (1996). Weakening employment protection in Latin American: incentive to employment creation or to increasing instability. *International Contributions to Labour Studies*, 29-48.
- Martínez, M. (04 de 2016). *El liberalismo político: de Kant a Mill*. Obtenido de La Veta blog: <https://lavetablog.files.wordpress.com/2016/04/el-liberalismo-politico-de-kant-a-mill.pdf>
- Mazzeo, M. (2006). *El sueño de una cosa (Introducción al poder popular)*. Buenos Aires: El Colectivo.
- Merlinsky, M. (2002). Las consecuencias sociales de la desocupación en Argentina. El desempleo y sus múltiples modos de exclusión. *Scripta Nova*, sn. Obtenido de <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-36.htm>
- Montero, A. S. (2012). Significantes vacíos y disputas por el sentido en el discurso político: un enfoque argumentativo. *Identidades*, 1-25. Obtenido de <https://iidentidadess.files.wordpress.com/2012/12/1-identidades-3-2-2012-montero.pdf>
- Morel, M. P. (2015). *Sociales UBA*. Obtenido de <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2015/10/40-45-MODELOSMorel.pdf>
- Mrejen, M. (2013). Racionalidades políticas y políticas sociales. Un análisis de las transferencias condicionadas de ingresos en la Argentina: el caso de la AUH. *Cátedra paralela*.
- Muñoz, M. A. (2006). Laclau y Ranciere: algunas coordenadas para la lectura de lo político. *Andamios*, 119-144.
- Muñoz, M. A. (2012). *Sísifo en Argentina: orden, conflicto y sujetos políticos*. Villa María: Eduvim.
- Muñoz, M. A. (2017). Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina 2011-2017). *Críticas y resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos*, 22-52.
- Natalucci, A. (2011). Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales en Argentina 2001-2010. *Open edition*, sn.
- Natalucci, A. (23 de 04 de 2012). *Americo*. Obtenido de [http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/DocumentoTrabajo%239\\_Natalucci.pdf](http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/DocumentoTrabajo%239_Natalucci.pdf)
- Noceti, M. B. (15 de 01 de 2013). *Biblioteca Digital UNS*. Obtenido de [http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2525-12952013001100003&lng=es&nrm=iso](http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2525-12952013001100003&lng=es&nrm=iso)
- Nosotros. (20 de 12 de 2011). *CTEP*. Obtenido de <http://ctepargentina.org/nosotros/>
- Obrera, P. (12 de 4 de 2012). Ocupaciones, fábricas recuperadas y gestiones obreras. *Prensa Obrera*, pág. sn. Obtenido de <https://prensaobrero.com/prensaObrera/1217/sindicales/ocupaciones-fabricas-recuperadas-y-gestiones-obreras>
- OIT. (2013). *Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina*. Buenos Aires: OIT.

- Palomino, H. (2003). Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. *Nueva Sociedad*.
- Paulizzi, C. (07 de 2015). *Scielo*. Obtenido de [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1514-68712015000100010](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712015000100010)
- Pérsico, E. M. (2014). *Organización y economía popular: nuestra realidad*. Buenos Aires: Asociación civil de los trabajadores de la economía popular.
- Pitrola, N. (25 de 8 de 2016). Más que nunca, congreso de bases de la CGT. *Prensa Obrera*, pág. sn. Obtenido de <https://prensaobrera.com/prensaObrera/1425/politicas/mas-que-nunca-congreso-de-bases-de-la-cgt-1>
- PROCELAC. (2013). *Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares*. MPF.
- Rabossi, F. (18 de 07 de 2014). <https://es.scribd.com/>. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/234400514/Rabossi-Los-caminos-de-la-informalidad-pdf>
- Rapoport, M. (2018). La política económica de la dictadura militar: todo el poder a la elite. *Revista Zoom*.
- Rath, C. (18 de 8 de 2016). El debut de la pata social de la iglesia. *Prensa Obrera*, pág. sn. Obtenido de <https://prensaobrera.com/politicas/32053-el-debut-de-la-pata-social-de-la-iglesia>
- Razeto, L. (2002). <http://www.luisrazeto.net/>. Obtenido de <http://www.luisrazeto.net/content/i-la-economia-popular-o-mal-llamada-informal>
- Redacción. (07 de 11 de 2016). *El ojo digital*. Obtenido de <http://www.elojodigital.com/contenido/15754-desigualdad-en-la-argentina-2003-2016-un-cambio-con-ganadores-y-perdedores>
- Redes, C. (1998). *Desocupación y trabajo. Percepciones de la situación y de los medios para resolverla en nueve barrios del partido de La Matanza*. Buenos Aires: PIMSA.
- Retamozo, M. (2005). *Trabajo, subjetividad y acción: desempleo, sentidos y acción colectiva*. Obtenido de Aset: <https://www.aset.org.ar/congresos/7/08014.pdf>
- Retamozo, M. (2009). Las demandas sociales y el estudio de los movimientos sociales en Argentina. *Cinta de Moebio*, 110-127.
- Reynares, J. M. (2013). Teoría política del discurso e identidades políticas: algunas consideraciones epistemológicas. *Pensar*.
- Reynares, J. M. (2014). *El neoliberalismo cordobés. La trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987 y 2003*. Córdoba: CEA.
- Reynares, J. M. (2017). Neoliberalismo y actores políticos en la Argentina contemporánea. *Perfiles latinoamericanos*, 279-299.
- Roig, A. (2015). Financiarización y derechos de los trabajadores de la economía popular. *Desigualdad y democracia*, sn.

- Rossi, M. Á. (2011). *La lógica del neoliberalismo a partir de la interlocución de Immanuel Kant y la impronta de Michel Foucault*. Buenos Aires: Luxemburg.
- Sala, G. (2012). Cobertura provisional, empleo y desempleo entre los adultos mayores argentinos. *Revista latinoamericana de población (RELAP)*.
- Santillán, D. (2001). Entrevista a Darío Santillan. (sn, Entrevistador) Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=TAEYMtO05AY>
- Seiffer, T. K. (2011). El gasto social como contención de la población obrera sobrante durante el kirchnerismo y el chavismo (2003-2010). En *Cuadernos de trabajo social* (págs. 33-47).
- Seman, P. (2003). El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares. En M. Svampa, *Desde abajo: las transformaciones de las identidades sociales*. Buenos Aires: UNGS-Biblos.
- Serra, H. (2015). *academia.edu*. Obtenido de [http://www.academia.edu/15875746/Somos\\_lo\\_que\\_falta.\\_El\\_sujeto\\_de\\_la\\_Econom%C3%ADa\\_Popular\\_Latinoamericana\\_en\\_el\\_debate\\_de\\_la\\_liberaci%C3%B3n\\_a\\_la\\_resistencia\\_y\\_las\\_alter\\_nativas\\_actuales](http://www.academia.edu/15875746/Somos_lo_que_falta._El_sujeto_de_la_Econom%C3%ADa_Popular_Latinoamericana_en_el_debate_de_la_liberaci%C3%B3n_a_la_resistencia_y_las_alter_nativas_actuales)
- Serra, H. (2017). *La forma feria en la Economía Popular. Arraigo, sentidos y regulación del trabajo en la Argentina pos neoliberal. El caso de Villa el Libertador - Córdoba*. Córdoba: Escuela de Trabajo Social - UNC.
- Servio, M. (2012). Rupturas y continuidades en la política social contemporánea: la asignación universal por hijo para protección social. *Libertas*. Obtenido de <https://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas/article/view/1956/1388>
- Soldano, D. (2011). <http://www.insumisos.com/>. Obtenido de <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Subjetividad%20y%20vida%20politica.pdf>
- Svampa, M. (2007). Profunda ruptura de lealtades. *Le Monde Diplomatique*.
- Svampa, M. (2011). Obtenido de <http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo56.pdf>
- Svampa, M. (2011). Argentina, una década después. *Nueva Sociedad*, 17-34.
- Svampa, M., & Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, M., & Pereyra, S. (12 de 2004). Obtenido de <http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo10.pdf>
- Yabkowski, N. (2017). Los sentidos del Estado en la identidad kirchnerista. *Postdata*, sn.